

Causa Rol N° 114.033

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, a ocho de febrero dos mil veinticuatro.-

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....2 - 4

Resumen ejecutivo.....4 - 5

Actuarios de tramitación y dato técnico.....5

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

Declaraciones (10).....6 - 38

Documentos (20).....39 - 45

Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....45 - 50

Calificación jurídica de los hechos.....50-55

Concepto de Lesa Humanidad.....56 - 58

Declaraciones indagatorias y sus respectivos análisis.....58 - 105

En cuanto a las defensas.....105 - 108

Consideraciones previas al análisis de la defensa:

A. Análisis del auto acusatorio.....108 - 110

B. Estado de Derecho.....110 - 115

C. Obligación de Investigar..... 115 - 132

D. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán..... 132 - 141

E. Convenios de Ginebra.....141 - 142

Análisis de las defensas específicas.....142 - 146

Excepciones de fondo..... 146 - 147

Acusación particular y su análisis..... 147

Reflexiones sobre lesa humanidad147 - 153

Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

A. Atenuantes de Responsabilidad Penal..... 153 - 154

B. Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual..... 154 - 157

C. Agravantes de Responsabilidad Penal.....157 - 158

Determinación de la Pena.....158 - 159

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....160-167

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

Acciones civiles interpuestas.....167 - 169

Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, en representación del Consejo de Defensa del Estado.....169 - 175

Análisis de la contestación de la demanda civil.....175 - 187

Acreditación probatoria del daño moral.....187 - 188

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....188

ASPECTOS RESOLUTIVOS.....188-189

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 114.033** del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de secuestro calificado de Jorge Eduardo Calderón Otaiza y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

- 1. **LEONARDO REYES HERRERA**, cédula de identidad N° 4.777.149-8, ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, actualmente cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.237 a 1.239 del tomo IV)
- 2. **CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**, cédula de identidad N° 6.961.197-4, ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, actualmente cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.240 a 1.243 del tomo IV)

A fs. 2 y siguientes (Tomo I), se inició la causa mediante querella criminal, presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney subsecretario del interior.

A fs. 1.105 a fs. 1.158 (Tomo III) con fecha 06 de diciembre de 2022, se sometió a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva a **LEONARDO REYES HERRERA y CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**, como **AUTORES** del delito de secuestro calificado, **en su carácter**

de lesa humanidad, en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA**, perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco, el cual fue confirmado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. 1.199 (Tomo IV)

A fs. 1.235 (Tomo IV), con fecha 06 de abril de 2023, **se declaró cerrado el sumario.**

A Fs. 1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV) con fecha 29 de abril de 2023 se acusa a **LEONARDO REYES HERRERA y CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**, como **AUTORES** del delito de secuestro calificado, **en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA**, perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco.

A fs. 1.304 y siguientes (Tomo IV) el abogado Héctor Méndez Molina, en representación de Aurora del Carmen Calderón Otaiza interpone demanda civil e contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer, por la suma total de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de reparación íntegra y daño moral.

A fs. 1.355 y siguientes (Tomo IV) el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, interpuso **acusación particular.-**

A fs. 1.535 y siguientes (Tomo V), **contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer** solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas (**1. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada de la demandante, y por haber sido ya reparada. 2. Excepción de prescripción extintiva**); y negar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios **deducida por el abogado Héctor Méndez** en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su forma de cómputo.

A fs. 1.582 y siguientes (Tomo V), el abogado Patricio Contreras Boero en representación de **Crisóstomo Ferrada Carrasco y Leonardo Reyes Herrera** contesta acusaciones de oficio y particulares.

A fojas 1.601 (Tomo V), con fecha 14 de septiembre de 2023, se recibió la causa a prueba.

A fojas 1.760 (Tomo V), con fecha 20 de noviembre de 2023, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 1.761 (Tomo V), con fecha 20 de noviembre de 2023, se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fs. 1.766 y 1.771 (Tomo V) se dictaron medidas para resolver.

A fs. 1.772 (Tomo V), con fecha 08 de febrero de 2024, se trajeron los autos para fallo.

RESUMEN EJECUTIVO:

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 1° AL 40°):**

1°) al 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (10) y Documentos (20); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) Declaración Indagatoria de Leonardo Reyes Herrera; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°) Declaración Indagatoria Crisóstomo Ferrada Carrasco; 12°) y 13°) Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso 14°) Defensa del abogado Patricio Contreras Boero en representación de Leonardo Reyes y Crisóstomo Ferrada; 15°) al 20°) **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: A.** Resumen ejecutivo del auto acusatorio. **B.** Estado de Derecho. **C.** Obligación de investigar. **D.** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. **E.**; 21°) Análisis de la defensa específica; **Excepciones de fondo:** 22°) Prescripción de la acción penal; 23°) Acusación particular del abogado Ricardo Lavín Salazar; 24°) Análisis de la acusación particular; 25°) a 31°) Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:** 32°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 33°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 34°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 35°), 36°) y 37°) Determinación de la pena; 38°), 39°) y 40°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 41° al 46°:**

41°) *Demanda Civil interpuesta por la abogada Marcela Fuentes Moreno; 42°)* *Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 43°)* *Análisis de la contestación de la demanda civil; 44°)* *Acreditación probatoria del daño moral; 45°)* *Montos; 46 °)* *reajustes e intereses de las sumas demandadas.*

II. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a.** Fecha de inicio de la causa: 30 de enero de 2013.-
- b.** Actuario de Tramitación Sumario: Gonzalo Millalén Gutiérrez.
- c.** Actuario de Tramitación Plenario: Cecia Cruces Valdebenito.
- d.** Tomos: V
 - Tomo I: De fs. 1 a fs. 388
 - Tomo II: De fs. 389 a fs. 766
 - Tomo III: De fs. 767 a fs. 1.159
 - Tomo IV: De fs. 1.160 a fs. 1.527
 - Tomo V: De fs. 1.528 en adelante
- e.** Fojas: 191
- f.** Considerandos: 46

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que fs. 1.105 a fs. 1.158 (Tomo III) con fecha 06 de diciembre de 2022, se sometió a proceso a **LEONARDO REYES HERRERA y CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**, como **AUTORES** del delito de secuestro calificado, **en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA**, perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco, el cual fue confirmado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. 1.199 (Tomo IV)

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de **fs. 1.245 y siguientes (Tomo IV)**, como las querellas

deducidas antes individualizadas, sin perjuicio, del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario, que en lo pertinente y sustancial exponen:

A. DECLARACIONES (10).

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MÓNICA ORIANA CADERÓN OTAÍZA | 6. ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO |
| 2. AURORA DEL CARMEN CALDERÓN OTAÍZA | 7. HÉCTOR GUTIÉRREZ PALMA |
| 3. PABLO AQUILES ALISTER CONTRERAS | 8. NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN |
| 4. BERTHOLD ERWIN BOHN SAUTEREL | 9. HERIBERTO RIVAS ALARCÓN |
| 5. HERIBERTO PEREIRA ROJAS | 10. LUIS ALBERTO SOTO PINTO |

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A1. MÓNICA ORIANA CADERÓN OTAÍZA, (26 años a la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fs. 60 a fs. 62 (Tomo I), de fecha 27 febrero de 2013, señala que para el año 1973 tenía la edad de 26 años, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys y sus hermanos Aurora, quién era menor de edad en esa época y Jorge Eduardo. Según su recuerdo, residían en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455 de la Comuna de Padre Las Casas, Temuco. Respecto de las actividades de su hermano Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que primer lugar que para el año 1973 tenía la edad de 28 años, trabajaba en una farmacia de nombre CANAEPO , ubicada en el centro de Temuco, y de noche estudiaba en la Universidad De La Frontera, la carrera de Comercio. Respecto de su militancia política, señala que militaba en el Partido Socialista, siguiendo la tradición familiar, ya que su padre también militaba en dicho partido político. Respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano Jorge, añade que esta se

llevó a efecto a eso de las 17:00 horas del día 30 de septiembre de 1973, por personal de Carabineros de Chile de dotación de la Tenencia de Padre Las Casas. Según su recuerdo, su fallecido padre atendió a los Carabineros, quienes le mencionaron que iban a detener a su hermano por pertenecer a la Unidad Popular y al MIR, no obstante las explicaciones de su padre en el sentido de hacerles presente que Jorge no pertenecía al MIR, Carabineros se lo llevó de igual forma, señalándole que sería llevado hasta la Tenencia de Padre Las Casas para sostener una conversación con el Oficial a cargo de ella, que correspondía al Teniente Morales y que después quedaría en libertad. Es así que su hermano se fue llevado hasta dicha Tenencia, y al darse cuenta que no regresaba, a la mañana siguiente su padre fue hasta la unidad de Carabineros a consultar por Jorge, incluso se entrevistó con el Teniente Morales, quién le manifestó que su hermano estaría detenido hasta aclarar si efectivamente pertenecía al MIR, y una vez establecida dicha situación sería dejado en libertad en horas de la tarde es ese día, comentándole, además, que esa acusación la habrían hechos un grupo de amigos de su hermano, según él eran cuatro hombres y una mujer, de quienes no quiso dar identidades, pero le manifestó a su padre que conversaría con ellos para aclarar la veracidad de la acusación y que probablemente Jorge quedaría en libertad en horas de la tarde. En horas de la noche de ese mismo día se apersonó en su domicilio el Teniente Morales, quién le informó a su padre que las cinco personas que habían acusado a su hermano se habían retractado de sus dichos, señalando que justo en los momentos que se encontraba efectuando esa diligencia fuera de la unidad policial, llegó personal de la Fuerza Aérea de Chile, y se habían llevado a su hermano junto a otros detenidos hasta la Base Aérea Maquehue, lugar donde había quedado en calidad de detenido. Debido a la situación antes mencionado, a la mañana siguiente, su padre concurrió hasta la Base Aérea Maquehue a consultar por su hermano, donde tomó contacto con un Suboficial de nombre Heriberto Rivas Delgado, a quién conocía ya que era vecino, incluso su hijo Heriberto, quién también era de la Fuerza Aérea, era amigo de Jorge. Según lo comentado por su padre, Heriberto Rivas le habría manifestado que era efectivo que Jorge ahí se encontraba, pero que iba a ser trasladado a una

isla, no recuerda cual, pero ignora si esa situación se llevó a efecto. No satisfecho con la respuesta que Rivas le dio, su padre fue en dos oportunidades más hasta la Base Aérea, siendo atendido la segunda vez por otro militar quién le dijo que Jorge ya no estaba en la base y la última vez que fue lo amenazaron de muerte si seguía averiguando. Por lo antes señalado, su padre viajó a Santiago y se dirigió a la Vicaría de la Solidaridad, donde dio cuenta de los hechos antes expuestos. Hace presente que perdieron el rastro de Jorge en la Base Aérea y su padre por años hizo diligencias para dar con su paradero, pero nunca obtuvo resultado alguno. Nunca conoció a una persona de nombre Nelson Barrera. Solamente recuerda a Nancy Olea y a Luz López, quienes eran vecinas de sus padres, pero hace años que no tiene noticias de ellas. Respecto a si hubo otros testigos cuando detuvieron a su hermano, señala que aparte de la familia había una amiga de su madre de nombre Julia, de quién ignora mayores antecedentes, pero sabe que se encuentra fallecida, y José Henríquez Flores, quién es su marido, pero en esa época era su novio. En relación a las identidades de los Carabineros que detuvieron a su hermano, señala que ignora esos antecedentes. Lo que sí tiene claro es que hubo una persona que vio a su hermano en la Base Aérea Maquehue, y corresponde a Heriberto Rivas Delgado, quien de manera discreta llegó una noche hasta su domicilio y les comentó que había visto a Jorge llegar a la Base golpeado y con su mandíbula destrozada, ignorando donde fue llevado con posterioridad. Respecto a los amigos de su hermano, señala que no recuerda sus identidades, pero sabe que todos eran del mismo barrio. Solo recuerda a una mujer que se llamaba Gisela Melinao.

En declaración judicial de fs. 71 a fs. 72, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), señala que ratifica su declaración extrajudicial, agregando que ese día llegaron varios carabineros a detener a su hermano. Además, fueron testigos de esa detención su hermano menor, Aurora, y su novio, actualmente su cónyuge, José Henríquez. A su hermano se lo llevaron en un camión de Carabineros. Los uniformados no llevaban orden escrita para detener a su hermano, solo una orden verbal del Teniente Morales Cravero. Supieron que un Carabinero de apellido Hueche fue quien participó en las torturas de Jorge Eduardo. No recuerda las

identidades de los demás carabineros que participaron de su detención. Su padre, actualmente fallecido, fue quien inició las gestiones judiciales para obtener noticias por la desaparición de Jorge Eduardo. Heriberto Rivas, hijo, fue quien de forma discreta llegó una noche a su casa y les indicó a ella y su madre, que su hermano había llegado a la Base Aérea de Temuco, con su mandíbula destrozada. Conoce a Heriberto Rivas ya que vivían en el mismo sector en Padre Las Casas. No cree que su hermano se haya ido fuera de Chile, ya que en poder de ellos quedó su cédula de identidad.

A.2. AURORA DEL CARMEN CALDERÓN OTAÍZA, (11 años a la época de los hechos. En declaración extrajudicial de fs. 65 a fs. 66 (Tomo I), de fecha 18 de marzo de 2013, señala que para el año 1973 tenía 11 años de edad, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys Inés, en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455, comuna de Padre Las Casas, Temuco. Hace presente que sus hermanos Mónica Oriana y Jorge Eduardo, ambos mayores que ella, también residían en el mismo domicilio. Respecto a Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que él era militante del Partido Socialista de Chile, al igual que su fallecido padre. Jorge, para el año 1973, tenía la edad de 26 años, era estudiante universitario de la Universidad La Frontera de Temuco, y a la vez trabajaba en una farmacia ubicada en el centro de Temuco. En cuanto a la detención de su hermano, señala que son pocos los recuerdos que tiene de esa situación, debido a la poca edad que tenía en esa época, pero tiene claro que su detención se llevó a cabo en su domicilio particular por personal de Carabineros de la Tenencia de Carabineros de Padre Las Casas. Ese día ella se encontraba en el segundo piso del inmueble junto a Jorge, su hermana Mónica y su cuñado José Manuel, cuando llegaron los efectivos policiales, quienes ingresaron violentamente al hogar e ingresaron hasta la escalera que da al segundo piso, donde uno de los carabineros llamó a su hermano, quién bajo acompañado por ella, para luego ser llevado detenido por los Carabineros, quienes no explicaron el motivo de su detención. El hecho fue cerca de las 17 horas, y según su recuerdo, su padre esperó un par de horas para ir a preguntar por su hermano a la Tenencia, donde no obtuvo respuestas

satisfactorias, incluso nunca se la permitió verlo. Por otra parte, posteriormente se enteró que Jorge fue llevado hasta la Base Aérea Maquehue, donde finalmente se le pierde el rastro. Hace presente que un amigo de la familia, cuya identidad no recuerda, quien en esos años pertenecía a la Fuerza Aérea le comentó a sus padres que había visto a Jorge en muy malas condiciones físicas al interior de la Base Aérea, y que frecuentemente era torturado. Es lo único que puede aportar. A pesar de que ella y sus familiares suponen que Jorge fue ejecutado al interior de la Base Aérea Maquehue, nunca supieron donde podrían estar sus restos mortales.

En declaración judicial de fs. 73, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial, agregado que a pesar de su corta edad, recuerda que fueron Carabineros de la Tenencia de Padre Las Casas quienes detuvieron a su hermano. Sin embargo, desconoce las identidades de ellos. Es la primera vez que declara por la detención y desaparición de su hermano. Nunca le correspondió efectuar declaraciones ante alguna comisión especial o Tribunal. Recuerda que antes de la detención de Jorge Eduardo y posterior al 11 de septiembre de 1973, su casa fue allanada en varias oportunidades. Esos allanamientos eran efectuados por personal de Carabineros de Padre Las Casas, desconociendo las identidades. Además, se efectuaban controles a las personas que entraban y salían de su hogar. No recuerda la identidad exacta de la persona perteneciente a la Fuerza Aérea y que vivía en su sector, quien habría dado noticias acerca de la permanencia de Jorge Eduardo en la Base Aérea Maquehue.

A3. PABLO AQUILES ALISTER CONTRERAS (38 años de edad para el año 1973), quien declaro de fs. 259 a fs. 261, (tomo I) y de fs. 308 (tomo I).

En declaración judicial prestada con fecha 06 de agosto de 2014, rolante a de fs. 259 a fs.261 (tomo I). Ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 82 y 83 (no existe declaración de aquel en esas fojas en la causa), que en el acto le ha sido leída. Sin embargo, aclara que para la época él no tenía conocimientos de administración, y su concurrencia a la base aérea era para efectos de consultar

con el comandante Pacheco acerca de las gestiones que pensaba hacer en beneficio del servicio que le correspondió administrar, en este caso Socoagro. Puntualiza que en una de esas oportunidad fue cuando vio alrededor de 10 o 15 personas, no pudiendo precisar el número debido al tiempo transcurrido, las cuales se encontraban en la galería frente a la comandancia, momento en que reconoció a una persona joven, alta, delgada, que él ubicaba como funcionario administrativo del SAG. Añade que a un cabo de la Fach le preguntó por esta persona, acerca de cuál era su situación, contestándole este último que estaban para verificar domicilio e identificación. Detalla que estas personas deben haber estado hace mucho tiempo, ya que vio que algunas oscilaban, motivo por el cual le dijo al cabo si acaso había alguna banca para que estas personas se sentaran. Luego, y respecto a Callis, indica que en una oportunidad lo vio y se lo presentaron, pero por información se enteró que era muy habitual en la base y con bastante influencia. Infundía temor. Luego aduce que en otra oportunidad, lo vio cuando fue a Pitrufquén por su condición de interventor del SAG, que aquel se encontraba en el cargo de gobernador de Pitrufquén. Que como él tenía el grado de subteniente de la Fach, Callis imponía su grado para no solucionar el problema que él estaba creando en el SAG, y que consistía en que posterior al 11 de septiembre llegaron muchas camionetas de propiedad del SAG y de las cuales no se conocía su paradero. Lo que él deseaba haber era recuperar las que tenía la gobernación de Pitrufquén para llevarlas a remate, hecho que Callis impedía, ya que no se las quería entregar. Indica que posterior a ello nunca más lo volvió a ver. Agrega que para el año 1973 era profesor de la Universidad Técnica del Estado de Temuco, en la asignatura de Geología y principios de riego, en horario vespertino; también hacía clases un día en la Universidad Austral de Valdivia, por lo que no tenía tiempo disponible que no fuera otra actividad fuera de la intervención y de las clases. Tal es así que a fines de octubre de 1973 habló con el comandante Pacheco para los efectos de que lo relevara de su obligación militar y lo reintegrara a tiempo completo a sus funciones como funcionario del SAG. Que aquel fue amable con él y lo autorizó a no usar uniforme y reintegrarse a las funciones civiles. En virtud de lo anterior, justifica que no participó en ninguna actividad de índole propiamente militar, tales como desfiles, integrar patrullas, menos interrogar personas ni presenciar actos de tortura en la base aérea de Maquehue. Precisa que una sola noche le tocó hacer guardia de las 19:00 horas a las 07:00 AM, dice que era una guardia bien especial, porque a las 21:00 horas ya se iban a dormir. En el fondo, arguye que

era un formalismo. Luego indica que por comentarios supo acerca de la existencia de dos grupos operativos, los cuales eran llamados "los chicos malos". Nunca conoció los nombres de quienes integraban esos grupos, pero era vox populi el conocimiento de su existencia. Que él cree que estos eran los encargados de los allanamientos y de todas las actividades operacionales militares. Manifiesta que de las varias veces que fue al casino de la base, nunca se comentó que hubiera torturas en la base aérea. Colige que había hartos helicópteros en la base aérea, alrededor de 25. Que no notó que haya aumentado el N° de éstos posterior al 11 de septiembre. Como era una escuela de helicópteros, se volaba harto, tanto de día como de noche. Explica que lo único que supo respecto de un operativo en helicópteros, fue que en una ocasión vio en la base uno de estos, el cual estaba arriba de un camión con la cola destruida. Al preguntar, el propio capitán César Tejos le dijo que había ido a un operativo a Neltume y se había accidentado, que un cable que atravesaba el valle lo tomó de la cola. Esto debe haber sido en 1973. Respecto de la víctima de autos, manifiesta que no la conoció ni supo nada respecto de su situación. En relación a Jorge Calderón Otaiza, el cual habría estado detenido en la base aérea Maquehue, inquiriere que tampoco supe absolutamente nada.

En declaración judicial prestada con fecha 17 de noviembre de 2015, rolante a de fs. 308 (tomo I). Acota que conoce el motivo de su comparecencia y ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 599 a fs. 601 (declaración que no se encuentra en esta causa), y que en el acto le ha sido leída. Aclara que Callis aparentaba tener mucha influencia. Era una persona que metía miedo, de aspecto muy seguro, era tenebroso. Puntualiza que el no conocía a Hugo Ferrada, tan solo de vista. Que lo que dijo de el era lo que se comentaba, que lo conoció recién el año 1982.

A4. BERTHOLD ERWIN BOHN SAUTEREL (37 años de edad para el año 1973), quien declaro de fs. 262 a fs. 264 (tomo I).

En declaración judicial prestada con fecha 06 de agosto de 2014, rolante a de fs. 262 a fs. 264 (tomo I). Indica que ellos como reservistas no debían acercarse a los detenidos, sin embargo, cuando vio a Sergio Riquelme

se acercó de igual forma a él por detrás y le preguntó si lo reconocía al hablarle, a lo cual le respondió que sí. Colige que las funciones que cumplían en la base aérea eran estar disponibles para misiones de vuelo en el caso de que se necesitara de un copiloto de helicóptero o piloto en aviones del club aéreo. Que cuando no se encontraban en estas actividades no hacían nada en la base aérea, a lo más conversar entre ellos y con algún funcionario que pasara por el lugar donde ellos estaban. Que también debieron actuar como interventores cuando la autoridad así lo disponía. Refiere lo que sabe respecto de los detenidos de Cunco, indicando que participó en calidad de copiloto, sin ser piloto de helicóptero. Que de acuerdo a una disposición reglamentaria este helicóptero debía volar con copiloto, ello por seguridad. Puntualiza que a los oficiales de reserva les daban la orden "ya arriba", y debían obedecer. Fue lo que aconteció en aquella ocasión. Recuerda que el piloto era el comandante Fernández y que una vez llegados con ellos a la base, quedaron en una sala y a él se le ordenó quedarse con ellos antes de que fuesen trasladados al regimiento Tucapel. Refiere que al quedarse con ellos les preguntó hace cuanto tiempo no habían comido, indica que no le contestaron nada, lo miraron sorprendidos, pero no le hablaron. Se le ocurre que no querían hablar con nadie, pero si hablaban en voz baja. Alude que les dio instrucciones a un conscripto que estaba cerca, que fuera al casino de oficiales y pidiera café y un sandwich para cada uno. Manifiesta que el conscripto llegó con ellos, se los dio a los detenidos, los cuales comieron con avidez. Luego de lo anterior, manifiesta que le pidieron a él que los llevara al regimiento, motivo por el cual los entregó en la guardia. Que esa fue toda su actuación. Relata sobre otros episodios que conoce y agrega que no vio torturas en la base aérea, no tenían acceso a los detenidos. Inquiere que tampoco nunca formó parte de una patrulla ni participó en detenciones de personas. Tampoco supo de la existencia de un grupo al que denominaran "los chicos malos". En relación a la víctima de este proceso atestigua que no la conoció ni supo nada de ella ni antes, durante ni después, lo mismo puede decir de Jorge Eduardo Calderón Otaiza.

A.5. .HERIBERTO PEREIRA ROJAS (20 años de edad para el año 1973), quien declaro de fs. 303 a fs. 305 (tomo I), de fs. 563 a fs. 565 (tomo II).

En declaración extrajudicial prestada con fecha 08 de agosto de 2015, rolante a de fs. 303 a fs. 305 (tomo I). Apunta que su trayectoria en la Fuerza Aérea de Chile, la he dado a conocer en declaraciones judiciales, debiendo dejar en claro que para el 11 de septiembre del año 1973 tenía 20 años, era menor de edad, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco, y ostentaba el grado de Cabo 2°, especialista en personal. Explica que en la época en la base aérea había soldados realizando el servicio militar, aproximadamente unos 45 provenientes desde la unidad de Colina. Recuerda que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba cumpliendo como escribiente en el departamento de personal y realizaba labores operativas. Aproxima que una vez ocurrido el pronunciamiento militar, en la Base Aérea Maquehue todos los funcionarios, entre los que se incluye, comenzaron a realizar patrullajes que terminaron con allanamientos y detenciones de personas por motivaciones políticas. Respecto a los nombres de las personas detenidas indica que las desconoce pues el más antiguo a cargo de la patrulla era el que sabía la identificación. Explaya que sobre muertes, ejecuciones sumarias durante estos patrullajes, no tiene conocimiento y no tuvo la experiencia tampoco. Que los participantes en estas diligencias operativas terrestres estaban conformados desde el soldado hasta el oficial. Que durante los primeros días del pronunciamiento militar se utilizan los vehículos institucionales, pero cuando los funcionarios comenzaron a ser nombrados interventores de distintas empresas y organismo públicos, requisaron los vehículos y los enviaron a la base aérea para estos operativos. Relata que los detenidos eran dejados en la guardia, los cuales permanecían un par de horas, ya que desde la base salían vía terrestre a dejarlos al Regimiento Tucapel. Dicha labor también la realizó pero ignora las identidades de los detenidos, los cuales eran de ambos sexos, que fueron a dejar a esa unidad militar entregándolos al oficial de servicio para regresar inmediatamente. Puntualiza que recuerda que se conformó un grupo operativo de inteligencia para octubre de 1973, el cual estaba comandado por el Comandante de grupo Andrés Pacheco Cardenas y el Jefe de Inteligencia era el Capitán Leonardo Reyes Herrera, e integrado por los Cabo 2° Luis Soto Pinto, Valdebenito Isler, Jorge Soto Herrera, Patricio Yañez, Enrique Rebolledo Sotelo, -el Teniente Ángel Campos Quiroga, el Teniente de Reserva Germán Cantarutti, Teniente Rodolfo Schmied Callejón, el Teniente Jorge Freigang Campaña, Capitán Antonio Monserrat Mena, el Capitán Enrique Isac Casacuberta, Cabo 2° Rubén Marin, Cabo 2° Alfonso Solis Delgado, Teniente de Reserva Mario Ramirez

Deramond, Cabo 2° Rolando Charney Meza, Capitán Enrique Isaac Casacuberta, Comandante de escuadrilla Luis Puebla Leiva y su persona como otros que no recuerda. Narra que los soldados denominaban a los operativos como el "Grupo Salvaje" o "Los Chicos Malos" gracias a que Mario Ramírez Deramond los nombraba y los saludaba con ese pseudónimo en razón a las labores operativas que materializaban. Glosa que los funcionarios operativos se dividían en tres grupos: uno a cargo de Jorge Freigang Campaña quien patrullaba con Alfonso Solis Delgado, otro grupo al mando de Ángel Campos Quiroga patrullando con Enrique Rebolledo Sotelo, Rubén Marin, Luis Soto Pinto, y finalmente el grupo a cargo de Andrés Pacheco Cárdenas patrullando con Benjamín Fernández Hernández, Mario Ramírez Deramond, Germán Cantarutti, Emilio Sandoval Poo y Orlando Garrido Riquelme. El grupo de quienes se reunían durante las noches en el casino de oficiales, pero ignora el objetivo y los resultados de esos encuentros. No obstante, el los consideró como un sólo grupo, pues cada uno de ellos no eran exclusivos en cada uno de éstos; ejemplo de lo anterior es que el salía con cualquiera de ellos en patrullajes operativos que terminaron con detenidos por razones políticas, hechos que narró al principio de esta declaración. Asegura que todos pasaron a cumplir funciones o acciones de inteligencia en el año 1973. Indica que para enero de 1974, cuando se crea la Dirección de Inteligencia de la FACH en la base aérea se constituyó la Sección de Inteligencia ubicada en los altos de la segunda comandancia, la cual estaba integrada por antigüedad de la siguiente forma: Andrés Pacheco Cárdenas, Benjamín Fernández Hernández, Ángel Campos Quiroga, Jorge Freigans Campaña, Enrique Rebolledo Sotelo, Jorge Soto Herrera, Alfonso Solis Delgado, Luis Yañez Silva, Luis Soto Pinto, Jorge Valdebenito Isler y su persona. Agrega que en la Base Aérea los detenidos eran mantenidos en los calabozos de la guardia y otros en los pasillos de la Comandancia, lugar donde se practicaban los interrogatorios. Expresa que de los detenidos que estuvieron en la Base Aérea nunca conoció a ninguno de ellos, manifestando que ignora si falleció algún detenido producto de las torturas, que en la época se enteró por chismorreos que ocurrían en la Base. Respecto a los hechos que se investigan en cuanto a Juan de Dios Riquelme Riquelme, indica que no la conoce y según se le informa en este acto habría sido detenido en el mes de diciembre de 1973 y trasladado a la Base Aérea Maquehue, lugar desde donde se pierde su rastro, manifiesta que desconoce completamente esta situación. En cuanto a los hechos que se investigan en relación a Dixon Retamal Cornejo, manifiesta que no lo conoce e ignora las

circunstancias que rodearon su detención y posterior desaparición, enterándose en esta declaración policial que la víctima fue detenida el día 03 de octubre de 1973 al interior de una pensión ubicada en la calle Freire N° 147, de Temuco, por efectivos de la Fuerza Aérea de la Base Maquehue, señalando que desconoce completamente esta situación. Respecto a los hechos que se investigan en relación a Reinaldo Catriel Catrileo, de quien el oficial le informa fue padre de 9 hijos, dirigente indígena, detenido el 9 de noviembre de 1973 en su domicilio ubicado en la Comunidad Indígena de Maleo, por una patrulla compuesta por militares y carabineros, movilizados en un jeep, quienes allanaron violentamente la vivienda e incautaron ilegalmente documentos y efectos personales, que todo el procedimiento fue presenciado por su conviviente doña Juana Loncomil Ancalaf y 6 de sus hijos quienes visualizaron el duro castigo a golpes que fue víctima Reinaldo Catriel; y que una vez concluido el allanamiento la víctima fue trasladada con destino desconocido, manifiesta que desconoce completamente esa situación.

En declaración judicial prestada con fecha 09 de febrero de 2018, rolante a de fs. 563 a fs. 565 (tomo II). Desarrolla que conoce el motivo de su comparecencia y ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rolante de fs. 494 a fs. 497 y que en el acto le ha sido leída. Agrega que en el 2013 cuando estuvieron privados de libertad en la base, se enteró de la propia boca de don Antonio Monserrat Mena, que en el casino de oficiales si se efectuaron consejos de guerra. Precisa que “se les cayó la pera cuando escucharon eso y les llamó la atención, a el sobre todo, que participara el señor Podlech. Que aquello lo escuchó estando ahí de parte ese caballero. Agrega que no mencionó a ningún nombre de los sujetos de los consejos de guerra, sólo mencionó aquello en una conversación que tenía con otra persona. Esa conversación fue con el fiscal de aviación de Puerto Montt que los venía a ver. Precisa que Monserrat Mena también mencionó dentro de la conversación que habría participado en el rescate de Pablo Rodríguez Grez y de Eduardo Díaz Herrera en un helicóptero, en la frontera, porque estaban en Argentina. La fecha no la recuerda pero dice que fue en aquella época. A continuación el tribunal le lee las declaraciones de fs. 418 a fs. 419 y de fs. 429 a fs. 432, a lo que el señor Pereira expone que nada supo, ni por comentarios, de lo que se le lee respecto al matrimonio de médicos veterinarios, que es la primera vez que escucha lo relacionado con lo de Calderón Otaiza que se le lee

en el acto. Indica que si supiera algo lo comentaría. Dice que no se recuerda de Héctor Gutiérrez Palma; nadie de la época tenía acceso al casino de oficiales, lugar donde había una instrucción, por la orden del día, que el casino debía ser visitado solo por los oficiales. Relata que una vez un oficial lo envió a buscar algo al casino de oficiales y “lo subieron y lo bajaron”, hasta días de arresto le dieron. Luego cuenta que en esa época existían unos letreros que indicaban el área de tránsito y quienes podían hacerlo, que había uno rojo que decía “área prohibida, solo oficiales”; otro verde de civiles y cuadro permanente y otro de acceso común para todos, que le parece que era azul, por allí podían transitar todos. Relata que se interrogaba a la gente cuando eran detenidas, se preguntaba por los antecedentes personales y las filiaciones políticas. Indica que él era el único escribiente. Puntualiza que en ese entonces eran tantos los detenidos por toque de queda y por asuntos políticos, que no recuerda los nombres, ni siquiera recuerda a los conocidos. Inquieta que está aburrido de que los mandos medios y oficiales de la época no colaboren. Dice que ellos son los que saben lo que sucedió y son responsables de muchos actos. Indica que cuando estuvieron presos hablaron con el Leonardo Reyes para que se hiciera cargo de la situación y al momento dijo que sí, pero después se retractó. Aduce que está cansado de que lo citan desde el año 2006 en adelante, que ni la familia está tranquila, nadie, dice que es terrible. Que el fiscal del que habló anteriormente era de la Tercera Brigada Aérea de Puerto Montt. Que efectivamente Ferrada pasó de soldado segundo a empleado civil de planta, que ellos mismos tramitaron “esa cuestión” en personal. Que aquello era un gran salto en su carrera funcionaria, lo cual llamó mucho la atención en la época. Después incluso pasó a oficial de reserva en el área de sanidad. Recalca que le parece que el sargento del que hace mención Gutiérrez era de apellido Salgado. El nombre no lo recuerda. Precisa que el negro Marín y Garrido están fallecidos y que efectivamente al Soto Pinto le decían el “lolo Soto”. Finalmente indica que en noviembre de 1973 lo integraron al área de seguridad. Hasta ese entonces él era escribiente, administrador de personal. Que siguió ejerciendo la función de escribiente y nunca tripuló un helicóptero.

A.6. ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO (22 años de edad a la época de los hechos)

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2015, rolante a fs. 290 a 291 (Tomo I), basa que para el 11 de septiembre del año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco y ostentaba el grado de Cabo 2°. Una vez ocurrido el pronunciamiento

militar, recuerda que se encontraba encasillado en el Hangar de Mantenimiento, ya que su especialidad era mecánico de helicóptero. El jefe del Hangar era el era el Capitán **Enrique Isaac Casacuberta** y la conformaban alrededor de veinte funcionarios, recordando entre ellos **Soto Herrera, Cáceres, Huenchuñir, Pedro Espinoza y Azocar**. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, la Base Aérea Maquehue tuvo cambios radicales a las labores cotidianas propias del servicio, es decir, comenzaron a efectuar servicios de guardia de Cuartel, patrullajes de toque de queda, mantenimientos de los helicópteros y servicio de utilidad pública. Cimentando que en la Base Aérea no había un grupo dedicado a investigar personas por temas políticos, como tampoco un grupo encargado de efectuar las detenciones de éstos; debiendo dejar en claro que en su caso particular jamás conformó un grupo de funcionarios para tales fines, haciendo presente que todo el personal realizaba patrullajes de toque de queda, donde en más de una ocasión practicó la detención de personas por infringir los horarios, las cuales eran llevadas a Comisarías de Carabineros, Regimiento Tucapel, Cuartel de Investigaciones y la misma Base Aérea Maquehue. Difunde que a la Base Aérea también se sumaron las labores un grupo de funcionarios en calidad de reservistas, que prestaron colaboración en el año 1973, correspondientes a **Humberto Bhon, Pedro Molina Espinoza, Pablo Alister, Emilio Sandoval Poo, René y Claudio Picasso, Rosen** y otros que no recuerda. Este grupo desarrollaron labores de patrullajes, como también Oficiales de Servicio en las guardias de Cuartel. Los detenidos que llegaban a la Base Aérea, eran mantenidos en las afueras de la sala de guardia, a la espera de que llegaran patrullas de Ejército, Carabineros e Investigaciones a buscarlos. De los detenidos que estuvieron en la Base Aérea, nunca conoció a ninguno de ellos, ignorando si falleció algún detenido en la Base. Con respecto a los hechos que se investigan, desarrolla que la persona de **Jorge Calderón Otaíza**, no la conoce como tampoco lo reconoce en la fotografía que se le exhibe, por lo que ignora las circunstancias que rodearon, su detención y posterior desaparición, enterándose en la presente declaración policial que la víctima fue detenida el día 30 de septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros de la 3° Comisaría de Padre Las Casas, quienes lo trasladaron y entregaron a la Base Aérea, recinto de donde desaparece, por lo que reitera que desconoce absolutamente esta situación.

En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2015, rolante a fs. 309 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, otorgada en causa diversa. Las personas detenidas por

toque de queda quedaban en tránsito mientras las iban a buscar los del Ejército, Carabineros, no sabe a quién llamarían, porque esto se imagina, lo hacía la Comandancia. Inteligencia se formó a partir de diciembre del año 1974. Los mandaron a esa oficina que estaba de llena de documentación, de la cual hubo que hacer uno orden y organizar la seguridad militar, que era lo que hacía falta, porque no existía esa oficina. De Santiago llegaban órdenes que estipulaban lo que había que hacer para la seguridad de la base, que era el punto neurálgico.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de diciembre de 2016, rolante de fs. 498 a 500 (Tomo II), funda que el 11 de septiembre del año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco y ostentaba el grado de Cabo 2°. Formó parte de la dotación del Departamento de Inteligencia, que se creó en el año 1974, hasta aproximadamente el año 1989. Este departamento estuvo a cargo de los Tenientes **Ángel Campos Quiroga** y **Jorge Freigang Campana**. Integraban esta sección departamento los Cabos **Heriberto Pereira**, quien cumplía funciones de escribiente; **Luis Soto Pinto**, **Valdebenito Isler**, **Jorge Soto Herrera**, **Luis Patricio Yáñez Silva**, Cabo 2° **Rubén Marín**, Cabo 2° **Alfonso Solis**. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba encasillado en el Hangar de Mantenimiento, ya que su especialidad era mecánico de helicóptero. El jefe del Hangar era el Capitán **Enrique Isaac Casacuberta** y la conformaban alrededor de veinte funcionarios, recordando entre ellos **Soto Herrera**, **Cáceres**, **Francisco Huenchunir**, **Pedro Espinoza**, **Álvaro Azocar**, **Ramón Soto** y otros que no recuerda. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, la Base Aérea Maquehue tuvo cambios radicales en las labores cotidianas propias de los servicio, es decir, comenzaron a efectuar servicios de guardia de cuartel, patrullajes de toque de queda, mantenimientos de los helicópteros y servicio de utilidad pública. Agrega que en la Base Aérea no había un grupo dedicado a investigar personas por temas políticos como tampoco un grupo cuya función era efectuar las detenciones de éstos, debiendo dejar en claro que en su caso particular jamás conformó un grupo de funcionarios para tales fines. Hace presente que todo el personal realizaba patrullajes de toque de queda, donde en más de una ocasión practicó la detención de personas por infringir los horarios, las cuales eran llevadas a Comisarías de Carabineros, Regimiento Tucapel, Cuartel de Investigaciones y la misma Base Aérea Maquehue. A la Base Aérea también se sumó las labores un grupo de funcionarios en calidad de reservistas que prestaron colaboración en el año 1973, correspondiendo sus identidades a **Humberto Bhon**, **Pedro Molina Espinoza**,

Pablo Alister, Emilio Sandoval Poo, René y Claudio Picasso, Rosen y otros que no recuerda. Este grupo desarrolló labores de patrullajes como también Oficiales de Servicio en las guardias de cuartel. Los detenidos que llegaban a la Base Aérea por toque de queda, eran mantenidos en las afueras de la sala de guardia, a la espera de que llegaran patrullas del Ejército, Carabineros e Investigaciones a buscarlos. Agrega que nunca trasladó detenidos desde la Base Aérea a otro recinto o unidad militar o policial, salvo en los patrullajes en que los detenidos por motivos de toque de queda los iban a dejar a Carabineros o Investigaciones. Respecto a la víctima **Jorge Calderon Otaíza**, sobre quien se le comunica que era un estudiante universitario soltero, militante del Partido Socialista, que fuera detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron Carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehue, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Respecto a lo anterior el deponente agrega que ignora completamente los antecedentes sobre esta persona y es la primera vez que escucha su nombre. Expresa que referente a lo que se le consulta, nunca tuvo una relación laboral con **Hugo Ferrada**, solo lo conoció como enfermero de la Base Aérea y que tenía relaciones cercanas con la oficialidad. Por lo tanto, según lo que se le señala, nunca llevó algún detenido a la enfermería, pues las detenciones que realizó en sus patrullajes eran por violación al toque de queda y estos detenidos solo permanecían unas horas para luego ser trasladados a los Cuarteles de las policías y Ejército. Subraya que nunca interrogó ni torturó al interior de la Base Maquehue ni tuvo conocimiento sobre la materia; sucesos que en conformidad a lo que se le comenta, ocurrieron en ese Cuartel de la FACH en aquella época. A su pregunta, evidencia que nunca realizó patrullajes con **Luis Soto Pinto**, la única labor que realizaron juntos en la misma oficina fue la de procesar y analizar información enviada por el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Santiago acerca de los países de Bolivia y Perú, a partir del año 1975, ignorando en estos momentos hasta cuando ejecutaron esa misión. La

última vez que vio a **Luis Soto Pinto** fue cuando los ingresaron en prisión preventiva a la Base Aérea del Bosque en Santiago, no recuerda la fecha.

En declaración judicial de fecha 09 de febrero de 2018, rolante de fs. 561 a 562 (Tomo II), ratifico su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 498 a 500. El Tribunal le lee la declaración de fs. 418 a 419 en lo pertinente, a lo que el deponente señala que esto sucedió en el casino de Oficiales y no tenía acceso al casino de oficiales, menos a la hora del almuerzo y en ese nivel con el Comandante; no se acuerda de haber conocido a una persona de nombre **Héctor Gutiérrez Palma**; es falso lo que dice respecto de que el deponente habría participado en el traslado de **Calderón Otaiza** a la enfermería, nunca ha participado en eso. El Tribunal le lee la declaración de fs. 429 a 432 en lo pertinente, a lo que el deponente aduce que efectivamente **Ferrada** ingreso como soldado segundo a la fuerza aérea y luego lo vio a los años después, como Capitán; efectivamente a **Soto Pinto** le decían “**Lolo Soto**”, porque era menor, era el último que había llegado de la escuela. Sabía que le decían así. El cumplía una función distinta a la del deponente. Cimiento que nunca participó en llevar a nadie a la enfermería y en esas condiciones. No recuerda un evento de ese tipo, por lo tanto, no debió haber estado. A su hoja de vida no ha tenido acceso. Ellos no tenían acceso al casino de Oficiales. Estaban en el hangar dos. Nunca trasladó detenidos, solo por toque de queda, le extraña que se relate un episodio así. No recuerda a **Gutiérrez** como para describirlo. Añade que la enfermería era de acceso fácil. Toda la gente que iba a la Comandancia pasaba por ahí. Además, seguridad controlaba todas las oficinas una vez que se retiraba toda la base y las placas metálica y las credenciales. Nadie los quería por esto. En la base todos debían haberlos visto y unos eran más visibles para otros. Con **Soto Pinto** tenían una relación de oficina y era además muy bueno para la pelota, era seleccionado de fútbol. Aunque no era del mismo curso suyo. El superior era **Angel Campos Quiroga**, **Freigang** y el Comandante **Fernández**. Mientras que ellos llevaban los papeles que llegaban de Santiago. Soto Pinto, Soto Herrera y todos se dedicaban a los controles que ha señalado.

En declaración diligencia de careo Héctor Gutiérrez Palma, y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, de fecha 14 de mayo de 2018, rolante de fs. 585 a 586 (Tomo II), Rebolledo Sotelo explicita que no conoce a la persona que está sentada a su derecha. El Tribunal le da a conocer el nombre de dicha persona, a lo que expone que de acuerdo a las últimas declaraciones que le han tomado, puede ser que sea una persona que trabajó en la base, pero no lo tiene

claro. Como decía anteriormente, no participó en la acción que nombra este señor, por lo que no conoce al señor **Calderón Otaíza**. Se mantiene en sus dichos, porque no conoce al señor **Calderón** y no participó de ese hecho

En declaración judicial de fecha 03 de octubre 2018, rolante a fs. 619 (Tomo II), comunica al tribunal su nuevo domicilio, el cual corresponde a: Los Juncos N°1605, Block N°1, departamento 202 Condominio Jardín de Las Rosas, ciudad de Temuco, y su teléfono de contacto es el 972471749.

A.7. HÉCTOR GUTIÉRREZ PALMA (25 años a la época de los hechos)

Declaró de fs. 418 a fs. 419 (**Tomo II**), de fs. 429 a fs. 432 (**Tomo II**), de fs. 585 a fs. 586 (**Tomo II**), de fs. 1002 a fs. 1003 (**Tomo III**), de fs. 1035 a fs. 1036 (**Tomo III**), de fs. 1074 a fs. 1079 (**Tomo III**), de fs. 1074 a fs. 1080 (**Tomo III**);

En declaración extrajudicial de 13 de septiembre de 2016, que rola de fs. 418 a fs. 419 (Tomo II), acota que Ingresó a la Fuerza Aérea de Chile contratado como Soldado Segundo a contar del día 1 de agosto de 1973, periodo en que cumplió funciones en la Base Aérea Maquehue de Temuco, desempeñándose como Mayordomo de Casino. Conforme su recuerdo a cargo del Casino estaba el Sargento Jose Silva Cid, quien en la actualidad residiría en Temuco. De la Base Aérea Maquehue no tiene muy buenos recuerdos desde que comenzó el Gobierno Militar, esto por las situaciones de las que se enteró y las cuales se relacionaban con personas detenidas. Dice que por sus funciones en el casino de la base, escuchó en ocasiones varios comentarios que efectuaban algunos soldados, como es el caso en la oportunidad en que el Comandante Fernández se encontraba -almorzando en el comedor cuando llega **Hugo Ferrada** junto a **Cesar Borquez**, quien era civil y prestaba cooperación a la institución en temas relacionados con detenidos, el caso es que ambos le informaron a Fernández que habían tomado detenido a un matrimonio de Doctores veterinarios junto a un hijo de estos, a lo cual Fernández les dio la orden de ejecutarlos y ante la consulta que le hizo Ferrada respecto a qué hacer con el menor, le dijo que lo dieran en adopción. Hace presente que de esta situación fue testigo, recordando que después que **Ferrada** le dio esa novedad a Fernández este siguió almorzando y presume que **Ferrada** y Borquez cumplirían sus órdenes al pie de la letra. Expresa que otra de las situaciones de la cual fue testigo, dice relación con la detención de un joven de apellidos **Calderón Otaíza**. Puntualiza que a este joven lo ubicaba desde el Liceo y era conocido por ser un conocido simpatizante del gobierno de Salvador Allende. Asevera que un día se encontraba en la enfermería esperando ser atendido por el dentista Benjamín

Bogel, quien en la actualidad trabaja en la UFRO, cuando repentinamente ingresan a la sala dos funcionarios que hacen salir a quienes se encontraban ahí quedando el declarante al interior de esta en el alboroto ya que ambos soldados traían sostenido a un hombre ensangrentado, con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo a quien pudo identificar como **Calderón**, quien estaba convulsionando. Agrega que no pudo conversar con él, pero en determinado momento se abre la puerta de la enfermería y lo recibe el **enfermero Ferrada**, quien aún era soldado segundo. Desde ese momento no supo más de **Calderón**, solo sabe que los **funcionarios Rebolledo y Luis Soto Pinto**, son los que deben saber lo que pasó con Calderón ya que ellos fueron los que llegaron hasta la enfermería. Nunca más supo de **Calderon**, como tampoco si su familia que vivía en calle sarmiento de Padre Las Casas haya concurrido a la base a preguntar por él. Respecto al grupo de militares encargados de efectuar las detenciones e interrogatorios al interior de la base, señala que estaba integrado por el Capitán **Leonardo Reyes**, el Teniente Ángel Quiroga, los Cabos Rebolledo, Soto Pinto, Pereira, Marin, Garrido y **Ferrada** a quien posteriormente se le otorgó el grado de Teniente, entre otros funcionarios que principalmente eran mecánicos de helicópteros. De los antes mencionados, se hablaba mucho que el **Capitán Reyes** y el Teniente Quiroga tenían en su habitación equipos de comunicaciones y botellas con acido. Otro de los casos que se enteró fue sobre la detención de un Detective de Temuco a quien traían desde el regimiento, esta información se la dio un conocido que era obrero jornal al interior de la base, quien le comentó incluso que a este Detective lo habrían subido a un helicóptero que piloteaba el Teniente Schmied, recordando en su relato que el funcionario lo llevaban caminando y lo tiraron al interior del helicóptero que se lo llevaría con rumbo desconocido. Anexa que el nombre de la persona que le dio esta información corresponde a Antonio Armando Lara Lara, quien no hizo carrera en la Fuerza Aérea y posteriormente se dedicó al área gastronómica y en la actualidad residiría en Pucón. Mucho se comentaba de otras detenciones en la base como son los casos de un sacerdote que habría fallecido al interior de la base como también sobre la permanencia al interior de esta del Comandante Pepe a quien posteriormente se lo llevaron a Valdivia, pero no fue testigo de estas situaciones ya que solo recibió el comentario de otros funcionarios. Indica que respecto a los funcionarios que podrían manejar antecedentes están los soldados Maureira, Juan Armijo, Rivas quien era hijo de un Suboficial de la base cuyo nombre era Heriberto. Finalmente señala que en el grupo encargado de las detenciones también había un soldado 2do. que estaba contratado como albañil pero no recuerda su apellido.

En declaración judicial de 14 de noviembre de 2016, que rola de fs. 429 a fs. 432 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, que le fue leída. Puntualiza que dejó la Fuerza Aérea el día 29 de febrero , pero del año 1976. Asimismo, aclara que efectivamente fue **Ferrada** quien abre la puerta de la enfermería y recibe a Calderón Otaíza, lo que no tiene claro en este momento es si el todavía era soldado segundo o bien ya era empleado civil con rango de oficial. Sí tiene claro que en algún momento Ferrada renunció como soldado y fue recontratado como empleado civil; esto le significaba a Ferrada el codearse con los oficiales en el casino de oficiales. Hoy le cuadra el hecho o razón por la cual Ferrada renuncia a su calidad de suboficial y se recontrata como empleado civil. Entre ellos había un trato más coloquial entre ellos. Dice que la imagen de **Ferrada** abriendo la puerta y recibiendo a **Calderón** es como si la estuviese viendo en este momento cuando e le interroga. Asevera que la ve nítidamente y no tiene ninguna duda. Agrega que quien debió haber recibido a Calderón, por la gravedad de la situación, era un suboficial de grado sargento primero que estaba a cargo de la enfermería, pero no fue así, sino que lo hizo **Ferrada**, quien vestía de civil y sobrepasaba las atribuciones del sargento a cargo, de quien no recuerda el nombre en este momento. Expresa que hay otro apellido más que no recordó al momento de la declaración extrajudicial y que era de grado cabo primero, a quien le decían “negro Marín”, a quien después lo vio trabajando en la inspección del trabajo como fiscalizador, esto durante el gobierno militar. Era tripulante de helicópteros. Él pertenecía al departamento segundo, a quienes tenían individualizados y a quienes les tenían mucho respeto por la función que cumplían. Se sabía que ellos tenían las manos “muy suaves” y sus métodos no eran muy ortodoxos. Puntualiza que este grupo de la sección segunda vestían de civil y solo de civil, con el pelo un poco más largo. Soto Pinto era conocido como el “lolo Soto”; los funcionarios que pertenecían a este grupo eran cabos segundo a sargento segundo. En este último caso estaba Garrido , actualmente fallecido. Anexa que los equipos de comunicación y botellas con ácido las vio personalmente , ya que en su calidad de mayordomo del casino de oficiales tenía libre acceso a las piezas de los oficiales , por lo tanto , de esta forma fue como se enteró de esto. Esto se lo mencionó a otros soldados con los que se reunían en la cocina, a lo que le respondieron los demás que estos líquidos se los aplicaban a los detenidos en los testículos y le advirtieron que no los abriera ni los tocara ya que eran peligrosos; estaban los soldados Heriberto Rivas, Vargas, Villanueva, Maureira, Armijo, Soto (cocinero), y

otro apodado “el cogote de pavo”, cuyo nombre no recuerda. Con estos fue que hizo el comentario y le señalaron lo ya dicho. Manifiesta que cuando vio a Calderón era un guiñapo humano, que pensó que ya estaba muerto, se movía como una gelatina, por un reflejo que el cuerpo mantiene, independiente de la actividad cerebral, no se valía por sí mismo, costándole mucho reconocerlo. Lo conocía del liceo y era muy vehemente, incluso lo consideraba un poco fanático. Lo ubicaba bien a él. No obstante, asevera que le costó mucho reconocerlo a él cuando lo llevaron a la enfermería. Y fue llevado desde el lugar de donde lo interrogaban hasta la enfermería que distaba unos treinta a cuarenta metros. Lo llevaron en vilo, no caminaba, estaba muy, muy mal, y está seguro de que quienes lo llevaron fueron **Rebolledo y Soto Pinto**. Por eso a todos los que estaban esperando atención médica los sacaron. Dice que por cosas de la vida se quedó ahí sin razón, se quedó y el hecho de que viera a **Ferrada** y a los que llegaron con Calderón debieron haberlo visto, pero no le preguntaron nada de por qué estaba ahí, ni tampoco lo hicieron salir, cree que estuvo invisible para ellos. Ellos conocían bien al declarante, como él a ellos; con Ferrada ingresaron a la institución como al mismo tiempo. Agrega que respecto del comandante Pepe, Armijo le dio la información señalándole que le había rendido honores al comandante Pepe una vez que hubo llegado a la base aérea. Después se lo llevaron a Valdivia. Recuerda que Ramírez Deramond y Cantarutti eran renombrados como represores. Manifiesta que hay un caso del que recuerda en este momento que se lo narró un carabinero de nombre Antonio Palma Sanhueza en el que habría participado directamente y que dice relación con una víctima ejecutada en el sector Truf Truf de Padre Las Casas hoy, antes Temuco, y que correspondería a un asesino de dos hermanos en Padre Las Casas, antes del golpe, puede haber sido unos diez años antes del golpe. La cosa es que los carabineros lo detienen y se lo llevan porque era muy conflictivo en la calle donde vivía, Condell de Padre Las Casas. Le dispararon por detrás con fátigas de fusiles ametralladora SIG Nato. Según su propia descripción, prácticamente lo partieron por la mitad. Relata otro episodio que se lo comentó Carlos Collío como conversación en alguna ocasión y que fue en el sentido de que él había participado en la ejecución de oficiales en Antofagasta, pero no le dijo nombres. La ejecución habría sido en el desierto. Les habrían disparado por detrás. Carlos Collío era mayordomo de casino y era jefe. Sobre Hugo Castro López dice que en el ala de comandancia y al frente del pasillo estaban los dormitorios de los cabos. Poco antes de la muerte de Fernández y mientras esperaban el bus que los llevaba a la base aérea, alguien les comentó o preguntó si sabían lo que había

pasado con Castro y que Pereira habría estado manipulando su arma y se le habría escapado un tiro que había impactado en Castro. Lo que les molestó es que no se les permitiera a la familia llevar el cuerpo de Castro. Castro López era muy amable. Nunca se supo si fue accidente o ejecución. Lo que estaba claro es que Pereira lo mató. No hubo sumario. No estuvo arrestado. Sí que Pereira era del grupo de la sección segunda o del grupo represor. Castro estaba durmiendo. Esto sucedió en la noche. Precisa que el año 1974 puede que hayan usado pistolas Colt. Responde que había un funcionario de apellido Catriel, no recuerda su nombre. Por otra parte, Italo Cantarutti era de Villarrica y él conocía a la gente del sector. A éste lo vió en más de una ocasión con Ramírez Deramond. Cantarutti estuvo detenido en el casino de oficiales por haberse metido en un asunto de platas. Ahí cayó en desgracia. Fue secretario del intendente militar. Se metió en líos de faldas y se metió con platas fiscales. Tuvo un intento de suicidio. Precisa que todo se sabía en la FACH, se veía como algo jocoso. Había un ambiente de halago para quienes estaban haciendo la pega sucia. Ejemplo, Campos Quiroga debe haber estado presente en los interrogatorios. ellos tenían el poder.

En diligencia de careo de 14 de mayo de 2018, que rola de fs. 585 a fs. 586 (Tomo II), practicada con Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, el declarante manifiesta que con las características actuales, no ubica a la persona que está sentada a su lado. El Tribunal le da a conocer el nombre de la persona, expresando el deponente que por el apellido que le indica, recuerda que conoció a un funcionario de la fuerza Aérea con el grado de cabo primero o segundo de apellido Rebolledo. El Tribunal le lee las declaraciones de fs. 418 a fs. 419 y de fs. 429 a fs. 432, en lo pertinente, a lo que el deponente señala que no puede declarar fehacientemente que las personas que llevaban al detenido hayan sido los cabos Rebolledo y Soto. Sí que pertenecían al departamento segundo las personas mencionadas. Y ahí hay un nombre que no mencioné. Sí había un oficial de apellido Campos Quiroga; de lo que está seguro es de que el enfermero era Ferrada. Señala que es más probable que haya sido Soto porque fue uno de los primeros que ingresan al grupo represor. Rebolledo pudo entrar después. Pudo haber sido el señor Rebolledo y Soto. No tiene la película clara, la cara de quienes flanqueaban al detenido, pero se inclina más por Soto; fue un hecho 20 días después del golpe y después fueron ingresando otras personas al grupo; al 30 de septiembre estaba Soto. Agrega que quienes lo integraban al 30 de septiembre eran Soto, el Huaso Garrido, estas son las dos personas que más identifica, pudieron haber sido unas cinco a seis personas: Soto, Garrido, no sabe si Rebolledo, Ferrada, un civil de apellido Bórquez, Ángel Campos Quiroga, el

capitán Leonardo Reyes Herrera, Jorge Freigang Campaña, el también oficial de reserva Italo Cantarutti; y Ramírez Deramond; también estaba Pereira. Precisa que los que llevaban a Calderón Otaíza eran suboficiales no oficiales. Agrega que la fecha de formación la conoce porque estaba trabajando en el casino y entre los comentarios que se hacía en la concina eran de esa naturaleza. Entre los que comentaban en la cocina estaban José Soto Gálvez, Juan Armijo, Vargas, Heriberto Rivas y uno al que le decían el "cogote de pavo", que pudo haber sido de apellido Cárdenas. Precisa en el momento de la declaración le consta lo que ha dicho. Finaliza manifestando que en lo que señaló en esta diligencia se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de 08 de septiembre de 2021, que rola de fs. 1002 a fs. 1003 (Tomo III), ratifica la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, de fs. 429 a fs. 432 y de fs. 585 a fs. 586, que le han sido leídas, reconociendo como suyas las firmas estampadas en ellas. Asevera que efectivamente quien entró como guiñapo era Calderón Otaiza. Puntualiza que el grupo era el que se nombró en la declaración. No podría precisar quien los hizo salir. Eran el grupo quien se encargaba de ese trabajo y con los métodos que ellos realizaban. Sobre la consulta del tribunal respecto a esta fecha qué suboficiales iban con Calderón, responde que no puede precisar fehacientemente, quizás por los nervios. Al entrar las personas se centró en ver a Calderón Otaíza. Hugo Ferrada era una persona que estaba ahí. A Rebolledo no lo pudo identificar. Aclara que estuvo un período muy corto en la fuerza aérea. Indica que las personas eran de ese grupo, Benjamín Fernández era comandante. No metía las manos. Los que lo hacían eran Angel Campos Quiroga y, el capitán Leonardo Reyes Herrera, que eran ayudados por estos oficiales de reserva Cantarutti y Deramond. Añade que Freygang también, pero este era más persuasivo. Sobre Schmied, solo sabe que el piloteaba los helicópteros. Transportaba los detenidos no sabe dónde. Dice que los oficiales debían estar detrás de este grupo. Ellos daban las órdenes. Todos dependían de Benjamín Fernandez.

En diligencia de careo de 27 de septiembre de 2021, que rola de fs. 1035 a fs. 1036 (Tomo III) practicada con Luis Alberto Soto Pinto, respecto a la pregunta si conoce a la persona sentada y que se le exhibe en cámara responde que no, por las características y por el transcurso de los años a la persona no la recuerda. Dice lo identifican como comandante. Aclara que al Soto que conoció era un cabo segundo. No compartía con él, pero lo ubicaba de vista,

asimismo, expresa el declarante que él también cambió mucho en cuanto a su fisonomía. El tribunal le lee la declaración de fs. 429, en lo pertinente, de fecha 14 de noviembre de 2016 y se le consulta si ratifica sus dichos, manifestando que en los hechos, sí; en las personas muchas dudas, porque en ese momento con la impresión, ya como lo sostuvo frente al sr. Rebolledo, no podría decir él fue, así como está sentado al lado mío. En los hechos sí, en las personas tiene dudas porque en ese momento por el alboroto, por la impresión provocada de que una persona humana fuera llevada en esas condiciones, obviamente la impresión hace que vea más allá de lo cree. El tribunal le pregunta respecto a Rebolledo y Soto Pinto no los recuerda, pero respecto a Ferrada, contestando el deponente que Ferrada, absolutamente claro, claro como el agua, perdonando la expresión. Se mantiene en lo demás en sus dichos con la aclaración que ha hecho.

En diligencia de careo de 06 de julio de 2022, que rola de fs. 1074 a fs. 1080 (Tomo III), practicada con Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, ante la pregunta realizada por el tribunal respecto a la persona que ve a su lado, responde que con las características actuales no le dice nada en realidad, porque hace 47 años que a estas personas las dejó de ver, 46 o 47 años. Entonces ellos y el deponente han cambiado mucho, entonces no puede decir fehacientemente él es “fulano de tal”. El tribunal le pregunta su logra ahora ubicar a la persona que está a través del sistema de teleaudiencia, manifestando el deponente que reitera que por las características actuales no, pero conoce a don Hugo Ferrada, ex funcionario también de la Fuerza Aérea lo conoció con el grado de subteniente, algo así. O sea, lo conoció como soldado segundo primero y posteriormente empleado civil y después como oficial de la Fuerza Aérea. El tribunal le lee la declaración del 13 de septiembre del año 2006, rolante a fs. 418 a 419 (Tomo II), indicándosele que ha declarado varias veces, pero en esta primera declaración, consultándole si la ratifica, respondiente el declarante que una de las personas, se habla de Quiroga, no, es Campos Quiroga, fallecido ya. En los otros podría haber discrepancias en el recuerdo de los apellidos de las personas, en la identificación de las personas, ya que en ese momento era tan conmocionado el asunto, que uno se miraba al espejo y desconfiaba de uno mismo, en eso no podría ser tan rigurosa la identificación. Pero los hechos que involucran al señor Ferrada, eso sí, esos los mantiene. De otras actuaciones de él, yo no sabe más. Respecto a la declaración que rola de 429 a 432 de fecha 14 de noviembre de 2016, ratifica esa declaración. El tribunal le lee la diligencia de careo entre don Luis Alberto Soto Pinto y don Héctor Gutiérrez Palma, la cual es una transcripción de una videoconferencia practicada anteriormente, de fecha 27 de

septiembre de 2021, ratificando el deponente dicha declaración. Asimismo, ratifica la declaración rolante a fs. 1003, de fecha 08 de septiembre de 2021. El tribunal le consulta si se mantiene en sus dichos respecto al Sr. Ferrada, respondiendo el declarante que reitera las dos actuaciones del señor Ferrada, es una conversación, una cuenta que se le rinde a Fernández, comandante de grupo, ya ascendido a comandante del grupo, cómo lo conoció, lo conoció como comandante de cuadrilla. Cuando ellos van a darle cuenta, estaba almorzando este caballero con otros oficiales, que no los identifica, no los recuerda, y él efectivamente andaba con este señor Bórquez, César Bórquez, que posteriormente fue director de la Radio Frontera de aquí de Temuco, así que no era tan ignorante o falta de conocimiento, ellos dos fueron a darle cuenta, es más en su indumentaria andaban con un fusil y estos cascos metálicos, pero digamos esa es una actuación, y la otra actuación, por decirlo de alguna forma, es cuando el deponente abre la puerta de la enfermería y recibe a esta persona en muy mal estado, pero después se fue de ahí, porque estaba en un tratamiento odontológico. Vogel es dentista. Entonces, qué pasó con este señor, solo sabe que desapareció y cree que hasta el día de hoy. El tribunal le consulta respecto a algún cabo de apellido extranjero que pueda ser el nombrado por el señor Ferrada, que trabajaba con Garrido, manifestando el declarante que se acuerda de un Cabo que era bien loco, que ya en el plano extra militar fueron amigos, él era compañero de Cuevas, de Enrique Cuevas, otro Cabo 1º que eran tripulantes del helicópteros. Así que es muy posible que este señor haya andado en la tripulación, pero le parece que todavía no llegaba de Santiago a Temuco, a Padre las Casas. El apellido no se acuerda, pero le suena, por aproximación, "Sequel", que era un Oficial, que le hizo el papeleo a él para ingresar a la Fuerza Aérea. Pero no le suena nadie de apellido extranjero, y si hubiera habido alguien con apellido extranjero habría sido muy fácil de recordar, ya que todos eran "Soto", "Pérez", "Ferrada", no eran de apellidos muy que sonaran. Respecto a dichos del Sr. Ferrada en la diligencia de careo, dice que coincidirán que ahí en ese tiempo, cosas que no se podían o no se debían, porque se actuó en forma extraordinaria en muchos aspectos. Le indica al Sr. Ferrada que se acordarán cuando se hizo la recepción cuando a usted lo nombraron, cuando se quedó contratado como empleado civil, a usted se le hizo una recepción en el casino de oficiales, el deponente se acuerda porque ahí hubo un incidente. Al sargento Silva se le ordenó que le sirviera algo a usted y él dijo que cómo a él, un Sargento ya Segundo, de muchos años en la institución, iban a hacerlo servir a un soldado, a un soldado raso como era usted, como era el declarante en ese entonces. Bueno,

a partir de ese momento usted era ya empleado civil, tenía rango de oficial. Así que usted está medio perdido en la fecha. Usted siendo civil portaba armamento y portaba algunas indumentarias. Puntualiza al tribunal respecto al Sr. Ferrada que también tuvo algunas actuaciones en el grupo dos, Departamento Segundo. Insiste que en el testimonio del Sr. Ferrada se ve la razón en lo que dice, de que se hacían cosas extraordinarias. Plantea la interrogante ¿Y qué hacía un soldado segundo como tripulante en un operativo militar? Se mantiene en sus dichos.

A.8. NELSON LUIS AGUSTÍN SECKEL CATALÁN (24 años a la época de los hechos investigados) quien declaró de fs. 439 a fs. 442 (Tomo II)

En declaración judicial de 07 de diciembre de 2016, que rola de fs. 439 a fs. 442 (tomo II) el tribunal le lee la declaración que rola a fs. 258 a fs. 261 de don Heriberto Pereira Rojas, a lo que el deponente señala no saber por qué Heriberto Pereira lo nombra como la persona que lo interrogó tras él darle muerte a Hugo Castro López, según se le informa en este acto, ya que a contar del 13 de diciembre de 1973 fue destinado a la Dirección del Personal del Ministro de Defensa de la Fuerza Aérea en el Ministerio de Defensa en Santiago, hecho que acredita acompañando Minuta de Servicios en la que se consigna tal destinación. Asevera que efectivamente después del 11 de septiembre de 1973 se conformaron grupos al interior de la Base Aérea de Temuco, cuya conformación desconoce, los cuales se encargaban de los detenidos por motivos políticos. Sin embargo el deponente no formaba parte de estos grupos. Los oficiales que no integraban aquellos grupos sólo hacían guardia, y en su caso realizó trabajo administrativo de personal. Señala que ese grupo especial (de inteligencia) tuvo un estatus especial, de partida no usaban de uniforme y en la asistencia diaria aparecían en comisión de servicio. Indica que él, que era más antiguo, no podía darle órdenes. Se perdió la disciplina. Manifiesta que respecto a los detenidos por motivos políticos, si bien existieron, nunca los vio, se informó posteriormente cuando estaba en la Dirección del Personal de la Fuerza Aérea, puesto que allí llegaban los sumarios administrativos de la Fuerza Aérea, entonces comenzó a saber lo que este grupo hacía. Precisa que en una oportunidad, en su calidad de Subrogante del ayudante titular del Director del Personal, le tocó recibir la correspondencia, enterándose de una situación o de un sumario más bien que le llamó mucho la atención. Dice que le llamó la atención este sumario puesto que posteriormente le tocó ratificarlo. La situación era que enviaron a un suboficial de reserva de nombre Carlos Cardoen con un detenido de nombre José Ortigosa hacía el Regimiento Tucapel, detenido después de que el consejo de Guerra en el Regimiento lo dejara libre. Lo anterior lo sabe, pues el propio Carlos Cardoen se lo

dijo. Cardoen era muy amigo de Ortigosa el cual era intensamente buscado. El tema era que en dicho sumario se investigaba al comandante de la fuerza Aérea Andres Pacheco Cardenas, además las actividades dolosas que éste estaba cometiendo al interior de la Base Aérea. En aquel sumario Pacheco Cardenas salió libre, no le pudieron probar nada. Agrega que Ortigosa era fuertemente buscado en la región porque se suponía que era dueño de un campo de Guerrilla, de lo cual, según el declarante, él no tenía antecedentes. Además era intensamente buscado por que era fundador financista del GAP (grupo de amigos personal de Allende). Ortigosa vivía en Rancagua, fue corredor de autos y tenía un garage grande en Diez de Julio. Carlos Cardoen era amigo de Ortigosa y al enterarse que era buscado le aconsejó a Ortigosa presentarse en la fuerza Aérea de Santiago en donde la persona con la cual se presentó, según le dijeron era un general, le señaló que en Santiago no lo buscaban pero que le aconsejaba ir a Temuco a fin de aclarar su situación. Carlos Cardoen en su propio avión lo trasladó a Temuco. Una vez llegado a Temuco a la base Aérea se inicia el operativo en que se señala que fue detenido Ortigosa, el cual fue trasladado hasta el Regimiento Tucapel de Temuco junto a Cardoen. Puntualiza que Carlos Cardoen le contó que a él lo dejaron libre y a Ortigosa lo sometieron a Consejo de Guerra. El resultado del Consejo de Guerra fue que se decretó la libertad de Ortigosa. Estando Carlos Cardoen y la señora de Ortigosa esperando que lo dejaran libre, sintieron los disparos y luego alguien del Regimiento les informó que el detenido había intentado escapar y por eso le habían disparado. Anexa otra situación respecto a un detenido político. En una oportunidad siendo oficial de guardia de la Base Aérea recibió una llamada de un retén de Carabineros de Labranza en donde dichos carabineros informaban que habían encontrado a una persona mal herida en el rio cautín. Dice mal herida puesto que a aquella persona le habían disparado. Esta persona decía que era sacerdote y que había estado detenido en la base aérea. La cosa era que alguien encontró vivo a este sacerdote, que había escapado de la Base Aérea y carabineros llamaba a la base para saber que debían hacer. Expresa que de inmediato le comunicó a su superior Benjamín Fernández y le informó de esto, sin embargo no sabe qué decisión que habrá comunicado él. Posteriormente supo que el sacerdote se había salvado y que había quedado bajo la tutela del obispo de Temuco Sr. Piñera, el cual lo había sanado y posteriormente enviado al extranjero. Acota que además del caso de un profesor suyo, de apellido Morales, al cual lo detuvieron en el Regimiento Tucapel y estando allí lo fusilaron después de un consejo de Guerra. Recuerda que a este profesor le decían “el milico Morales”. Cuando

detuvieron a Morales lo llamó un oficial de ejército de Santiago que era su amigo y era cuñado de Morales de apellido Ferreira, quien le pidió si lo podía ayudar por lo que intentó tomar contacto con este profesor y por el hecho de preguntar, su jefe Benjamín Fernández le llamó la atención, por preocuparse por un detenido (el cual estaba bajo la custodia del Regimiento). Al poco tiempo supo que lo habían matado, imaginando que fue gente del ejército. Después de estas situaciones lo destinaron a la Dirección del Personal. En realidad lo aislaron por ser amigo del senador Renan Fuentealba, notó que eso fue así cuando comentó respecto de su amistad con él. Precisa que conoció a **Hugo Ferrada**, era un enfermero de la Base Aérea de Maquehue. De hecho pidió que lo contrataran como soldado, sin embargo después lo vio participando en el equipo de inteligencia de la Base Aérea. Indica que **Hugo Ferrada** era muy especializado, era casi como médico, no sabe cuál era la razón de tanta especialización ya que era muy joven. Manifiesta que conoció a Enrique Rebolledo Sotelo, le parece que era mecánico de helicóptero. Y a Soto Pinto no lo recuerda.

A.9. HERIBERTO RIVAS ALARCÓN (23 años de edad a la época de los hechos) quien depone de fs. 148 a 149, fs. 200 (**Tomo I**) y de fs. 1081 a fs. 1084 (**Tomo III**).

En declaración extrajudicial de 19 de junio de 2013, rolante a fojas 148 a 149 (Tomo I) expone que ingresó a la Fuerza Aérea de Chile, el 01 de junio de 1973, contratándose en la Base Aérea "Maquehue", lugar donde permaneció hasta el 1985. Señala haber conocido a **Jorge Eduardo CALDERON OTAIZA**, debido a que eran vecinos y amigos de calle Sarmiento, lugar donde residían, con quien mantenía un lazo afectivo ya que el declarante pololeaba con su hermana Mónica y jugaban juntos a la pelota. Recuerda que para el año 1973, específicamente luego del Golpe de Estado, se encontraba designado en la Base Aérea "Maquehue", donde cumplía las labores de mayordomo en el casino de oficiales. Dicha base estaba conformada por aproximadamente doscientos funcionarios encontrándose a cargo un Comandante del cual no recuerda nombre. Fue así que a mediados de septiembre de 1973, observó frente al Pabellón Administrativo detenido y tirado en el pasto a Jorge CALDERON OTAIZA, el cual se encontraba muy delgado con su rostro, cansado. Debido a esto y ya que no podía conversar con él, le entregó a escondidas cuadraditos de azúcar. Posterior a

lo anterior no volvió a ver a su amigo, por lo cual solicitó hablar con el Teniente REYES, el cual se encontraba a cargo del grupo de Inteligencia de la Base, junto al Teniente SCMITH, quien era piloto de helicóptero, el oficial de reserva SANDOVAL POO y el Sargento GARRIDO. Fue así que se le autorizó a conversar con él y solicitó si existía la posibilidad de soltar a su amigo, respondiéndole el Teniente en cuestión que era su vida o la de CALDERON, a lo que se retiró rápidamente y no consultó nunca más. Indica que perdió todo contacto con CALDERON y no lo volvió a ver en la base. Posterior a esto se enteró que su familia se había mudado a La Serena y nunca supo más de ellos. A la pregunta que se le hace, responde que no observó torturas en la Base Aérea "Maquehue", pero sí se escuchaban rumores que los detenidos eran interrogados al interior del pabellón Administrativo. Respecto a lo que se le consulta sobre la detención de **CALDERON OTAIZA**, señala que en el año 1974, tomó conocimiento por intermedio de amistades que su amigo había sido detenido en el sector de Padre Las Casas, por funcionarios de Carabineros, los cuales lo traían a la base y posteriormente se lo llevaban. Finalmente, asevera que desconoce antecedentes respecto de lo sucedido con su amigo, solo fue en la oportunidad antes descrita que lo pudo ver al interior de la Base Aérea "Maquehue".

En declaración judicial de 18 de octubre de 2013, rolante a fojas 200 ratifica íntegramente su declaración policial de fojas 148, agregando que el nombre del teniente Reyes es Leonardo; el piloto de helicóptero se llamaba Rodolfo Schmidt Callejón; el oficial de reserva señalado en su declaración policial es Emilio Sandoval Poo; también estaba el piloto de helicóptero Angel Campos Quiroga, que también pertenecía al grupo de inteligencia; el sargento se llamaba Orlando Garrido, al parecer fallecido. Relata que a su amigo lo vio solo una vez, la que he señalado en su declaración policial. Como era vecino de su familia, ellos le preguntaban por la víctima de autos y les respondía que estaba en la base, pero no sabe si posteriormente se lo llevaron los carabineros, o en la FACH desapareció. Según lo que ha averiguado, los carabineros se ensañaron con él por su militancia política. Informa que sus funciones de mayordomo consistían en estar permanentemente en el casino de oficiales; les servía a los oficiales su

almuerzo, desayunos, aseaba las piezas, por lo tanto no tenía acceso a otras dependencias de la base aérea, ni siquiera iba a los hangares. Afirma que si supiera algo más, lo contaría, si desapareció de la base o de carabineros, pero no sabe nada más.

En diligencia de careo entre Heriberto Rivas Alarcón y Leonardo Reyes Herrera, de fecha 7 de julio de 2022 rolante a fojas 1.081 a fs. 1.084 (Tomo III) El tribunal pregunta si reconoce a la persona que ve en pantalla, el deponente indica que por la edad no lo reconoce bien, pero sí se acuerda del nombre de él, Leonardo Reyes Herrera parece. El tribunal procede a leer la declaración de don Heriberto Rivas de fojas 148, en lo pertinente, la cual es ratificada. Posteriormente el tribunal lee la declaración de fojas 200, la cual el deponente ratifica. El tribunal le pregunta si se mantiene en sus dichos, a lo cual el Sr. Rivas contesta que sí. El tribunal pregunta si desea agregar algo más respecto a lo que ha manifestado el Sr. Reyes, el deponente indica que no, porque desconoce sus demás declaraciones, las otras que tuvo en vuelo él, pero sí que atendió en el casino de oficiales.

A.10 LUIS ALBERTO SOTO PINTO (años de edad a la época de los hechos) quien declara de fs. 490 a fs. 493 **(Tomo II)**, de fs. 527 a fs. 528 **(Tomo II)**, de fs. 1035 a fs. 1036 **(Tomo III)**.

En **declaración extrajudicial** de fecha 16 de enero de 2017 rolante a **fs. 490 a fs. 493 (Tomo II)** dijo que su trayectoria en la Fuerza Aérea de Chile, la ha dado a conocer en declaraciones policiales y judiciales, debiendo dejar en claro que para el 11 de septiembre del año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco, ostentaba el grado de Cabo 2° y era especialista en mecánico tripulante helicóptero. Se encontraba encasillado en la escuadrilla de operaciones de vuelo, al mando del Capitán de Bandada Luis Puebla Leiva y la escuadrilla la conformaban alrededor de veinte funcionarios, entre mecánicos y pilotos, recordando entre ellos Germán Toro Pino, Luis Santana Pacheco, Jorge Valdebenito, Darwin Villalobos Cárdenas, Hugo Abarzúa Ortiz (fallecido), Nelson Mancilla (fallecido), Marcos Miranda (fallecido), Astudillo, Sandoval Pozo, Orlando Villanueva, Paredes y otros que no recuerda en este momento. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, la Base Aérea Maquehue tuvo cambios radicales a las labores cotidianas

propias del servicio, es decir, comenzaron a efectuar servicios de guardia de cuartel, patrullajes de toque de queda, allanamientos y en algunos casos detenciones de personas, debiendo hacer presente que el mismo 11 de septiembre, tuvo que volar en helicóptero a la ciudad de Concepción, enterándose en dicha ciudad de lo sucedido en el país, por lo que tuvo que permanecer cerca de cinco días en Concepción, para luego retornar a Temuco. A su retorno, se percato que en la Base Aérea se habían conformados varios grupos dedicados a labor operativas, tales como patrullajes, allanamientos y detenciones, pero en general todos participaron de estas funciones. Los detenidos eran llevados a la Base Aérea, donde eran ubicados en el pasillo de la Comandancia, siendo custodiados por los soldados conscriptos. La responsabilidad de los detenidos y quien se encontraba a cargo de estos era el segundo Comandante Benjamín Fernandez, le seguía en el mando Jorge Freiggang Campaña y Angel Campos Quiroga. Además, añade que los oficiales presentes en esa unidad en aquella época eran los capitanes Puebla Leiva, Enrique Isaac Casacuberta, Antonio Monserrat, Rodolfo Smitsch, los hermanos Tenientes Aníbal y cesar Tejos Echeverría, Jaime Echeñique Seco, Leonardo Reyes Herrera Víctor Volante Leonardi, Antonio Sepulveda, Rodolfo Olivares, Javier Pérez y otros que no recuerda. Debe aclarar; que en su caso no participó en interrogatorios, pero si tiene conocimiento y por lo observado en el periodo de investigación, que los antes mencionados deberían conocer de los hechos que sucedían con los detenidos al interior de la Base Aérea. También es de su conocimiento que algunos prisioneros eran trasladados. Al Regimiento "Tucapel". A la Base Aérea también se sumó a las labores un grupo de funcionarios en calidad de reservistas que prestaron colaboración en el año 1973, correspondientes a: Ramirez, Cantarutti, Humberto Bhon, Pablo Alister, Emilio Sandoval Poo, René y Claudio Picasso y otros que no recuerda en este momento. Este grupo desarrollaron labores de patrullajes, como también Oficiales de Servicio en guardias de cuartel, pero no los vio vinculados con detenidos: A su consulta, en marzo de 1974 el Departamento Segundo en Base Maquehue donde fue destinado para implementar la Registratura, es decir registrar toda la documentación secreta o reservada que había llegado a la unidad para otorgarle un número de ingreso y ser respondida. Esta labor la realizó durante un periodo de seis meses aproximadamente, para luego recopilar mapas y planos de países limítrofes (Bolivia, Perú y Argentina) y realizar Inteligencia exterior, especializándose en esta área hasta cuando fue destinado a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) en el año 1976 y en el año 1977 lo destinaron a crear la Embajada de Chile

en Bolivia. Luego fue destinado a la Embajada de Chile en Argentina en 1978, para retornar a la DIFA a finales de ese año. A su pregunta, la primera oficina al ingresar al Edificio de la Comandancia era la Ayudantía; a continuación la oficina de personal y finanzas, luego sala de conferencia o reuniones, después la sala donde se interrogaba a los detenidos. Aledaño al cuarto de interrogatorios había una puerta que permitía el ingreso a los dormitorios de los clases y luego al de los conscriptos. Al final de este pasillo había otra puerta que era de Abastecimiento. En dicha sala ingresaban los detenidos para ser interrogados en cuyo interior participaban oficiales junto a escribientes. A su consulta, todo personal que formaba parte de la Ayudantía ubicada en la comandancia cumplía esa labor, recordando al funcionario Heriberto Pereira con esa especialidad. De los detenidos que estuvieron en la Base Aérea, nunca conoció a ninguno de ellos, debiendo manifestar que ignora si falleció algún de ellos en la Base. Agrega que nunca trasladó detenidos desde la base aérea a otro recinto o unidad militar o policial, salvo en los patrullajes en que los detenidos por motivos de toque de queda los iban a dejar a Carabineros o Investigaciones. Con relación a la consulta, debe manifestar que era una constante que se efectuaran traslados en helicópteros desde la Base a otros sectores de la región, a personal del Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de inspeccionar pasos fronterizos y refugios, recordando en una oportunidad que detrás del Volcán Villarrica, en un refugio y trasladando a personal de Ejército, allanaron y detuvieron a tres personas adultas, del sexo masculino, los cuales fueron llevados a la Base Aérea y posteriormente trasladados por el personal que los acompañaba vía terrestre al Regimiento "Tucapel", desconociendo los destinos y las identidades de los detenidos y del personal militar al cual trasladaban. Debe hacer presente que este hecho ocurrió antes del 11 de septiembre de 1973. A su pregunta, nunca realizó patrullajes con Rebolledo Sotelo, el único vínculo laboral que tuvieron y que fue a partir del año 1974 fue que él se dedicaba a contrainteligencia y a registratura, especialidades que se llevaban a cabo en la misma oficina destinada al Departamento Segundo. A su consulta, nunca participó ni tiene conocimiento acerca de interrogatorios, torturas, muertes, ejecuciones, exhumaciones o inhumaciones, lanzamientos de cuerpos a ríos, lagos, por parte de personal de Base Maquehue u otra rama de las Fuerzas Armadas. Respecto a la víctima Jorge Calderón Otaiza, quien el Oficial entrevistador le comunica que era un estudiante universitario soltero, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que

pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron en la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehue, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Respecto a lo anterior ignora completamente los antecedentes sobre esta persona y es la primera vez que escucha su nombre.

En **declaración judicial** de fecha 19 de julio de 2017 rolante a **fs. 527 a fs. 528 (Tomo II)** Ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, rolante a fs. 540 a fs. 543, y que en este acto me ha sido leída. Para 1973 había una agrupación de conscriptos que eran los encargados de las guardias. Alrededor de 30 o promociones como de 30. Estos se rotaban diariamente en su servicio de guardia. Estaban bajo las órdenes de oficial de ronda, que es el responsable de todo lo que pasaba en la unidad. Da cuenta al comandante de la unidad, oficial de servicio, quien es responsable de lo que sucede en la guardia, suboficial de servicio, comandante de guarida, cabo de relevos y los centinelas, que lo constituyen los cabos y conscriptos. En estas circunstancias estaban los detenidos protegidos o vigilados por este grupo. Esto es dinámico. La situación varía cada día y a cada momento. Los primeros 10 días él estuvo en Concepción y cuando llegó se encontró con personas detenidas en ese lugar. Se presentaban a la unidad por bandos. También hubo personas que fueron a buscarlas a sus casas. No recuerda nombres. El Tribunal le lee de fs. 575 a fs. 576, en lo pertinente, a lo que el deponente señala: de partida no recuerda a la persona que declara, dicen que es un mayordomo, no sabe quién es de apellidos Gutiérrez Palma. No sabe quién es. No recuerda a esa persona como integrante de la base, como mayordomo. No lo recuerda él como persona ni recuerda el hecho tampoco. Menos una persona ensangrentada en esas condiciones; nada de lo que se le lee y él relata lo recuerda. El Tribunal le lee la declaración de fs. 500 a fs. 503, en lo pertinente, a lo que el deponente señala: si recuerda al "negro Marín", cuyo segundo apellido cree que era Palominos (QEPD); efectivamente le decían el "lolo Soto"; quisiera aclararlo con él en persona porque no tiene recuerdos del hecho ni tampoco tiene recuerdos de él, eso del ácido es una cuestión él, la que no le encuentro sentido, de tener botellas con ácido en los dormitorios, él trabajaba en el casino de oficiales, pero no le encuentro sentido a

tener ese tipo de cosas en un dormitorio y pedirle personalmente para aclarar el tema porque no está en condiciones de asegurar que eso sucedió. El Tribunal le lee la declaración de fs. 506 a fs. 509, en lo pertinente; a lo que el deponente señala. Por el apellido recuerda a este oficial, ellos se enteraban de lo que sucedía en el regimiento Tucapel por los bandos, algún bando de lo que sucedió con ellos con la ley de fuga, que cree que se escaparon cinco, fallecieron cinco y ellos se preguntaban como sucedió esto si ellos estaban en la base y no sintieron nada, ni se alertó ningún sistema de alerta. Coincidentemente esa noche estaba la caravana de la muerte estacionada en el regimiento Tucapel, esto el 5 de octubre de 1973. Lo sabe porque ese día el helicóptero Puma cargó combustible en la base aérea. De esto hay una bitácora. Los nombres de estos cinco están en el bando publicado por el ejército, A su pregunta, Hugo Ferrada era un enfermero de la base. No trabajó con él.

En **diligencia de careo judicial** de fecha 27 de septiembre de 2021 con la persona de Héctor Gutiérrez palma, rolante a **fs. 1035 a fs. 1036 (Tomo III)** el tribunal le pregunta Sr. Soto, ¿reconoce usted a la persona que se le exhibe en cámara? Sr. Soto: No, no la ubica. Sr. Soto: hay unos datos de su lectura al inicio que no están correctos. Sr. Ministro: ¿Usted para el año 73 que grado tenía? Sr. Soto: Cabo segundo. Sr. Ministro: Cabo segundo. Se procede a leer de modo íntegro declaración de Luis Alberto Soto Pinto de fs. 490 a fs. 493 de autos, de fecha 16 de enero de 2017. Esa es su primera declaración don Luis. ¿Está de acuerdo con ella? Sr. Soto: Está de acuerdo con ella. Hay una firma, ¿la alcanza a ver? ¿Es suya? Sr. Soto: Sí, reconoce como suya la firma. Se procede a leer íntegramente la declaración de fs. 527, declaración judicial. Sr. Soto: si, reconoce como suya la firma. Se procede a leer las declaraciones del Sr. Gutiérrez Palma, de fs. 418 a fs. 419, en la parte pertinente, de fecha 13 de septiembre de 2016. Sr. Ministro: Sr. Soto, ¿qué tiene que decir de esa declaración, donde a usted lo sindicaron que vendría ahí con la persona Calderón Otaiza entrando a la enfermería? Sr. Soto: La verdad Sr. Ministro que no, no tiene conocimiento de ese hecho, no recuerda el hecho ni que haya sucedido el traslado de esa persona a la enfermería. No tiene ninguna noción de que eso lo haya hecho él. No sabe si este señor le confundió, no, no lo tiene claro, pero del hecho en si no tiene conocimiento. Sr. Ministro: Bien, gracias. Sr. Ministro: Entonces Sr. Soto Pinto, ¿se mantiene en sus dichos? Sr. Soto: Sí Sr. Ministro, se mantengo en sus dichos.

B. DOCUMENTOS (20)

- | | |
|--|---|
| 1. Acta de nacimiento | 11. Oficio Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile |
| 2. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación | 12. copia sentencia dictada Rol 3525-2018 |
| 3. Informe de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal | 13. red familiar de Eduardo Calderón Otaiza |
| 4. certificado de nacimiento y extracto de filiación y antecedentes | 14. Copia de sentencia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco |
| 5. informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad | 15. Copia de procesamiento dictado en causa rol 2182-98 “Etiene Pesle de Menil” |
| 6. Informe de la Jefatura Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile | 16. Copia simple de sentencia de primera instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etiene Pesle de Menil” |
| 7. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos | 17. copia de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “ |
| 8. Informe del Departamento del Derechos Humanos de Carabineros de Chile | 18. copia de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 2182-98 |
| 9. Certificados de defunción | 19. Certificados de defunción |
| 10. Informe de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile | 20. Órdenes de investigar |

B.1 De fs. 1 (Tomo I) acta de nacimiento de Jorge Eduardo Calderón Otaiza.

B.2. de fs. 3 a fs. 5 (Tomo I) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación respecto de Jorge Eduardo Calderón Otaiza señala que el 30 de septiembre de 1973 desaparece desde ese mismo recinto, Jorge Eduardo Calderón Otaiza, 28 años, empleado de la caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de ingeniería en la Universidad de Temuco y militante de la juventud socialista. Fue detenido en su domicilio por carabineros de la comisaría de padre las casas y trasladado posteriormente a la base aérea de Maquehue, recinto en el cual fue visto en deterioradas condiciones físicas, los familiares afirman que los efectivos armados nunca reconocieron su detención. Hasta la fecha Jorge Eduardo Calderón Otaiza permanece desaparecido. Esta comisión se ha formado

la convicción, luego de analizar acuciosamente los antecedentes de los casos anteriores, de que Maria Arriagada y Jorge Eduardo Calderón Otaiza, fueron víctimas de desaparición forzada por responsabilidad en su detención y posterior desaparición de agentes del Estado quienes servían en el recinto Base Aérea Maquehue, ello constituye grave violación a los derechos humanos.

B.3. de fs. 43 (Tomo I) Informe de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal que informa que revisados los archivos, no se encuentra registro de protocolo de autopsia de Jorge Eduardo Calderón Otaiza.

B.4. de fs. 44 a fs. 46 (Tomo I) certificado de nacimiento y extracto de filiación y antecedentes remitidos por la Dirección del Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de la víctima Jorge Eduardo Calderón Otaiza, Run 5.518.579-4, registrando como padre a José Sabino Calderón Ortega y como madre a Gladys Inés Otaíza Tapia, informando además que no registra inscripción de defunción.

B.5. de fs. 48 a fs. 50 (Tomo I) informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que adjunta relato resumen de los antecedentes que existen en la función sobre la víctima señalando como situación represiva lo siguiente: Jorge Eduardo Calderón Otaíza, soltero, estudiante universitario, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". Solamente dos de los policías ingresaron a la vivienda, quienes manifestaron a sus padres que lo necesitaban para sostener una breve conversación con el Teniente Ramón Morales y que pronto estaría de regreso en su domicilio. Esto ocurrió cerca de las 17 horas. A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehua, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Sin embargo, en dicho recinto nunca recibieron su detención. Desde entonces nunca más tuvieron noticias de su hijo, a pesar que consultaron sobre su situación a diversos organismos del Estado, las autoridades

siempre negaron su detención. Gestiones judiciales y/o administrativas El 2 de abril de 1979, su caso fue incluido en la presentación de personas detenidas desaparecidas tras el 11 de septiembre de 1973. Por los casos de las personas desaparecidas del Departamento de Temuco, entre las cuales se encuentra la víctima, la Corte de Apelaciones de Temuco nombró un Ministro en Visita, Alfredo Meynet González, para que instruyera la causa 2-79. En la orden de Investigar emanada de la causa, diligenciada por la Policía de Investigaciones, se da cuenta al Tribunal de la existencia de una declaración jurada efectuada por don José Calderón Ortega, y doña Gladys Otaíza Tapia, y de un amigo de éstos, don José Manuel Henríquez Flores, los dos primeros padres del desaparecido, en la cual se expónen las circunstancias de la Detención y posterior desaparecimiento del afectado. El 19 de junio de 1979, compareció ante el Tribunal don José Calderón, exponiendo al Tribunal que una vez que fue informado que su hijo sería puesto a disposición de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Maquehue, se apersonó a ese lugar y habló con un Teniente cuyo nombre no lo supo, quien le manifestó que su hijo no había sido llevado a esa Unidad Militar. Pero que en forma extraoficial, se enteró por un Suboficial Mayor de nombre Heriberto Rivas efectivamente había llegado a la Aviación y que él lo había recibido. El 5 de julio de 1979 compareció a la presencia judicial don Ramón Emilio Morales Gravera, Capitán de Carabineros, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 era el jefe de la Tenencia Padre Las Casas pero que no recuerda a Jorge Calderón Otaíza. El 25 de octubre de 1979 el Ministro en Visita se declaró incompetente de seguir conociendo la causa y remitió los antecedentes al IV Juzgado Militar de Valdivia, con el fundamento de que todas las personas cuyo desaparecimiento se investiga fueron detenidas, en distintas oportunidades, por Carabineros, Ejército o Fuerza Aérea, en diversas patrullas, actuando inequívocamente en actos de servicio, concluyendo que cabe presumir alguna suerte de responsabilidad en el desaparecimiento de estas personas, del personal uniformado que procedió a su detención comprobada. En diciembre de ese año, el Tribunal Militar aceptó su competencia de conocer los hechos y ordenó a la Fiscalía Militar Letrada de Cautín instruir la causa 1192-bis-79. Ante esta Fiscalía Militar, en junio de 1980, compareció el Suboficial en retiro de la FACH, Heriberto Rivas Delgado, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 prestaba servicio en la Base Aérea de Maquehue, pero afirma en forma absoluta que carece de cualquier antecedente que diga relación con Jorge Calderón Otaíza, a quien dice no conocer, como tampoco conoce a su padre José Calderón Ortega. El 24 de

octubre de 1980 el Juez Militar sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

B.6. de fs. 51 (Tomo I) informe de la Jefatura Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile indicando que se procedió a revisar la información de movimientos migratorios que corresponde a la información de viajes rescatada de los libros, CDS y Microfichas, que fueron subidas al sistema histórico de viajes de la institución por la empresa de digitación "Upgrade". Se hace presente que el periodo histórico 1960 a 1981, presenta lagunas de información, además no existiendo información del año 1968, debido a que no se encuentran la totalidad de los soportes originales de los archivos de Departamento Control Fronteras, dependiente de esta Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Revisado los archivos del Departamento Control Fronteras, dependiente de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, a contar del 01.ENE.973 a la fecha, la persona en comento; no registra movimientos migratorios.

B.7. de fs. 76 a fs. 132 (Tomo I) informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que contiene a fs. 78 acta de nacimiento de Jorge Eduardo Calderón Otaiza. De fs. 87 a fs. 88 lo contenido en el informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. De fs. 83 declaración de Gladys Otaiza Tapia, a fs. 94 declaración de José Henríquez Flores, a fs. 95 declaración de Sigisfredo Ascencio Torres, a fs. 103 declaración de Gladys Inés Otaiza Tapia, a fs. 106 declaración de José Manuel Henríquez Flores,

B.8. de fs. 154 a fs. 159 (Tomo I) informe del Departamento del Derechos Humanos de Carabineros de Chile que contiene relación de carabineros de Chile que figura **en la tenencia de padre las casas en el año 1973.**

B.9. de fs. 164 a fs. 181 (Tomo I), de fs. 1000 a fs. 1001 (Tomo III); certificados de defunción emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de Alejandro Cabezas Paice Armando Enrique Bravo Gallegos, Arturo Correa Gallardo, Roberto Oyarzún Villegas, Carlos Burgos Arias Enrique Onofre Albornoz Fuentes, Manuel Jesus Hidalgo Garrido Hernán Navarrete Reyes, Víctor Navarrete Reyes Humberto Painevilu Lincovilu Héctor David Vallejos Mancilla, Dagoberto Celso Quinteros Fernández, Luis Alberto Figueroa Cifuentes, Jun Vargas Melivilu, Raul González Escobar, Domingo Antonio Navarrete Muñoz, Lucas Vergara Valdebenito, Orlando Jaramillo Leal.

B.10 de fs. 396 a fs. 413 (Tomo II) informe de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile remitiendo nómina de personal cuyas remuneraciones fueron ajustadas en la Base Aérea Maquehue asentada en la ciudad de Temuco,

en el periodo consultado, es decir, septiembre a diciembre de 1973. Figura el nombre de Crisóstomo Ferrada Carrasco.

B.11. De fs. 730 a fs. (Tomo II) Oficio Reservado N° 8660 de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile que remite fotocopias autenticadas de las hojas de vida de los períodos que en cada caso se indican pertenecientes a los ex funcionarios señalados en el requerimiento judicial, entre los que se encuentra Leonardo Reyes Herrera. Asimismo informa que en las bases de datos no hay registros que den cuenta de la existencia de las Hojas de Vida de los ex funcionarios que a continuación se mencionan: Berthold Erwin **Bohn** Sauterel y Antonio Sergio **Montserrat** Mena

B.12. De fs. 478 a fs. 761 (Tomo II) copia sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2019 por Excelentísima Corte Suprema Rol 3525-2018 por caso de Etienne Pesle de Menil, que confirma sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones de Santiago que condena a integrantes de la denominada Patrulla Salvaje de la Base Aérea Maquehue de la Región de la Araucanía.

B.13. De fs. 764 (Tomo II) red familiar de Eduardo Calderón Otaiza enviado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

B.1.4. De fs. 779 a fs. 842 (Tomo III) copia de sentencia de segunda instancia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 113.969, de fecha 16 de diciembre de 2020

B.15. De fs. 860 a fs. 866 (Tomo III) copia simple de procesamiento dictado en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 20 de diciembre de 2013.

B.16. De fs. 868 a fs. 950 (Tomo III) copia simple de sentencia de primera instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 09 de mayo de 2016 la que expresa *“Que se condena además a EMILIO SANDOVAL POO, CRISOSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO, JORGE ALIRO VALDEBENITO ISLER, HERIBERTO PEREIRA ROJAS, LUIS OSMAN YAÑEZ SILVA, LUIS ALBERTO SOTO PINTO, ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO, LEONARDO REYES HERRERA y JORGE EDUARDO SOTO HERRERA, en calidad de autores del delito de secuestro calificado cometido desde el 19 de septiembre de 1973 en la persona de Etienne Pesle de Menil, a*

sufrir cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa”

B.17. De fs. 952 a fs. 964 (Tomo III) copia simple de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etiene Pesle de Menil” con fecha 26 de enero de 2018 que declara *“Que **se confirma** la referida sentencia **con declaración** de que la pena que se impone a los condenados Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osman Yañez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera, por el delito de asociación ilícita perpetrado entre el 11 de septiembre de 1973 y comienzo del año 1974 es la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena.” “Que, asimismo, **se confirma** la referida sentencia en cuanto se condena a los acusados antes individualizados, como autores del delito de secuestro calificado, **con declaración** de que se eleva la sanción impuesta a cada uno de ellos a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias del artículo 28 del Código Penal.”*

B.18. De fs. 966 a fs. 979 (Tomo III) copia simple de sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema en causa rol 2182-98 “Etiene Pesle de Menil” con fecha 12 de noviembre de 2019

B.19. Certificados de defunción:

- a) Fs. 1.102 (Tomo III) Emilio Sandoval Poo
- b) Fs. 1.103 (Tomo III) Orlando Garrido Riquelme

B.20. Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos:

- a) De fs. 54 a fs. 68 (Tomo I) Informe policial N° 1322 que contiene declaraciones extrajudiciales de familiares de la víctima.
- b) De fs. 143 a fs. 151 (Tomo I) Informe policial N° 3811 que contiene declaraciones extrajudiciales de testigos.
- c) De fs. 202 a fs. 210 (Tomo I) Informe policial N° 4877 que contiene declaraciones de ex funcionarios de Carabineros

- d) De fs. 246 a fs. 256 (Tomo I) Informe policial N° 3707 que contiene declaraciones de ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile
- e) De fs. 266 a fs. 273 (Tomo I) Informe policial N° 1184 que contiene declaración extrajudicial y diligencias para ubicar testigos
- f) De fs. 276 a fs. 280 (Tomo I) Informe policial N° 5924 que contiene declaración extrajudicial de ex funcionario de Carabineros de Chile.
- g) De fs. 284 a fs. 295 (Tomo I) Informe policial N° 554 que contiene declaraciones extrajudiciales de ex funcionarios de Carabineros y de la Fuerza Aérea.
- h) De fs. 317 a fs. 384 (Tomo I) Informe policial N° 748 que contiene declaraciones extrajudiciales de testigos
- i) De fs. 455 a fs. 503 (Tomo II) Informe policial N° 1000 que contiene declaraciones de ex funcionarios de la Fuerza Aérea y diligencias para ubicar a ex funcionarios de esta institución.
- j) De fs. 545 a fs. 558 (Tomo II) Informe policial N°6262 que contiene declaraciones de ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile
- k) De fs. 607 a fs. 614 (Tomo II) Informe policial N° 3660 que contiene declaraciones de ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile
- l) De fs. 629 a fs. 664 (Tomo II) Informe policial N°1156 que contiene declaraciones de ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile
- m) De fs. 771 a fs. 772 (Tomo III) Informe policial N° 1543 que contiene diligencias para individualizar y ubicar a testigos.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que inmediatamente de ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, el Comandante del Grupo n.º 3 de Helicópteros de la Base Aérea Maquehue, Coronel Andrés Pacheco Cárdenas (fallecido, según consta a fs. 1000, **Tomo III**), delegó el mando operativo de la base al segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (fallecido, según consta a fs.1001, **Tomo III**) para poder asumir funciones en el CAJSI (Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna), cuya oficina se ubicaba en el Regimiento de Infantería n.º 8 “Tucapel” de la ciudad de Temuco. Sin embargo, nunca dejó

formalmente el mando de la unidad antes indicada acudiendo diariamente a ese lugar para determinar las acciones a seguir.

B.- Que a partir de ese mismo día la nueva autoridad local llamó a servicio activo a varios oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea, que eran pilotos civiles, y a otros oficiales en retiro que se integraron al contingente de la Base Maquehue y que, según su grado, comenzaron a cumplir las mismas funciones operativas que el resto de los oficiales y suboficiales de línea, al menos durante el período más álgido de septiembre y octubre de 1973, según testimonio de Berthold Erwin Bohn Sauterel, de fs. 262 a fs. 264 **(Tomo I)**. Estas funciones comprendían integrar patrullas destinadas a efectuar control de toque de queda, resguardo de instalaciones de servicios públicos y puentes, participar en operativos de distinta magnitud cuya finalidad era allanar domicilios y efectuar detenciones de personas contrarias al nuevo régimen o partidarias de la administración saliente, integrar tripulaciones de helicópteros con la finalidad de trasladar detenidos de un punto a otro de la región, tripular avionetas particulares con el objeto de vigilar la zona costera y efectuar turnos de oficial de ronda o de guardia al interior de la base aérea. Estos últimos turnos podrían haber sido de entre 12 a 24 horas. Cabe señalar que gran parte de los oficiales de reserva de la Fuerza Aérea fueron nombrados, además, como interventores en diferentes empresas estatales, por lo que tuvieron que compatibilizar ambas actividades durante el período antes señalado, sin que dejaran de cumplir estas tareas, ya que cada rama de las fuerzas armadas y de orden presentes en la ciudad designó un interventor por empresa, por lo que las actividades en las empresas intervenidas siempre estuvieron bien cubiertas, según testimonios de Pablo Aquiles Alister Contreras de fs. 259 a fs. 261 **(Tomo I)**, de fs. 308 **(Tomo I)**.

C.- Que ante la necesidad de sistematizar y coordinar las actividades destinadas a la detención de personas y su traslado a la base aérea Maquehue para su posterior interrogatorio, el Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández organizó un grupo especialmente seleccionado para tratar temas de inteligencia y de detenidos políticos, grupo que estaba bajo su mando y que incluyó a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (fallecido, según consta a fs. 984,

Tomo III), Jorge Freygang Campaña (fallecido, según consta a fs. 985, **Tomo III**), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido, según consta a fs. 986, **Tomo III**), a varios efectivos del cuadro permanente de distinta graduación entre los que se cuentan, entre otros, a Luis Alberto Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Rebolledo Sotelo; y a un empleado Civil que tenía la especialidad de enfermería de nombre Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este grupo, a partir de esa fecha paulatinamente dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad para avocarse a las tareas que les eran asignadas por el alto mando de la base Maquehue, adquiriendo un estatus especial, puesto que no usaban uniforme, y en la asistencia diaria aparecían en comisión de servicio (según testimonio de Nelson Luis Agustín Seckel Catalán de fs. 439 a fs. 442 Tomo II).

D.- Que este grupo especial recibió la colaboración alternada y esporádica de oficiales de línea y de reserva que, de motu proprio o por una orden recibida expresamente, se integraron en algunas oportunidades a los patrullajes destinados a allanar domicilios y detener personas o presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos que permanecían al interior de la base. Las personas detenidas en los diversos operativos fueron mantenidos en dependencias de la guardia, de la enfermería, en dos oficinas ubicadas en el edificio Administrativo o de la Comandancia, en una antigua torre de madera que era usada anteriormente para guardar material no usado, y que después del 11 de septiembre fue habilitada para los fines señalados, y también en alguna oportunidad se trasladaron hasta un hangar ubicado en el interior de la base.

E.- Que muchos de estos detenidos permanecieron recluidos en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales antes indicados, además de haberseles suministrado, en ciertos casos, drogas como el Pentotal, para que confesaran sus supuestos crímenes. Dicha droga era administrada por el enfermero de la base. También durante ese tiempo los detenidos fueron sacados al patio de la unidad durante el día para que descansaran un poco o fueron

trasladados hacia los baños existentes en la unidad, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en el que se encontraban estas personas. Algunos de estos conscriptos tuvieron que cumplir tareas de centinela para vigilar el lugar donde los detenidos se encontraban. Por último, los operativos aéreos realizados en helicópteros en algunas ocasiones consistieron en trasladar tropas de ejército hacia localidades de la IX región cuya misión era detener personas contrarias al régimen militar. Estas personas fueron trasladadas hacia la base aérea Maquehue y también al Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de esta ciudad, aterrizando los aparatos que los transportaban en ambas unidades, según fuese el caso. De igual manera, se efectuaron traslados de detenidos por tierra desde la base aérea Maquehue hasta el regimiento Tucapel, los que fueron cumplidos por integrantes del grupo especial descrito anteriormente y también en alguna ocasión por oficiales de reserva que recibieron una orden para tales efectos.

F.- Que Jorge Eduardo Calderón Otaíza, 28 años, empleado de la Caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Temuco y militante de la Juventud Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455 de Padre Las Casas, lugar donde vivía junto a su familia, por carabineros de la Comisaría de Padre Las Casas, el día 30 de septiembre de 1973, siendo trasladado, posteriormente, a la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile, recinto en el cual fue visto en deterioradas condiciones físicas, según testimonio de Heriberto Rivas Alarcón de fs. 148 a fs. 149 **(Tomo I)** y de fs. 200 **(Tomo I)**, **funcionario de la Fuerza Aérea de Chile**, quien conocía a Jorge Eduardo Calderón Otaíza debido a que eran vecinos y amigos de calle Sarmiento de Padre Las Casas, puesto que, además, mantenía una relación amorosa con la hermana de Calderón Otaíza de nombre Mónica, y también jugaban juntos fútbol.

G.- Que como se indica en la letra C precedente, Heriberto Rivas Alarcón en declaraciones de fs. 148 a fs. 149 **(Tomo I)**, de fs. 200 **(Tomo I)**, de fs. 1081 a fs. 1084 **(Tomo III)**; en septiembre de 1973, posterior al día 11, vio detenido y tirado en el pasto a Jorge Eduardo Calderón Otaíza frente al Pabellón

Administrativo, quien se veía muy delgado y con su rostro cansado. Debido a esto, y ya que no podía conversar con él, le entregó a escondidas cuadraditos de azúcar. Posterior a esto no volvió a ver a su amigo, por lo que solicitó hablar con el Teniente Leonardo Reyes, el cual se encontraba a cargo del grupo de inteligencia de la Base junto al Teniente Schmied, el oficial de reserva Sandoval Poo (fallecido, según consta a fs. 1102, **Tomo III**), y el Sargento Garrido (fallecido, según consta a fs. 1103, **Tomo III**). Fue así que Leonardo Reyes Herrera le autorizó a conversar con él, pidiéndole, además a Reyes Herrera, si acaso existía la posibilidad de soltar a su amigo Calderón Otaíza, respondiéndole el Teniente Leonardo Reyes Herrera que era su vida o la de Calderón Otaíza, ante lo cual se retiró rápidamente y no consultó nunca más por Jorge Eduardo Calderón Otaíza.

H.- Que, por otra parte, Héctor Gutiérrez Palma, soldado segundo de la Fuerza Aérea de Chile a contar del día 1 de agosto de 1973, según consta en declaraciones de fs. 418 a fs. 419 (**Tomo II**), de fs. 429 a fs. 432 (**Tomo II**), de fs. 585 a fs. 586 (**Tomo II**), de fs. 1002 a fs. 1003 (**Tomo III**), de fs. 1035 a fs. 1036 (**Tomo III**), de fs. 1074 a fs. 1079 (**Tomo III**), de fs. 1074 a fs. 1080 (**Tomo III**), conocía a Jorge Eduardo Calderón Otaíza desde el liceo, ya que era conocido por ser simpatizante del gobierno de Salvador Allende. Es del caso en que encontrándose Gutiérrez Palma esperando atención dental en la enfermería de la Base Aérea, repentinamente entran dos funcionarios de la Base Aérea, quienes hacen salir a todos quienes estaban dentro de la enfermería, quedando él mismo al interior de la enfermería, no obstante el alboroto que se formó. Los funcionarios llevaban sostenido a un hombre ensangrentado, con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo, a quien pudo identificar como Jorge Eduardo Calderón Otaíza, quien estaba convulsionando, momento en el que se abre la puerta de la enfermería y lo recibe el enfermero Ferrada, de quién no está seguro si aún era soldado segundo o ya era empleado civil con rango de oficial, momento desde el cual no supo más de Jorge Eduardo Calderón Otaíza.

I.- Que agrega Héctor Gutiérrez Palma a fs. 430 (**Tomo II**), que cuando vio a Calderón Otaíza era un guiñapo humano; que pensó que estaba muerto; se movía como una gelatina, por un acto reflejo que el cuerpo mantiene,

independientemente de la actividad cerebral; no se valía por sí mismo, y que le costó mucho reconocerlo, no obstante que él lo conocía muy bien; que quienes lo llevaron a la enfermería lo hicieron desde el lugar donde lo estaban interrogando que distaba unos 30 metros de la enfermería, lo llevaron en vilo, no caminaba y que los que lo llevaron fueron funcionarios de la misma base aérea, cuyas identidades no recuerda. Que él, por cosas de la vida, se quedó ahí sin razón, y que quienes llevaron a Calderón Otaíza junto al enfermero Ferrada debieron haberlo visto, pero no le preguntaron nada ni tampoco lo hicieron salir; que estuvo como invisible para ellos, señalando, además, que con Ferrada ingresaron juntos a la institución, razón por la que lo conocía bien.

J.- Que hasta esta fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial el mando de la Fuerza Aérea de Chile que se desempeñaba en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Jorge Eduardo Calderón Otaíza y la ubicación de su cuerpo, manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre los hechos que se han mencionado en los párrafos precedentes. Asimismo, según antecedentes del proceso, no hubo instrucción de investigaciones respecto a los hechos que rodearon la detención y secuestro calificado de Jorge Eduardo Calderón Otaíza.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados en esta etapa procesal, constituyen el delito de **secuestro calificado** en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA** previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, en su **carácter de lesa humanidad**.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltrma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitruftuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

U. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

V. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

W. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

X. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Y. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

Z. Causa rol 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por el delito de Detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; Apremios ilegítimos en las personas de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; Homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

P.16 Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

Q.17 Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

R.18. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

S.19. Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

T.20. Causa rol 113.999 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte

de Nolberto Enrique Teodoro Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

U.21. Causa rol 114.058 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos (tormentos) en la persona de Manuel Antivil Huenuqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

V.22. Causa rol 6.345 del ingreso Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de Homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

W.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

X.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Y.25. Causa rol 114.103 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de fecha 03 de septiembre de 2021.

Z.26. Causa rol 18.782 del ingreso del Juzgado de Letras de Curacautín, para investigar los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

AA.1. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de Homicidio Calificado en las personas de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

BB.2. Causa rol 45.355 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

cc.3. Causa rol 18-2011 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

DD.4. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, para investigar el delito de secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere

lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

DECLARACIONES INDAGATORIAS.

8°) LEONARDO REYES HERRERA. (29 años de edad a la época de los hechos) Declara a fojas 298 a fs. 300, de fs. 381 a fs. 383 (**Tomo I**), fs. 484 a fs. 486, 700 a fs. 701, 707 a fs. 708 (**Tomo II**), de fs. 1081 a fs. 1084 (**Tomo III**).

En declaración judicial de fecha 27 de abril de 2015, rolante a fojas 298 a 300 (Tomo I) Ratifica declaración extrajudicial (que no consta en este proceso) y aclara lo siguiente de su declaración: Los detenidos que llegaban a distintas horas, a estas personas había que controlar su ingreso. Su función era identificatoria. Esto los dos primeros días después del 11 de septiembre. Tuvo que identificar a las personas que llegaban detenidas, puesto que todas tenían causas o razones distintas de su detención. La función no era individualizarlos políticamente sino solo controlar quienes eran y por qué estaban ahí. Posterior a esto las personas eran enviadas al regimiento. Las instrucciones que recibió para tomar estos registros fueron hechas a dedo por el comandante Fernández, que es lo que recuerda. El movía la unidad, no hubo un documento escrito para cumplir esta tarea. Otro punto que quiere reafirmar de su declaración es que el viaje que realizó con el capitán de ejército Manuel Fernández Carranza fue trasladarlo a las distintas localidades ubicadas de Pucón al interior, que era para ayudar a la gente. Asegura que no recordaba esta comisión de la que se habló en su declaración, la recordó porque el Ministro Carreño en otras declaraciones se lo hizo presente, por lo que tampoco recuerda quiénes compusieron su tripulación, la que en un helicóptero estaba integrada por dos pilotos y dos tripulantes quienes eran personal de la base, de la especialidad de tripulantes de aviación. La capacidad

del helicóptero era de 12 almas y recuerda que a esta misión fueron con capacidad completa. No puede decir cuántas personas eran, pero Fernández no andaba solo. El declarante hizo base en Pucón, las noches pernoctaban allí. Cuenta que normalmente cuando operaban en esa zona, operaban en la tenencia de Pucón, porque tenía un espacio grande para guardar los helicópteros. Esto era por razones de seguridad y logística, atendido el estado del país, porque además llevaban el JP1, que era el combustible, una parafina refinada. Aclara que ellos en la comisión que andaban eran profesionales del aire, esto significa que no podían efectuar otra función como sería por la que se le pregunta de si acaso descendió del helicóptero e interrogó y efectuó detenciones de personas. Recuerda claramente que el día 2 de octubre, en la tarde, llegó un mensaje encriptado, que el comandante Fernández, personalmente se lo entregó, que ordenaba que debía viajar a Santiago, a la comandancia en Jefe. Fue el único empleado dentro los oficiales y suboficiales del grupo tres que fue enviado a Santiago, pero esto recién se publicó en el boletín oficial de la FACH N° 50, el día 10 de diciembre de 1973; Recuerda esta situación por el impacto emocional que le provocó el dejar Temuco. A lo que se le pregunta, responde que no supo a quién pudieron decirle "Mickey" en la base aérea de la FACH en Temuco. El nombre de Jorge Eduardo Calderón Otaiza no le resulta conocido. Señala que para el día 3 de octubre de 1973 se encontraba destinado en Santiago en la Comandancia en Jefe de la FACH. Agrega que en el poco tiempo que estuvo del 11 de septiembre al 2 de octubre de 1973 en Temuco, considerando que estuvo como 15 días en comisión de servicio en Pucón, no supo de la formación. De algún grupo especializado en asuntos de carácter político en la Base Aérea Maquehue de la FACH, de ser así a él le hubiese correspondido ser el jefe de ese grupo, en su calidad de capitán y de haber sido asignado a la sección segunda; lo que si hubo en estos primeros días fueron patrullajes que asignaba el comandante Fernández.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2015 rolante a fojas 381 a fs. 383 (Tomo I) expone que a partir del 11 de septiembre de 1973 probablemente realizó patrullajes aéreo y terrestre, recordando que en ese año Benjamín FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ era el segundo Comandante de la Base, y a PACHECO CARDENAS como el Comandante de la unidad que esporádicamente aparecía en la Base, especificando que **Benjamín** era quien administraba la unidad, incluso el tema político. A partir del término del curso de "Informaciones para Capitanes" que realizó en la Academia de Guerra en Santiago", le asignaron para crear la "Sección de Inteligencia" en Maquehue, que es lo mismo que decir "Departamento II", por lo tanto aclara que Inteligencia en

Maquehue ya existía en el año 1973. Las labores de inteligencia a las cuales le asignaron, las ejerció sólo, sin funcionarios dependientes en este cargo, que lo practicaba en una sala al interior de la Comandancia. Sin embargo, según su apreciación, las acciones de inteligencia en la unidad ya existían antes del Pronunciamiento Militar al mando de **Benjamín FERNÁNDEZ** y un grupo de su confianza que desconoce sus identidades, quienes realizaba las detenciones políticas en las cuales dice no haber tenido ningún tipo de participación. Agrega que durante toda su carrera institucional nunca realizó labores de Inteligencia, a pesar de desempeñarse, durante el periodo de Maquehue como único funcionario de la Sección o Departamento Segundo en el año 1973. En los primeros días, a contar del 11 de septiembre, su labor fue de identificar a las personas retenidas que llegaban a la Base, entrevistándolos acerca de sus datos personales, mas no interrogarlos. Estos individuos retenidos por funcionarios de Maquehue, los cataloga con ese concepto y no de detenidos, pues estaban momentáneamente en la unidad para luego ser trasladados al Regimiento Tucapel, desconociendo finalmente sus destinos una vez que salían de su unidad. Añade que el Comandante de la Base para el Pronunciamiento Militar hasta el año 1974 fue **PACHECO CARDENAS**. El segundo en la unidad militar fue el Comandante **Benjamín FERNANDEZ**, quien era el encargado de la parte operativa, y según su apreciación de Inteligencia, pero bajo las órdenes de **PACHECO CARDENAS**. Bajo **FERNANDEZ**, en orden de mando, estaba el Comandante de Escuadrilla **PUEBLA LEIVA**. Sobre muertes, ejecuciones sumarias, interrogatorios, exhumaciones, inhumaciones, traslados de detenidos, nunca tuvo participación alguna. Además, nunca supo que se practicaran torturas al interior de la base. De los retenidos que estuvieron en la Base Aérea, nunca conoció a ninguno de ellos. Asevera nunca haber trabajado junto a **Emilio SANDOVAL POO** y **Orlando GARRIDO**, apodado el Huaso **GARRIDO**, a pesar que los conoció. Sobre la víctima **Jorge Eduardo CALDERON OTAIZA**, detenido el 30 de septiembre de 1973 en Padre Las Casas por Carabineros de la zona que lo trasladan a Base Maquehue, perdiéndose su rastro, manifiesta que desconoce completamente esta situación.

En declaración extrajudicial de fecha 19 de enero de 2016 rolante a fojas 484 a fs. 486 (Tomo II) Relata que prestó servicio en el Grupo N° 3 de Helicópteros de Temuco, desde marzo de 1971 hasta el 2 de octubre de 1973, ostentando para la fecha del pronunciamiento militar el grado Capitán de Bandada y, su especialidad Piloto de Guerra. Cuando llegó a Maquehue realizó labores en "Base Aérea", cuya función es ser de apoyo logístico en esa unidad, funciones que

ejerció con los capitanes Vicente RIFFO y RIVERA hasta noviembre o diciembre de 1972. Destaca que en marzo de 1973 tuvo que presentarse en la Academia de Guerra para el "curso de informaciones para capitanes" que finalizó en agosto de ese año. Este curso tenía por objeto entregar los conocimientos de cómo debe administrarse una unidad militar aérea, incluida la temática Inteligencia y contrainteligencia. Aclara que el 2 de octubre de 1973 fue destinado a la Comandancia en Jefe en Santiago no obstante, a raíz que debía cumplir determinadas horas de vuelo anuales que le exigía su carrera militar, durante sus vacaciones iba a Temuco por un mes hospedándose en Base Maquehue donde ejecutaba las horas de vuelo de helicópteros. Estas visitas a Maquehue las realizó hasta el año 1976, año en que fue destinado a Escuela de Especialidades en Santiago. Durante estos periodos de tiempo que estuvo de vacaciones en Maquehue para realizar sus horas en helicópteros como era mandado por la Institución, nunca participó en tareas operativas de ninguna naturaleza. Agrega que se hospedaba en el casino de oficiales. En los primeros días de septiembre de 1973, una vez finalizado el curso de informaciones, le ordenaron crear a Sección de Inteligencia de Maquehue, asignándole una oficina al interior de la Comandancia, que fue la sala denominada de reunión o conferencia. Recuerda que a raíz del 11 de septiembre esta sección quedó en suspenso, para comenzar a realizar tareas específicas como por ejemplo, estuvo dos días en la oficina del Comandante identificando a los detenidos que llegaban a la Base aérea los primeros días posteriores al 11. Reitera, que a partir del término del curso de "Informaciones para Capitanes" que realizó en la Academia de Guerra en Santiago, le asignaron para crear la "Sección de Inteligencia" en Maquehue, que es lo mismo que decir "Departamento II", por lo tanto aclara que Inteligencia en Maquehue ya existía en el año 1973. Las labores de inteligencia las cuales le asignaron, las ejerció sólo, sin funcionarios dependientes en este cargo, que lo practicaba en una sala interior de la Comandancia. Sin embargo, las acciones de inteligencia en la unidad ya existían antes del Pronunciamiento Militar al mando de **Benjamín FERNANDEZ** y un grupo de su confianza que desconoce sus identidades, quienes realizaba las detenciones políticas en las cuales dice no haber tenido ningún tipo de participación. En los primeros días, a contar del 11 de septiembre, su labor fue de identificar a las personas detenidas que llegaban a la Base, entrevistándolos acerca de sus datos personales, mas no interrogarlos. Estos individuos detenidos por funcionarios de Maquehue, estaban momentáneamente en la unidad para luego ser trasladados hasta el Regimiento Tucapel, desconociendo finalmente sus destinos. Suma que a partir del 11 de

septiembre 1973 probablemente realizó patrullajes aéreo y terrestre recordando que en ese año Benjamín FERNANDES HERNANDEZ era el segundo Comandante de la Base, y a PACHECO CARDENAS como Comandante de la unidad que esporádicamente aparecía en la Base especificando que Benjamín era quien administraba la unidad, incluso el tema político. El Comandante de la Base para el Pronunciamiento Militar hasta el año 1974 fue PACHECO CARDENAS. El segundo en la unidad militar fue el Comandante Benjamín FERNANDEZ, quien era el encargado de la parte operativa, también de Inteligencia, pero bajo las órdenes de PACHECO CARDENAS. Bajo **FERNÁNDEZ**, en orden de mando, estaba el Comandante de Escuadrilla **PUEBLA LEIVA**. Sobre muertes, ejecuciones sumarias, interrogatorios, exhumaciones, inhumaciones, traslados y detenidos, nunca tuvo participación alguna. Además, nunca supo que se practicaran torturas al interior de la base. De los retenidos que estuvieron en la Base Aérea, nunca conoció a ninguno de ellos. Informa que nunca trabajó junto a **Emilio SANDOVAL POO, Orlando GARRIDO**, apodado el "**Huaso GARRIDO**", **Heriberto Pereira**, apodado el "**Picho PEREIRA**", a pesar de que los conoció. Manifiesta que en Maquehue no tuvo personas a cargo. Respecto a la víctima **Jorge CALDERON OTAÍZA**, ignora completamente los antecedentes sobre esa persona y es la primera vez que escucha su nombre.

En declaración judicial de fecha 27 de febrero de 2019 rolante a fojas 700 a 701 (Tomo II) señala que es efectivo que perteneció a la sección de inteligencia de la base, fue designado en estas funciones cuando regresó del curso antes señalado, esto en septiembre de 1973 recordando que se 'me entrego una oficina ubicada al fondo del pasillo donde se ubicaba la comandancia". Por lo que recuerda, ni siquiera tuvo gente a cargo y dependía directamente del 2do. Comandante de la base, cargo que recaía sobre la persona de Benjamín FERNÁNDEZ. En relación a sus funciones a partir del día 11 de septiembre, le correspondió atender a personas que fueron detenidas por infracción al toque de queda, a quienes les consultaba sus antecedentes personales a objeto de individualizarlos, no recuerda si les consultaba por su militancia política o algún otro antecedente relacionado con esa materia. Recuerda, que algunas de las personas que interrogaba eran remitidas al Regimiento Tucapel, haciendo énfasis que la decisión del traslado de los detenidos no pasaba por su persona, ignorando si esa determinación la tomaba el 2do. Comandante de la base. Respecto a la

víctima de los hechos investigados, Jorge Eduardo CALDERÓN OTAIZA, expresa que esa situación nunca ocurrió, pues no se le viene a la memoria ningún episodio de esa naturaleza.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 2019 rolante a fojas 707 a 708 (Tomo II) Ratifica sus declaraciones extrajudicial prestadas ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, su declaración judicial de fs. 298 a fs. 300. Agrega que estuvo por 22 días, desde el 11 de septiembre al 2 de octubre, destinado en la Base Maquehue y dentro de ese período puede confirmar que estuvo en comisión de vuelo fuera de este lugar físico para dirigirse a la zona de Pucón con un destacamento militar. Esto está en una declaración jurada que realizó el capitán Manuel Fernández Carranza, documento que está ingresado a fs. 789 del juicio 2182-98, Etienne Pesle de Menil. Además, para respaldar la fecha en la que se vino, está una declaración del comandante Pacheco en el juicio del caso Curiñir, dentro de lo que manifiesta y aclara que el capitán Huyes después del 11 de septiembre de 1973 estuvo 15 días en Maquehue, para posteriormente ser destinado. Respecto de la declaración de fs. 700 en adelante, quiere señalar que la fotografía que se le exhibe en este acto no es la que en la entrevista policial le fue mostrada. El tribunal le lee la declaración de fs. 418 a fs. 419 y la de fs. '429 a fs. 432, en lo pertinente; a lo que el deponente señala: “solicito un careo con esta persona”.

En declaración diligencia de careo entre Leonardo Reyes Herrera y Heriberto Rivas Alarcón de fecha rolante a fojas 1081 a fs. 1084 (Tomo III) el Sr. Reyes dice no reconocer a la persona con la cual se le carea. El tribunal lee la declaración de fs. 298 a fs. 300 y le pregunta al SR. Reyes si ratifica su declaración, el deponente indica que sí pero que le parece que en la lectura no aparece la fecha en que viajó a Santiago. El tribunal le indica que el 02 de octubre, ante lo cual el Sr Reyes contesta “Sí, gracias, conforme”. El tribunal procede a leer las declaraciones extrajudiciales de fojas 381, 484 y 707 las cuales son ratificadas por el Sr. Reyes. El tribunal le consulta si rechaza los dichos del Señor Rivas y qué puede decir al respecto. El deponente expresa que está en un error, que no

reconoce a esa persona y la conversación tampoco. Añade “además usted tiene que aplicar la lógica de la cronología del tiempo, que físicamente estuve en la base como para prestar atención a este tipo de conversaciones y permisos, más que nada en que la persona que actuaba como jefe, no tan solo de la unidad, sino que en el área de inteligencia, era el Señor Fernández, al respecto yo puedo además acotar ahora algo sobre mi vida, que me imagino que le puede interesar. En el año 1973 me tocó cumplir funciones con la Dirección de Límites de Chile trabajando en vuelos allá, precisamente en la cordillera, frente a Temuco, a contar de enero de ese año, para posteriormente llegar a la base y de ahí ser destinado a la Academia de Guerra, al curso de Capitanes, curso que dura más o menos 6 meses, de tal manera que a fines de agosto fui nuevamente devuelto a la unidad de Temuco, por lo tanto hablemos que de principios de septiembre me encontré allá físicamente viviendo nuevamente en Temuco, para encontrarme con el 11 de septiembre, que de ahí en adelante se precipitan estas situaciones por las cuales me están llamando. De tal manera que yo en el fondo tampoco conocí gente allá, gente de la civilidad de allá. Después, posteriormente, en forma sorpresiva, como he indicado ahí, tuve que dirigirme a Santiago. Entonces en particular esta situación, así como otras, realmente me son desconocidas, claro, además que no conozco a las personas.” El tribunal le da la palabra al Señor Reyes nuevamente quien expresa que reitera que si el Señor Rivas atendió en el casino en la época en que le tocó estar viviendo ahí, debe haber sido en bien pocas oportunidades, si es que lo atendió. El tribunal indica que lo importante no es el casino, sino lo que relata el Señor Rivas. El deponente indica que lo desconoce totalmente, en forma taxativa.

9°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Leonardo Reyes Herrera**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1.105 y siguientes (Tomo III). Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV)**, con 29 de abril de 2023, como **autor** del delito de **secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA** perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco. Que si bien el acusado no se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios

dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES (5)

A.1. MÓNICA CALDERÓN OTAIZA. En declaración extrajudicial de fs. 60 a fs. 62 (Tomo I), de fecha 27 febrero de 2013, señala que para el año 1973 tenía la edad de 26 años, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys y sus hermanos Aurora, quién era menor de edad en esa época y Jorge Eduardo. Según su recuerdo, residían en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455 de la Comuna de Padre Las Casas, Temuco. Respecto de las actividades de su hermano Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que primer lugar que para el año 1973 tenía la edad de 28 años, trabajaba en una farmacia de nombre CANAEPO, ubicada en el centro de Temuco, y de noche estudiaba en la Universidad De La Frontera, la carrera de Comercio. Respecto de su militancia política, señala que militaba en el Partido Socialista, siguiendo la tradición familiar, ya que su padre también militaba en dicho partido político. Respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano Jorge, añade que esta se llevó a efecto a eso de las 17:00 horas del día 30 de septiembre de 1973, por personal de Carabineros de Chile de dotación de la Tenencia de Padre Las Casas. Según su recuerdo, su fallecido padre atendió a los Carabineros, quienes le mencionaron que iban a detener a su hermano por pertenecer a la Unidad Popular y al MIR, no obstante las explicaciones de su padre en el sentido de hacerles presente que Jorge no pertenecía al MIR, Carabineros se lo llevó de igual forma, señalándole que sería llevado hasta la Tenencia de Padre Las Casas para sostener una conversación con el Oficial a cargo de ella, que correspondía al Teniente Morales y que después quedaría en libertad. Es así que su hermano se fue llevado hasta dicha Tenencia, y al darse cuenta que no regresaba, a la mañana siguiente su padre fue hasta la unidad de Carabineros a consultar por Jorge, incluso se entrevistó con el Teniente Morales, quién le manifestó que su hermano estaría detenido hasta aclarar si efectivamente pertenecía al MIR, y una vez establecida dicha situación sería dejado en libertad

en horas de la tarde es ese día, comentándole, además, que esa acusación la habrían hechos un grupo de amigos de su hermano, según él eran cuatro hombres y una mujer, de quienes no quiso dar identidades, pero le manifestó a su padre que conversaría con ellos para aclarar la veracidad de la acusación y que probablemente Jorge quedaría en libertad en horas de la tarde. En horas de la noche de ese mismo día se apersonó en su domicilio el Teniente Morales, quién le informó a su padre que las cinco personas que habían acusado a su hermano se habían retractado de sus dichos, señalando que justo en los momentos que se encontraba efectuando esa diligencia fuera de la unidad policial, llegó personal de la Fuerza Aérea de Chile, y se habían llevado a su hermano junto a otros detenidos hasta la Base Aérea Maquehue, lugar donde había quedado en calidad de detenido. Debido a la situación antes mencionado, a la mañana siguiente, su padre concurre hasta la Base Aérea Maquehue a consultar por su hermano, donde tomó contacto con un Suboficial de nombre Heriberto Rivas Delgado, a quién conocía ya que era vecino, incluso su hijo Heriberto, quién también era de la Fuerza Aérea, era amigo de Jorge. Según lo comentado por su padre, Heriberto Rivas le habría manifestado que era efectivo que Jorge ahí se encontraba, pero que iba a ser trasladado a una isla, no recuerda cual, pero ignora si esa situación se llevó a efecto. No satisfecho con la respuesta que Rivas le dio, su padre fue en dos oportunidades más hasta la Base Aérea, siendo atendido la segunda vez por otro militar quién le dijo que Jorge ya no estaba en la base y la última vez que fue lo amenazaron de muerte si seguía averiguando. Por lo antes señalado, su padre viajó a Santiago y se dirigió a la Vicaría de la Solidaridad, donde dio cuenta de los hechos antes expuestos. Hace presente que perdieron el rastro de Jorge en la Base Aérea y su padre por años hizo diligencias para dar con su paradero, pero nunca obtuvo resultado alguno. Nunca conoció a una persona de nombre Nelson Barrera. Solamente recuerda a Nancy Olea y a Luz López, quienes eran vecinas de sus padres, pero hace años que no tiene noticias de ellas. Respecto a si hubo otros testigos cuando detuvieron a su hermano, señala que aparte de la familia había una amiga de su madre de nombre Julia, de quién ignora mayores antecedentes, pero sabe que se encuentra fallecida, y José Henríquez Flores, quién es su marido, pero en esa época era su novio. En relación a las identidades de los Carabineros que detuvieron a su hermano, señala que ignora esos antecedentes. Lo que sí tiene claro es que hubo un persona que vio a su hermano en la Ase Aérea Maquehue, y corresponde a Heriberto Rivas Delgado, quien de manera discreta llegó una noche hasta su domicilio y les comentó que había visto a Jorge llegar a la Base golpeado y con su mandíbula destrozada, ignorando

donde fue llevado con posterioridad. Respecto a los amigos de su hermano, señala que no recuerda sus identidades, pero sabe que todos eran del mismo barrio. Solo recuerda a una mujer que se llamaba Gisela Melinao.

En declaración judicial de fs. 71 a fs. 72, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), señala que ratifica su declaración extrajudicial, agregando que ese día llegaron varios carabineros a detener a su hermano. Además, fueron testigos de esa detención su hermano menor, Aurora, y su novio, actualmente su cónyuge, José Henríquez. A su hermano se lo llevaron en un camión de Carabineros. Los uniformados no llevaban orden escrita para detener a su hermano, solo una orden verbal del Teniente Morales Cravero. Supieron que un Carabinero de apellido Hueche fue quien participó en las torturas de Jorge Eduardo. No recuerda las identidades de los demás carabineros que participaron de su detención. Su padre, actualmente fallecido, fue quien inició las gestiones judiciales para obtener noticias por la desaparición de Jorge Eduardo. Heriberto Rivas, hijo, fue quien de forma discreta llegó una noche a su casa y les indicó a ella y su madre, que su hermano había llegado a la Base Aérea de Temuco, con su mandíbula destrozada. Conoce a Heriberto Rivas ya que vivían en el mismo sector en Padre Las Casas. No cree que su hermano se haya ido fuera de Chile, ya que en poder de ellos quedó su cédula de identidad.

A.2. AURORA DEL CARMEN CALDERÓN OTAÍZA. En declaración extrajudicial de fs. 65 a fs. 66 (Tomo I), de fecha 18 de marzo de 2013, señala que para el año 1973 tenía 11 años de edad, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys Inés, en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455, comuna de Padre Las Casas, Temuco. Hace presente que sus hermanos Mónica Oriana y Jorge Eduardo, ambos mayores que ella, también residían en el mismo domicilio. Respecto a Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que él era militante del Partido Socialista de Chile, al igual que su fallecido padre. Jorge, para el año 1973, tenía la edad de 26 años, era estudiante universitario de la Universidad La Frontera de Temuco, y a la vez trabajaba en una farmacia ubicada en el centro de Temuco. En cuanto a la detención de su hermano, señala que son pocos los recuerdos que tiene de esa situación, debido a la poca edad que tenía en esa época, pero tiene claro que su detención se llevó a cabo en su domicilio particular por personal de Carabineros de la Tenencia de Carabineros de Padre Las Casas. Ese día ella se encontraba en el segundo piso del inmueble junto a Jorge, su hermana Mónica y su cuñado José Manuel, cuando llegaron los efectivos policiales, quienes ingresaron violentamente al hogar e ingresaron hasta

la escalera que da al segundo piso, donde uno de los carabineros llamó a su hermano, quién bajo acompañado por ella, para luego ser llevado detenido por los Carabineros, quienes no explicaron el motivo de su detención. El hecho fue cerca de las 17 horas, y según su recuerdo, su padre esperó un par de horas para ir a preguntar por su hermano a la Tenencia, donde no obtuvo respuestas satisfactorias, incluso nunca se la permitió verlo. Por otra parte, posteriormente se enteró que Jorge fue llevado hasta la Base Aérea Maquehue, donde finalmente se le pierde el rastro. Hace presente que un amigo de la familia, cuya identidad no recuerda, quien en esos años pertenecía a la Fuerza Aérea le comentó a sus padres que había visto a Jorge en muy malas condiciones físicas al interior de la Base Aérea, y que frecuentemente era torturado. Es lo único que puede aportar. A pesar de que ella y sus familiares suponen que Jorge fue ejecutado al interior de la Base Aérea Maquehue, nunca supieron donde podrían estar sus restos mortales.

En declaración judicial de fs. 73, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial, agregado que a pesar de su corta edad, recuerda que fueron Carabineros de la Tenencia de Padre Las Casas quienes detuvieron a su hermano. Sin embargo, desconoce las identidades de ellos. Es la primera vez que declara por la detención y desaparición de su hermano. Nunca le correspondió efectuar declaraciones ante alguna comisión especial o Tribunal. Recuerda que antes de la detención de Jorge Eduardo y posterior al 11 de septiembre de 1973, su casa fue allanada en varias oportunidades. Esos allanamientos eran efectuados por personal de Carabineros de Padre Las Casas, desconociendo las identidades. Además, se efectuaban controles a las personas que entraban y salían de su hogar. No recuerda la identidad exacta de la persona perteneciente a la Fuerza Aérea y que vivía en su sector, quien habría dado noticias acerca de la permanencia de Jorge Eduardo en la Base Aérea Maquehue.

A.3. ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO. En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2015, rolante a fs. 309 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, otorgada en causa diversa. Las personas detenidas por toque de queda quedaban en tránsito mientras las iban a buscar los del Ejército, Carabineros, no sabe a quién llamarían, porque esto se imagina, lo hacía la Comandancia. Inteligencia se formó a partir de diciembre del año 1974. Los mandaron a esa oficina que estaba de llena de documentación, de la cual hubo que hacer uno orden y organizar la seguridad militar, que era lo que hacía falta, porque no existía esa oficina. De

Santiago llegaban órdenes que estipulaban lo que había que hacer para la seguridad de la base, que era el punto neurálgico.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de diciembre de 2016, rolante de fs. 498 a 500 (Tomo II), funda que el 11 de septiembre del año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco y ostentaba el grado de Cabo 2°. Formó parte de la dotación del Departamento de Inteligencia, que se creó en el año 1974, hasta aproximadamente el año 1989. Este departamento estuvo a cargo de los Tenientes **Ángel Campos Quiroga** y **Jorge Freigang Campana**. Integraban esta sección departamento los Cabos **Heriberto Pereira**, quien cumplía funciones de escribiente; **Luis Soto Pinto**, **Valdebenito Isler**, **Jorge Soto Herrera**, **Luis Patricio Yáñez Silva**, Cabo 2° **Rubén Marín**, Cabo 2° **Alfonso Solis**. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba encasillado en el Hangar de Mantenimiento, ya que su especialidad era mecánico de helicóptero. El jefe del Hangar era el Capitán **Enrique Isaac Casacuberta** y la conformaban alrededor de veinte funcionarios, recordando entre ellos **Soto Herrera**, **Cáceres**, **Francisco Huenchunir**, **Pedro Espinoza**, **Álvaro Azocar**, **Ramón Soto** y otros que no recuerda. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, la Base Aérea Maquehue tuvo cambios radicales en las labores cotidianas propias de los servicio, es decir, comenzaron a efectuar servicios de guardia de cuartel, patrullajes de toque de queda, mantenimientos de los helicópteros y servicio de utilidad pública. Agrega que en la Base Aérea no había un grupo dedicado a investigar personas por temas políticos como tampoco un grupo cuya función era efectuar las detenciones de éstos, debiendo dejar en claro que en su caso particular jamás conformó un grupo de funcionarios para tales fines. Hace presente que todo el personal realizaba patrullajes de toque de queda, donde en más de una ocasión practicó la detención de personas por infringir los horarios, las cuales eran llevadas a Comisarías de Carabineros, Regimiento Tucapel, Cuartel de Investigaciones y la misma Base Aérea Maquehue. A la Base Aérea también se sumó las labores un grupo de funcionarios en calidad de reservistas que prestaron colaboración en el año 1973, correspondiendo sus identidades a **Humberto Bhon**, **Pedro Molina Espinoza**, **Pablo Alister**, **Emilio Sandoval Poo**, **René** y **Claudio Picasso**, **Rosen** y otros que no recuerda. Este grupo desarrolló labores de patrullajes como también Oficiales de Servicio en las guardias de cuartel. Los detenidos que llegaban a la Base Aérea por toque de queda, eran mantenidos en las afueras de la sala de

guardia, a la espera de que llegaran patrullas del Ejército, Carabineros e Investigaciones a buscarlos. Agrega que nunca trasladó detenidos desde la Base Aérea a otro recinto o unidad militar o policial, salvo en los patrullajes en que los detenidos por motivos de toque de queda los iban a dejar a Carabineros o Investigaciones. Respecto a la víctima **Jorge Calderon Otaíza**, sobre quien se le comunica que era un estudiante universitario soltero, militante del Partido Socialista, que fuera detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron Carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehue, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Respecto a lo anterior el deponente agrega que ignora completamente los antecedentes sobre esta persona y es la primera vez que escucha su nombre. Expresa que referente a lo que se le consulta, nunca tuvo una relación laboral con **Hugo Ferrada**, solo lo conoció como enfermero de la Base Aérea y que tenía relaciones cercanas con la oficialidad. Por lo tanto, según lo que se le señala, nunca llevó algún detenido a la enfermería, pues las detenciones que realizó en sus patrullajes eran por violación al toque de queda y estos detenidos solo permanecían unas horas para luego ser trasladados a los Cuarteles de las policías y Ejército. Subraya que nunca interrogó ni torturó al interior de la Base Maquehue ni tuvo conocimiento sobre la materia; sucesos que en conformidad a lo que se le comenta, ocurrieron en ese Cuartel de la FACH en aquella época. A su pregunta, evidencia que nunca realizó patrullajes con **Luis Soto Pinto**, la única labor que realizaron juntos en la misma oficina fue la de procesar y analizar información enviada por el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Santiago acerca de los países de Bolivia y Perú, a partir del año 1975, ignorando en estos momentos hasta cuando ejecutaron esa misión. La última vez que vio a **Luis Soto Pinto** fue cuando los ingresaron en prisión preventiva a la Base Aérea del Bosque en Santiago, no recuerda la fecha.

En declaración judicial de fecha 09 de febrero de 2018, rolante de fs. 561 a 562 (Tomo II), ratifico su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de

Investigaciones de Chile, que rola a fs. 498 a 500. El Tribunal le lee la declaración de fs. 418 a 419 en lo pertinente, a lo que el deponente señala que esto sucedió en el casino de Oficiales y no tenía acceso al casino de oficiales, menos a la hora del almuerzo y en ese nivel con el Comandante; no se acuerda de haber conocido a una persona de nombre **Héctor Gutiérrez Palma**; es falso lo que dice respecto de que el deponente habría participado en el traslado de **Calderón Otaiza** a la enfermería, nunca ha participado en eso. El Tribunal le lee la declaración de fs. 429 a 432 en lo pertinente, a lo que el deponente aduce que efectivamente **Ferrada** ingreso como soldado segundo a la fuerza aérea y luego lo vio a los años después, como Capitán; efectivamente a **Soto Pinto** le decían “**Lolo Soto**”, porque era menor, era el último que había llegado de la escuela. Sabía que le decían así. El cumplía una función distinta a la del deponente. Cimiento que nunca participó en llevar a nadie a la enfermería y en esas condiciones. No recuerda un evento de ese tipo, por lo tanto, no debió haber estado. A su hoja de vida no ha tenido acceso. Ellos no tenían acceso al casino de Oficiales. Estaban en el hangar dos. Nunca trasladó detenidos, solo por toque de queda, le extraña que se relate un episodio así. No recuerda a **Gutiérrez** como para describirlo. Añade que la enfermería era de acceso fácil. Toda la gente que iba a la Comandancia pasaba por ahí. Además, seguridad controlaba todas las oficinas una vez que se retiraba toda la base y las placas metálica y las credenciales. Nadie los quería por esto. En la base todos debían haberlos visto y unos eran más visibles para otros. Con **Soto Pinto** tenían una relación de oficina y era además muy bueno para la pelota, era seleccionado de fútbol. Aunque no era del mismo curso suyo. El superior era **Angel Campos Quiroga, Freigang** y el Comandante **Fernández**. Mientras que ellos llevaban los papeles que llegaban de Santiago. Soto Pinto, Soto Herrera y todos se dedicaban a los controles que ha señalado.

A.4. HÉCTOR GUTIÉRREZ PALMA. En declaración extrajudicial de 13 de septiembre de 2016, que rola de fs. 418 a fs. 419 (Tomo II), acota que Ingresó a la Fuerza Aérea de Chile contratado como Soldado Segundo a contar del día 1 de agosto de 1973, desligándose de esta Institución el día 29 de febrero de 1973, periodo en que cumplió funciones en la Base Aérea Maquehue de Temuco, desempeñándose como Mayordomo de Casino. Conforme su recuerdo a cargo del Casino estaba el Sargento Jose Silva Cid, quien en la actualidad residiría en Temuco. De la Base Aérea Maquehue no tiene muy buenos recuerdos desde que comenzó el Gobierno Militar, esto por las situaciones de las que se enteró y las cuales se relacionaban con personas detenidas. Dice que por sus funciones en el casino de la base, escuchó en ocasiones varios comentarios

que efectuaban algunos soldados, como es el caso en la oportunidad en que el Comandante Fernández se encontraba -almorzando en el comedor cuando llega **Hugo Ferrada** junto a **Cesar Borquez**, quien era civil y prestaba cooperación a la institución en temas relacionados con detenidos, el caso es que ambos le informaron a Fernández que habían tomado detenido a un matrimonio de Doctores veterinarios junto a un hijo de estos, a lo cual Fernández les dio la orden de ejecutarlos y ante la consulta que le hizo Ferrada respecto a qué hacer con el menor, le dijo que lo dieran en adopción. Hace presente que de esta situación fue testigo, recordando que después que **Ferrada** le dio esa novedad a Fernández este siguió almorzando y presume que **Ferrada** y Borquez cumplirían sus órdenes al pie de la letra. Expresa que otra de las situaciones de la cual fue testigo, dice relación con la detención de un joven de apellidos **Calderón Otaíza**. Puntualiza que a este joven lo ubicaba desde el Liceo y era conocido por ser un conocido simpatizante del gobierno de Salvador Allende. Asevera que un día se encontraba en la enfermería esperando ser atendido por el dentista Benjamín Bogel, quien en la actualidad trabaja en la UFRO, cuando repentinamente ingresan a la sala dos funcionarios que hacen salir a quienes se encontraban ahí quedando el declarante al interior de esta en el alboroto ya que ambos soldados traían sostenido a un hombre ensangrentado, con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo a quien pudo identificar como **Calderón**, quien estaba convulsionando. Agrega que no pudo conversar con él, pero en determinado momento se abre la puerta de la enfermería y lo recibe el **enfermero Ferrada**, quien aún era soldado segundo. Desde ese momento no supo más de **Calderón**, solo sabe que los **funcionarios Rebolledo y Luis Soto Pinto**, son los que deben saber lo que pasó con Calderón ya que ellos fueron los que llegaron hasta la enfermería. Nunca más supo de **Calderon**, como tampoco si su familia que vivía en calle sarmiento de Padre Las Casas haya concurrido a la base a preguntar por él. Respecto al grupo de militares encargados de efectuar las detenciones e interrogatorios al interior de la base, señala que estaba integrado por el Capitán **Leonardo Reyes**, el Teniente Ángel Quiroga, los Cabos Rebolledo, Soto Pinto, Pereira, Marin, Garrido y **Ferrada** a quien posteriormente se le otorgó el grado de Teniente, entre otros funcionarios que principalmente eran mecánicos de helicópteros. De los antes mencionados, se hablaba mucho que el **Capitán Reyes** y el Teniente Quiroga tenían en su habitación equipos de comunicaciones y botellas con ácido. Otro de los casos que se enteró fue sobre la detención de un Detective de Temuco a quien traían desde el regimiento, esta información se la dio un conocido que era obrero jornal al interior de la base, quien le comentó incluso

que a este Detective lo habrían subido a un helicóptero que piloteaba el Teniente Schmied, recordando en su relato que el funcionario lo llevaban caminando y lo tiraron al interior del helicóptero que se lo llevaría con rumbo desconocido. Anexa que el nombre de la persona que le dio esta información corresponde a Antonio Armando Lara Lara, quien no hizo carrera en la Fuerza Aérea y posteriormente se dedicó al área gastronómica y en la actualidad residiría en Pucón. Mucho se comentaba de otras detenciones en la base como son los casos de un sacerdote que habría fallecido al interior de la base como también sobre la permanencia al interior de esta del Comandante Pepe a quien posteriormente se lo llevaron a Valdivia, pero no fue testigo de estas situaciones ya que solo recibió el comentario de otros funcionarios. Indica que respecto a los funcionarios que podrían manejar antecedentes están los soldados Maureira, Juan Armijo, Rivas quien era hijo de un Suboficial de la base cuyo nombre era Heriberto. Finalmente señala que en el grupo encargado de las detenciones también había un soldado 2do. que estaba contratado como albañil pero no recuerda su apellido.

En declaración judicial de 14 de noviembre de 2016, que rola de fs. 429 a fs. 432 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, que le fue leída. Puntualiza que dejó la Fuerza Aérea el día 29 de febrero, pero del año 1976. Asimismo, aclara que efectivamente fue **Ferrada** quien abre la puerta de la enfermería y recibe a Calderón Otaiza, lo que no tiene claro en este momento es si el todavía era soldado segundo o bien ya era empleado civil con rango de oficial. Sí tiene claro que en algún momento Ferrada renunció como soldado y fue recontratado como empleado civil; esto le significaba a Ferrada el codearse con los oficiales en el casino de oficiales. Hoy le cuadra el hecho o razón por la cual Ferrada renuncia a su calidad de suboficial y se recontrata como empleado civil. Entre ellos había un trato más coloquial entre ellos. Dice que la imagen de **Ferrada** abriendo la puerta y recibiendo a **Calderón** es como si la estuviese viendo en este momento cuando e le interroga. Asevera que la ve nítidamente y no tiene ninguna duda. Agrega que quien debió haber recibido a Calderón, por la gravedad de la situación, era un suboficial de grado sargento primero que estaba a cargo de la enfermería, pero no fue así, sino que lo hizo **Ferrada**, quien vestía de civil y sobrepasaba las atribuciones del sargento a cargo, de quien no recuerda el nombre en este momento. Expresa que hay otro apellido más que no recordó al momento de la declaración extrajudicial y que era de grado cabo primero, a quien le decían “negro Marín”, a quien después lo vio trabajando en la inspección del trabajo como

fiscalizador, esto durante el gobierno militar. Era tripulante de helicópteros. Él pertenecía al departamento segundo, a quienes tenían individualizados y a quienes les tenían mucho respeto por la función que cumplían. Se sabía que ellos tenían las manos “muy suaves” y sus métodos no eran muy ortodoxos. Puntualiza que este grupo de la sección segunda vestían de civil y solo de civil, con el pelo un poco más largo. Soto Pinto era conocido como el “lolo Soto”; los funcionarios que pertenecían a este grupo eran cabos segundo a sargento segundo. En este último caso estaba Garrido, actualmente fallecido. Anexa que los equipos de comunicación y botellas con ácido las vio personalmente, ya que en su calidad de mayordomo del casino de oficiales tenía libre acceso a las piezas de los oficiales, por lo tanto, de esta forma fue como se enteró de esto. Esto se lo mencionó a otros soldados con los que se reunían en la cocina, a lo que le respondieron los demás que estos líquidos se los aplicaban a los detenidos en los testículos y le advirtieron que no los abriera ni los tocara ya que eran peligrosos; estaban los soldados Heriberto Rivas, Vargas, Villanueva, Maureira, Armijo, Soto (cocinero), y otro apodado “el cogote de pavo”, cuyo nombre no recuerda. Con estos fue que hizo el comentario y le señalaron lo ya dicho. Manifiesta que cuando vio a Calderón era un guiñapo humano, que pensó que ya estaba muerto, se movía como una gelatina, por un reflejo que el cuerpo mantiene, independiente de la actividad cerebral, no se valía por sí mismo, costándole mucho reconocerlo. Lo conocía del liceo y era muy vehemente, incluso lo consideraba un poco fanático. Lo ubicaba bien a él. No obstante, asevera que le costó mucho reconocerlo a él cuando lo llevaron a la enfermería. Y fue llevado desde el lugar de donde lo interrogaban hasta la enfermería que distaba unos treinta a cuarenta metros. Lo llevaron en vilo, no caminaba, estaba muy, muy mal, y está seguro de que quienes lo llevaron fueron **Rebolledo y Soto Pinto**. Por eso a todos los que estaban esperando atención médica los sacaron. Dice que por cosas de la vida se quedó ahí sin razón, se quedó y el hecho de que viera a **Ferrada** y a los que llegaron con Calderón debieron haberlo visto, pero no le preguntaron nada de por qué estaba ahí, ni tampoco lo hicieron salir, cree que estuvo invisible para ellos. Ellos conocían bien al declarante, como él a ellos; con Ferrada ingresaron a la institución como al mismo tiempo. Agrega que respecto del comandante Pepe, Armijo le dio la información señalándole que le había rendido honores al comandante Pepe una vez que hubo llegado a la base aérea. Después se lo llevaron a Valdivia. Recuerda que Ramírez Deramond y Cantarutti eran renombrados como represores. Manifiesta que hay un caso del que recuerda en este momento que se lo narró un carabinero de nombre Antonio Palma Sanhueza

en el que habría participado directamente y que dice relación con una víctima ejecutada en el sector Truf Truf de Padre Las Casas hoy, antes Temuco, y que correspondería a un asesino de dos hermanos en Padre Las Casas, antes del golpe, puede haber sido unos diez años antes del golpe. La cosa es que los carabineros lo detienen y se lo llevan porque era muy conflictivo en la calle donde vivía, Condell de Padre Las Casas. Le dispararon por detrás con ráfagas de fusiles ametralladora SIG Nato. Según su propia descripción, prácticamente lo partieron por la mitad. Relata otro episodio que se lo comentó Carlos Collío como conversación en alguna ocasión y que fue en el sentido de que él había participado en la ejecución de oficiales en Antofagasta, pero no le dijo nombres. La ejecución habría sido en el desierto. Les habrían disparado por detrás. Carlos Collío era mayordomo de casino y era jefe. Sobre Hugo Castro López dice que en el ala de comandancia y al frente del pasillo estaban los dormitorios de los cabos. Poco antes de la muerte de Fernández y mientras esperaban el bus que los llevaba a la base aérea, alguien les comentó o preguntó si sabían lo que había pasado con Castro y que Pereira habría estado manipulando su arma y se le habría escapado un tiro que había impactado en Castro. Lo que les molestó es que no se les permitiera a la familia llevar el cuerpo de Castro. Castro López era muy amable. Nunca se supo si fue accidente o ejecución. Lo que estaba claro es que Pereira lo mató. No hubo sumario. No estuvo arrestado. Sí que Pereira era del grupo de la sección segunda o del grupo represor. Castro estaba durmiendo. Esto sucedió en la noche. Precisa que el año 1974 puede que hayan usado pistolas Colt. Responde que había un funcionario de apellido Catriel, no recuerda su nombre. Por otra parte, Italo Cantarutti era de Villarrica y él conocía a la gente del sector. A éste lo vio en más de una ocasión con Ramírez Deramond. Cantarutti estuvo detenido en el casino de oficiales por haberse metido en un asunto de platas. Ahí cayó en desgracia. Fue secretario del intendente militar. Se metió en líos de faldas y se metió con platas fiscales. Tuvo un intento de suicidio. Precisa que todo se sabía en la FACH, se veía como algo jocoso. Había un ambiente de halago para quienes estaban haciendo la pega sucia. Ejemplo, Campos Quiroga debe haber estado presente en los interrogatorios. ellos tenían el poder.

En declaración judicial de 08 de septiembre de 2021, que rola de fs. 1002 a fs. 1003 (Tomo III), ratifica la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, de fs. 429 a fs. 432 y de fs. 585 a fs. 586, que le han sido leídas, reconociendo como suyas las firmas estampadas en ellas. Asevera que efectivamente quien entró como guiñapo era

Calderón Otaiza. Puntualiza que el grupo era el que se nombró en la declaración. No podría precisar quien los hizo salir. Eran el grupo quien se encargaba de ese trabajo y con los métodos que ellos realizaban. Sobre la consulta del tribunal respecto a esta fecha qué suboficiales iban con Calderón, responde que no puede precisar fehacientemente, quizás por los nervios. Al entrar las personas se centró en ver a Calderón Otaiza. Hugo Ferrada era una persona que estaba ahí. A Rebolledo no lo pudo identificar. Aclara que estuvo un período muy corto en la fuerza aérea. Indica que las personas eran de ese grupo, Benjamín Fernández era comandante. No metía las manos. Los que lo hacían eran Angel Campos Quiroga y, el capitán Leonardo Reyes Herrera, que eran ayudados por estos oficiales de reserva Cantarutti y Deramond Añade que Freygang también, pero este era más persuasivo. Sobre Schmied, solo sabe que el piloteaba los helicópteros. Transportaba los detenidos no sabe dónde. Dice que los oficiales debían estar detrás de este grupo. Ellos daban las órdenes. Todos dependían de Benjamín Fernandez.

En diligencia de careo de 06 de julio de 2022, que rola de fs. 1074 a fs. 1080 (Tomo III), practicada con Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, ante la pregunta realizada por el tribunal respecto a la persona que ve a su lado, responde que con las características actuales no le dice nada en realidad, porque hace 47 años que a estas personas las dejó de ver, 46 o 47 años. Entonces ellos y el deponente han cambiado mucho, entonces no puede decir fehacientemente él es “fulano de tal”. El tribunal le pregunta si logra ahora ubicar a la persona que está a través del sistema de teleaudiencia, manifestando el deponente que reitera que por las características actuales no, pero conoce a don Hugo Ferrada, ex funcionario también de la Fuerza Aérea lo conoció con el grado de subteniente, algo así. O sea, lo conoció como soldado segundo primero y posteriormente empleado civil y después como oficial de la Fuerza Aérea. El tribunal le lee la declaración del 13 de septiembre del año 2006, rolante a fs. 418 a 419 (Tomo II), indicándosele que ha declarado varias veces, pero en esta primera declaración, consultándole si la ratifica, respondiente el declarante que una de las personas, se habla de Quiroga, no, es Campos Quiroga, fallecido ya. En los otros podría haber discrepancias en el recuerdo de los apellidos de las personas, en la identificación de las personas, ya que en ese momento era tan conmocionado el asunto, que uno se miraba al espejo y desconfiaba de uno mismo, en eso no podría ser tan rigurosa la identificación. Pero los hechos que involucran al señor Ferrada, eso sí, esos los mantiene. De otras actuaciones de él, yo no sabe más. Respecto a la declaración que rola de 429 a 432 de fecha 14 de

noviembre de 2016, ratifica esa declaración. El tribunal le lee la diligencia de careo entre don Luis Alberto Soto Pinto y don Héctor Gutiérrez Palma, la cual es una transcripción de una videoconferencia practicada anteriormente, de fecha 27 de septiembre de 2021, ratificando el deponente dicha declaración. Asimismo, ratifica la declaración rolante a fs. 1003, de fecha 08 de septiembre de 2021. El tribunal le consulta si se mantiene en sus dichos respecto al Sr. Ferrada, respondiendo el declarante que reitera las dos actuaciones del señor Ferrada, es una conversación, una cuenta que se le rinde a Fernández, comandante de grupo, ya ascendido a comandante del grupo, cómo lo conoció, lo conoció como comandante de cuadrilla. Cuando ellos van a darle cuenta, estaba almorzando este caballero con otros oficiales, que no los identifica, no los recuerda, y él efectivamente andaba con este señor Bórquez, César Bórquez, que posteriormente fue director de la Radio Frontera de aquí de Temuco, así que no era tan ignorante o falta de conocimiento, ellos dos fueron a darle cuenta, es más en su indumentaria andaban con un fusil y estos cascos metálicos, pero digamos esa es una actuación, y la otra actuación, por decirlo de alguna forma, es cuando el deponente abre la puerta de la enfermería y recibe a esta persona en muy mal estado, pero después se fue de ahí, porque estaba en un tratamiento odontológico. Vogel es dentista. Entonces, qué pasó con este señor, solo sabe que desapareció y cree que hasta el día de hoy. El tribunal le consulta respecto a algún cabo de apellido extranjero que pueda ser el nombrado por el señor Ferrada, que trabajaba con Garrido, manifestando el declarante que se acuerda de un Cabo que era bien loco, que ya en el plano extra militar fueron amigos, él era compañero de Cuevas, de Enrique Cuevas, otro Cabo 1º que eran tripulantes del helicópteros. Así que es muy posible que este señor haya andado en la tripulación, pero le parece que todavía no llegaba de Santiago a Temuco, a Padre las Casas. El apellido no se acuerda, pero le suena, por aproximación, "Sequel", que era un Oficial, que le hizo el papeleo a él para ingresar a la Fuerza Aérea. Pero no le suena nadie de apellido extranjero, y si hubiera habido alguien con apellido extranjero habría sido muy fácil de recordar, ya que todos eran "Soto", "Pérez", "Ferrada", no eran de apellidos muy que sonaran. Respecto a dichos del Sr. Ferrada en la diligencia de careo, dice que coincidirán que ahí en ese tiempo, cosas que no se podían o no se debían, porque se actuó en forma extraordinaria en muchos aspectos. Le indica al Sr. Ferrada que se acordarán cuando se hizo la recepción cuando a usted lo nombraron, cuando se quedó contratado como empleado civil, a usted se le hizo una recepción en el casino de oficiales, el deponente se acuerda porque ahí hubo un incidente. Al sargento Silva se le

ordenó que le sirviera algo a usted y él dijo que cómo a él, un Sargento ya Segundo, de muchos años en la institución, iban a hacerlo servir a un soldado, a un soldado raso como era usted, como era el declarante en ese entonces. Bueno, a partir de ese momento usted era ya empleado civil, tenía rango de oficial. Así que usted está medio perdido en la fecha. Usted siendo civil portaba armamento y portaba algunas indumentarias. Puntualiza al tribunal respecto al Sr. Ferrada que también tuvo algunas actuaciones en el grupo dos, Departamento Segundo. Insiste que en el testimonio del Sr. Ferrada se ve la razón en lo que dice, de que se hacían cosas extraordinarias. Plantea la interrogante ¿Y qué hacía un soldado segundo como tripulante en un operativo militar? Se mantiene en sus dichos

A.5. HERIBERTO RIVAS ALARCÓN. En declaración extrajudicial de 19 de junio de 2013, rolante a fojas 148 a 149 (Tomo I) expone que ingresó a la Fuerza Aérea de Chile, el 01 de junio de 1973, contratándose en la Base Aérea "Maquehue", lugar donde permaneció hasta el 1985. Señala haber conocido a **Jorge Eduardo CALDERON OTAIZA**, debido a que eran vecinos y amigos de calle Sarmiento, lugar donde residían, con quien mantenía un lazo afectivo ya que el declarante pololeaba con su hermana Mónica y jugaban juntos a la pelota. Recuerda que para el año 1973, específicamente luego del Golpe de Estado, se encontraba designado en la Base Aérea "Maquehue", donde cumplía las labores de mayordomo en el casino de oficiales. Dicha base estaba conformada por aproximadamente doscientos funcionarios encontrándose a cargo un Comandante del cual no recuerda nombre. Fue así que a mediados de septiembre de 1973, observó frente al Pabellón Administrativo detenido y tirado en el pasto a Jorge CALDERON OTAIZA, el cual se encontraba muy delgado con su rostro, cansado. Debido a esto y ya que no podía conversar con él, le entregó a escondidas cuadraditos de azúcar. Posterior a lo anterior no volvió a ver a su amigo, por lo cual solicitó hablar con el Teniente REYES, el cual se encontraba a cargo del grupo de Inteligencia de la Base, junto al Teniente SCMITH, quien era piloto de helicóptero, el oficial de reserva SANDOVAL POO y el Sargento GARRIDO. Fue así que se le autorizó a conversar con él y solicitó si existía la posibilidad de soltar a su amigo, respondiéndole el Teniente en cuestión que era su vida o la de CALDERON, a lo que se retiró rápidamente y no consultó nunca más. Indica que perdió todo contacto con CALDERON y no lo volvió a ver en la base. Posterior a esto se enteró que su familia se había mudado a La Serena y nunca supo más de ellos. A la pregunta que se le hace, responde que no observó torturas en la Base Aérea "Maquehue", pero sí se escuchaban rumores que los detenidos eran interrogados al interior del pabellón Administrativo. Respecto a lo que se le

consulta sobre la detención de **CALDERON OTAIZA**, señala que en el año 1974, tomó conocimiento por intermedio de amistades que su amigo había sido detenido en el sector de Padre Las Casas, por funcionarios de Carabineros, los cuales lo traían a la base y posteriormente se lo llevaban. Finalmente, asevera que desconoce antecedentes respecto de lo sucedido con su amigo, solo fue en la oportunidad antes descrita que lo pudo ver al interior de la Base Aérea "Maquehue".

En declaración judicial de 18 de octubre de 2013, rolante a fojas 200 ratifica íntegramente su declaración policial de fojas 148, agregando que el nombre del teniente Reyes es Leonardo; el piloto de helicóptero se llamaba Rodolfo Schmidt Callejón; el oficial de reserva señalado en su declaración policial es Emilio Sandoval Poo; también estaba el piloto de helicóptero Angel Campos Quiroga, que también pertenecía al grupo de inteligencia; el sargento se llamaba Orlando Garrido, al parecer fallecido. Relata que a su amigo lo vio solo una vez, la que he señalado en su declaración policial. Como era vecino de su familia, ellos le preguntaban por la víctima de autos y les respondía que estaba en la base, pero no sabe si posteriormente se lo llevaron los carabineros, o en la FACH desapareció. Según lo que ha averiguado, los carabineros se ensañaron con él por su militancia política. Informa que sus funciones de mayordomo consistían en estar permanentemente en el casino de oficiales; les servía a los oficiales su almuerzo, desayunos, aseaba las piezas, por lo tanto no tenía acceso a otras dependencias de la base aérea, ni siquiera iba a los hangares. Afirma que si supiera algo más, lo contaría, si desapareció de la base o de carabineros, pero no sabe nada más.

En diligencia de careo entre Heriberto Rivas Alarcón y Leonardo Reyes Herrera, de fecha 7 de julio de 2022 rolante a fojas 1.081 a fs. 1.084 (Tomo III) El tribunal pregunta si reconoce a la persona que ve en pantalla, el deponente indica que por la edad no lo reconoce bien, pero sí se acuerda del nombre de él, Leonardo Reyes Herrera parece. El tribunal procede a leer la declaración de don Heriberto Rivas de fojas 148, en lo pertinente, la cual es ratificada. Posteriormente el tribunal lee la declaración de fojas 200, la cual el deponente ratifica. El tribunal le pregunta si se mantiene en sus dichos, a lo cual el Sr. Rivas contesta que sí. El tribunal pregunta si desea agregar algo más respecto a lo que ha manifestado el Sr. Reyes, el deponente indica que no, porque desconoce sus demás declaraciones, las otras que tuvo en vuelo él, pero sí que atendió en el casino de oficiales.

B. DOCUMENTOS (10)

B.1. de fs. 3 a fs. 5 (Tomo I) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación respecto de Jorge Eduardo Calderón Otaiza señala que el 30 de septiembre de 1973 desaparece desde ese mismo recinto, Jorge Eduardo Calderón Otaiza, 28 años, empleado de la caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de ingeniería en la Universidad de Temuco y militante de la juventud socialista. Fue detenido en su domicilio por carabineros de la comisaría de padre las casas y trasladado posteriormente a la base aérea de Maquehue, recinto en el cual fue visto en deterioradas condiciones físicas, los familiares afirman que los efectivos armados nunca reconocieron su detención. Hasta la fecha Jorge Eduardo Calderón Otaiza permanece desaparecido. Esta comisión se ha formado la convicción, luego de analizar acuciosamente los antecedentes de los casos anteriores, de que Maria Arriagada y Jorge Eduardo Calderón Otaiza, fueron víctimas de desaparición forzada por responsabilidad en su detención y posterior desaparición de agentes del Estado quienes servían en el recinto Base Aérea Maquehue, ello constituye grave violación a los derechos humanos.

B.2. de fs. 43 (Tomo I) Informe de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal que informa que revisados los archivos, no se encuentra registro de protocolo de autopsia de Jorge Eduardo Calderón Otaiza.

B.3. de fs. 48 a fs. 50 (Tomo I) informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que adjunta relato resumen de los antecedentes que existen en la función sobre la víctima señalando como situación represiva lo siguiente: Jorge Eduardo Calderón Otaiza, soltero, estudiante universitario, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron carabineros movilizadas en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". Solamente dos de los policías ingresaron a la vivienda, quienes manifestaron a sus padres que lo necesitaban para sostener una breve conversación con el Teniente Ramón Morales y que pronto estaría de regreso en su domicilio. Esto ocurrió cerca de las 17 horas. A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado

posteriormente a la Base Aérea de Maquehua, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Sin embargo, en dicho recinto nunca reco11ocieron su detención. Desde entonces nunca más tuvieron noticias de su hijo, a pesar que consultaron sobre su situación a diversos organismos del Estado, las autoridades siempre negaron su detención. Gestiones judiciales y/o administrativas El 2 de abril de 1979, su caso fue incluido en la presentación de personas detenidas desaparecidas tras el 11 de septiembre de 1973. Por los casos de las personas desaparecidas del Departamento de Temuco, entre las cuales se encuentra la víctima, la Corte de Apelaciones de Temuco nombró un Ministro en Visita, Alfredo Meynet González, para que instruyera la causa 2-79. En la orden de Investigar emanada de la causa, diligenciada por la Policía de Investigaciones, se da cuenta al Tribunal de la existencia de una declaración jurada efectuada por don José Calderón Ortega, y doña Gladys Otaíza Tapia, y de un amigo de éstos, don José Manuel Henríquez Flores, los dos primeros padres del desaparecido, en la cual se expónen las circunstancias de la Detención y posterior desaparecimiento del afectado. El 19 de junio de 1979, compareció ante el Tribunal don José Calderón, exponiendo al Tribunal que uria vez que fue informado que su hijo sería puesto a disposición de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Maquehue, se apersonó a ese lugar y habló con un Teniente cuyo nombre no lo supo, quien le manifestó que su hijo no había sido llevado a esa Unidad Militar. Pero que en forma extraoficial, se enteró por un Suboficial Mayor de nombre Heriberto Rivas efectivamente había llegado a la Aviación y que él lo había recibido. El 5 de julio de 1979 compareció a la presencia judicial don Ramón Emilio Morales Gravera, Capitán de Carabineros, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 era el jefe de la Tenencia Padre Las Casas pero que no recuerda a Jorge Calderón Otaíza. El 25 de octubre de 1979 el Ministro en Visita se declaró incompetente de seguir conociendo la causa y remitió los antecedentes al IV Juzgado Militar de Valdivia, con el fundamento de que todas las personas cuyo desaparecimiento se investiga fueron detenidas, en distintas oportunidades, por Carabineros, Ejército o Fuerza Aérea, en diversas patrullas, actuando inequívocamente en actos de servicio, concluyendo que cabe presumir alguna suerte de responsabilidad en el desaparecimiento de estas personas, del personal uniformado que procedió a su detención comprobada. En diciembre de ese año, el Tribunal Militar aceptó su competencia de conocer los hechos y ordenó a la Fiscalía Militar Letrada de Cautín instruir la causa 1192-bis-79. Ante esta Fiscalía Militar, en junio de 1980, compareció el Suboficial en retiro de la FACH, Heriberto Rivas Delgado, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 prestaba servicio en la

Base Aérea de Maquehue, pero afirma en forma absoluta que carece de cualquier antecedente que diga relación con Jorge Calderón Otaíza, a quien dice no conocer, como tampoco conoce a su padre José Calderón Ortega. El 24 de octubre de 1980 el Juez Militar sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

B.4. de fs. 51 (Tomo I) informe de la Jefatura Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile indicando que se procedió a revisar la información de movimientos migratorios que corresponde a la información de viajes rescatada de los libros, CDS y Microfichas, que fueron subidas al sistema histórico de viajes de la institución por la empresa de digitación "Upgrade". Se hace presente que el periodo histórico 1960 a 1981, presenta lagunas de información, además no existiendo información del año 1968, debido a que no se encuentran la totalidad de los soportes originales de los archivos de Departamento Control Fronteras, dependiente de esta Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Revisado los archivos del Departamento Control Fronteras, dependiente de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, a contar del 01.ENE.973 a la fecha, la persona en comento; no registra movimientos migratorios.

B.5 de fs. 396 a fs. 413 (Tomo II) informe de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile remitiendo nómina de personal cuyas remuneraciones fueron ajustadas en la Base Aérea Maquehue asentada en la ciudad de Temuco, en el periodo consultado, es decir, septiembre a diciembre de 1973, haciendo presente que no establece necesariamente que se hayan encontrado físicamente en la Unidad mencionada, y que complementa lo informado a US. por esta Secretaría General por los oficios de la referencia 4), 5), 6) y 7).

B.6. De fs. 730 a fs. (Tomo II) Oficio Reservado N° 8660 de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile que remite fotocopias autenticadas de las hojas de vida de los períodos que en cada caso se indican pertenecientes a los ex funcionarios señalados en el requerimiento judicial, entre los que se encuentra Leonardo Reyes Herrera. Asimismo informa que en las bases de datos no hay registros que den cuenta de la existencia de las Hojas de Vida de los ex funcionarios que a continuación se mencionan: Berthold Erwin **Bohn** Sauterel y Antonio Sergio **Monserrat** Mena

B.7. De fs. 860 a fs. 866 (Tomo III) copia simple de procesamiento dictado en causa rol 2182-98 "Etiene Pesle de Menil" con fecha 20 de diciembre de 2013.

B.8. De fs. 868 a fs. 950 (Tomo III) copia simple de sentencia de primera instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 09 de mayo de 2016. la que expresa “Que se condena además a *EMILIO SANDOVAL POO, CRISOSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO, JORGE ALIRO VALDEBENITO ISLER, HERIBERTO PEREIRA ROJAS, LUIS OSMAN YAÑEZ SILVA, LUIS ALBERTO SOTO PINTO, ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO, LEONARDO REYES HERRERA y JORGE EDUARDO SOTO HERRERA*, en calidad de autores del delito de secuestro calificado cometido desde el 19 de septiembre de 1973 en la persona de Etienne Pesle de Menil, a sufrir cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa”

B.9. De fs. 952 a fs. 964 (Tomo III) copia simple de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 09 26 de enero de 2018 copia simple de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 26 de enero de 2018 que declara “Que **se confirma** la referida sentencia **con declaración** de que la pena que se impone a los condenados Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osman Yañez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera, por el delito de asociación ilícita perpetrado entre el 11 de septiembre de 1973 y comienzo del año 1974 es la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena.” “Que, asimismo, **se confirma** la referida sentencia en cuanto se condena a los acusados antes individualizados, como autores del delito de secuestro calificado, **con declaración** de que se eleva la sanción impuesta a cada uno de ellos a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias del artículo 28 del Código Penal.”

B.10. De fs. 966 a fs. 979 (Tomo III) copia simple de sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 12 de noviembre de 2019

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos y documentos antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de

1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV), con fecha 29 de abril de 2023, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado, relacionados y aquilatados llegar a la convicción:

A. Que ha existido el delito de **secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad** en la persona de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, previsto y sancionado en el artículo 141 Código Penal en su texto vigente a la fecha de los hechos investigados, ilícito perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973 en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco.

B. Que en este ilícito le ha cabido la responsabilidad en calidad de **autor** en virtud del artículo 15 N° 1 del Código Penal al acusado **LEONARDO REYES HERRERA**.

11°) CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO (23 años de edad a la época de los hechos)

En declaración extrajudicial de fecha 24 de enero de 2019 rolante a fojas 654 a fs. 656 (Tomo II) indica que ingresó a la Fuerza Aérea de Chile el año 1972, siendo contratado en la Base Aérea Maquehue como Soldado 2do. Enfermero, por lo que sus funciones se ligaron al ámbito de la salud. Se desempeñaba en la enfermería y efectuaba clases de primeros auxilios al personal de la unidad. Hace presente que fue contratado en la Base Maquehue por recomendación del Doctor Hernán Henríquez Aravena, quien había sido su jefe en el Hospital Regional de Temuco. Para septiembre de 1973, sus funciones en la base no variaron, seguía en la enfermería, la que estaba a cargo del Doctor SAID y del Doctor Dejordan, también estaban los enfermeros Juan PONCE, Luis DIAZ OYARZUN, Carlos BALBOA BALBOA y Blanca NAVARRETE, con quienes brindaba atención al personal de planta, sus familiares y conscriptos de la base. Señala que es efectivo que partir del día 11 de septiembre de 1973, comenzaron a llegar muchas personas detenidas a la base, en la enfermería no recuerda haber atendido a alguna de estas personas que haya llegado en malas condiciones físicas o herido, solo recuerda el caso de un Detective de la Policía de Investigaciones de Temuco cuyo apellido era Fernando NAMBRAND, quien estaba detenido en el base y a quien reconoció porque era amigo de sus primas Julia y Miryam. Recuerda que lo atendió, porque venía descompensando y muy nervioso, incluso le proporcionó alimentación, no supo claramente que fue lo que le pasó al interior de la base, solo recuerda que al tiempo lo encontró en el centro

de Temuco, donde le agradeció trato que le dio. Respecto a Cesar BORQUEZ, dice que lo recuerda, él fue contratado en la misma época que el declarante, es decir quedó como Soldado 2do pero su función era la de Jardinero, nunca desempeñándose en labores de casino. Continúa expresando que en el tramo septiembre - diciembre de 1973, recuerda que los primeros días de octubre fue enviado a la Asociación Chilena de Seguridad de Temuco a efectuar un curso de Primeros Auxilios y de Enfermedades Profesionales el cual duró hasta mediados de noviembre de 1973, haciendo presente que durante ese tiempo no estuvo en la base. Respecto a la víctima de los hechos investigados, **Jorge Eduardo CALDERÓN OTAIZA**, señala que es la primera vez que escucha su nombre e ignora todo antecedente relacionado con su detención y permanencia en la Base Aérea Maquehue. En relación a la fotografía de la víctima que se le exhibe, afirma que no la relaciona con algún detenido que pudo haber pasado por la Base Aérea en ese tiempo. Sobre la consulta que se le realiza en este momento y que tiene relación con el traslado de un detenido de la base hasta dependencias de la enfermería por los funcionarios REBOLLEDO y SOTO, quien habría sido recepcionado por quien declara, aclara que salvo el caso de NAMBRAND, nunca se le hizo entrega de algún detenido que viniera herido o en malas condiciones físicas.

En diligencia de careo entre Héctor Gutiérrez Palma y Crisóstomo Ferrada Carrasco de fecha 6 de julio de 2022, rolante a fojas 1.074 a fs. 1.080 (Tomo III) El tribunal le consulta al Sr. Ferrada si conoce a la persona con la cual se le carea, a lo que responde que no. A continuación el tribunal lee la declaración de fs. 654 a 656 de fecha 24 de enero de 2019 y le pregunta al declarante si lo ratifica. El sr. Ferrada responde que sí. El tribunal le pregunta si recuerda a la persona que está a su lado, ante lo cual contesta que no ha visto nunca a ese señor. Porque al casino de oficiales le autorizaron a entrar en el año 1974, porque el artículo 29 o 31 es el último escalafón. El tribunal le consulta si tiene algo que decir respecto a lo dicho por el Sr. Gutiérrez. El Sr. Ferrada indica que lo que el Sr. Gutiérrez indica es falso. Que para el año 1974 comenzó a concurrir al casino de oficiales, porque antes no lo dejaban entrar por el artículo 29, pero como atendía a los familiares, le empezaron a agarrar buena los oficiales, porque él iba y les colocaba las inyecciones, buen trato. Pero que el año 1973 nunca estuvo en el casino de oficiales. Agrega que él no era el jefe de la enfermería, sino que era el suboficial mayor Juan Ponce. Quien declara era el menos antiguo así que lo hacían hacer todos los domicilios. Entonces el señor Gutiérrez está confundido.

Dice que él le tenía miedo al comandante “si él iba a pasar por allá, yo pasaba por acá”. Luego comienza a entregar información respecto de otros casos. El tribunal le pregunta si se mantiene en sus dichos respecto a que no conoce al Sr. Gutiérrez y que no tiene nada que ver con Calderón Otaiza. El declarante responde que no lo conoce. Que el señor se equivoca también porque dice que él andaba con casco allá en el casino, imposible que anduviera así, pues era artículo 29 o 31 que no recuerda en ese momento, por lo que no tenía autorización de andar ni con armamento ni con uniforme, le quitaron el uniforme.

12°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, quien fue sometido a proceso a **fs. 1.105 y siguientes (Tomo III). Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV)**, con 29 de abril de 2023, como **autor** del delito de **secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **JORGE EDUARDO CALDERÓN OTAÍZA** perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco. Que si bien el acusado no se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

B. DECLARACIONES (5)

A.1. MÓNICA CALDERÓN OTAIZA. En declaración extrajudicial de **fs. 60 a fs. 62 (Tomo I)**, de fecha **27 febrero de 2013**, señala que para el año 1973 tenía la edad de 26 años, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys y sus hermanos Aurora, quién era menor de edad en esa época y Jorge Eduardo. Según su recuerdo, residían en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455 de la Comuna de Padre Las Casas, Temuco. Respecto de las actividades de su hermano Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que primer lugar que para el año 1973 tenía la edad de 28 años, trabajaba en una farmacia de nombre CANAEPO , ubicada en el centro de Temuco, y de noche estudiaba en la Universidad De La Frontera, la carrera de Comercio. Respecto de

su militancia política, señala que militaba en el Partido Socialista, siguiendo la tradición familiar, ya que su padre también militaba en dicho partido político. Respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano Jorge, añade que esta se llevó a efecto a eso de las 17:00 horas del día 30 de septiembre de 1973, por personal de Carabineros de Chile de dotación de la Tenencia de Padre Las Casas. Según su recuerdo, su fallecido padre atendió a los Carabineros, quienes le mencionaron que iban a detener a su hermano por pertenecer a la Unidad Popular y al MIR, no obstante las explicaciones de su padre en el sentido de hacerles presente que Jorge no pertenecía al MIR, Carabineros se lo llevó de igual forma, señalándole que sería llevado hasta la Tenencia de Padre Las Casas para sostener una conversación con el Oficial a cargo de ella, que correspondía al Teniente Morales y que después quedaría en libertad. Es así que su hermano se fue llevado hasta dicha Tenencia, y al darse cuenta que no regresaba, a la mañana siguiente su padre fue hasta la unidad de Carabineros a consultar por Jorge, incluso se entrevistó con el Teniente Morales, quién le manifestó que su hermano estaría detenido hasta aclarar si efectivamente pertenecía al MIR, y una vez establecida dicha situación sería dejado en libertad en horas de la tarde es ese día, comentándole, además, que esa acusación la habrían hechos un grupo de amigos de su hermano, según él eran cuatro hombres y una mujer, de quienes no quiso dar identidades, pero le manifestó a su padre que conversaría con ellos para aclarar la veracidad de la acusación y que probablemente Jorge quedaría en libertad en horas de la tarde. En horas de la noche de ese mismo día se apersonó en su domicilio el Teniente Morales, quién le informó a su padre que las cinco personas que habían acusado a su hermano se habían retractado de sus dichos, señalando que justo en los momentos que se encontraba efectuando esa diligencia fuera de la unidad policial, llegó personal de la Fuerza Aérea de Chile, y se habían llevado a su hermano junto a otros detenidos hasta la Base Aérea Maquehue, lugar donde había quedado en calidad de detenido. Debido a la situación antes mencionado, a la mañana siguiente, su padre concurrió hasta la Base Aérea Maquehue a consultar por su hermano, donde tomó contacto con un Suboficial de nombre Heriberto Rivas Delgado, a quién conocía ya que era vecino, incluso su hijo Heriberto, quién también era de la Fuerza Aérea, era amigo de Jorge. Según lo comentado por su padre, Heriberto Rivas le habría manifestado que era efectivo que Jorge ahí se encontraba, pero que iba a ser trasladado a una isla, no recuerda cual, pero ignora si esa situación se llevó a efecto. No satisfecho con la respuesta que Rivas le dio, su padre fue en dos oportunidades más hasta la Base Aérea, siendo atendido la segunda vez por

otro militar quién le dijo que Jorge ya no estaba en la base y la última vez que fue lo amenazaron de muerte si seguía averiguando. Por lo antes señalado, su padre viajó a Santiago y se dirigió a la Vicaría de la Solidaridad, donde dio cuenta de los hechos antes expuestos. Hace presente que perdieron el rastro de Jorge en la Base Aérea y su padre por años hizo diligencias para dar con su paradero, pero nunca obtuvo resultado alguno. Nunca conoció a una persona de nombre Nelson Barrera. Solamente recuerda a Nancy Olea y a Luz López, quienes eran vecinas de sus padres, pero hace años que no tiene noticias de ellas. Respecto a si hubo otros testigos cuando detuvieron a su hermano, señala que aparte de la familia había una amiga de su madre de nombre Julia, de quién ignora mayores antecedentes, pero sabe que se encuentra fallecida, y José Henríquez Flores, quién es su marido, pero en esa época era su novio. En relación a las identidades de los Carabineros que detuvieron a su hermano, señala que ignora esos antecedentes. Lo que sí tiene claro es que hubo un persona que vio a su hermano en la Ase Aérea Maquehue, y corresponde a Heriberto Rivas Delgado, quien de manera discreta llegó una noche hasta su domicilio y les comentó que había visto a Jorge llegar a la Base golpeado y con su mandíbula destrozada, ignorando donde fue llevado con posterioridad. Respecto a los amigos de su hermano, señala que no recuerda sus identidades, pero sabe que todos eran del mismo barrio. Solo recuerda a una mujer que se llamaba Gisela Melinao.

En declaración judicial de fs. 71 a fs. 72, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), señala que ratifica su declaración extrajudicial, agregando que ese día llegaron varios carabineros a detener a su hermano. Además, fueron testigos de esa detención su hermano menor, Aurora, y su novio, actualmente su cónyuge, José Henríquez. A su hermano se lo llevaron en un camión de Carabineros. Los uniformados no llevaban orden escrita para detener a su hermano, solo una orden verbal del Teniente Morales Cravero. Supieron que un Carabinero de apellido Hueche fue quien participó en las torturas de Jorge Eduardo. No recuerda las identidades de los demás carabineros que participaron de su detención. Su padre, actualmente fallecido, fue quien inició las gestiones judiciales para obtener noticias por la desaparición de Jorge Eduardo. Heriberto Rivas, hijo, fue quien de forma discreta llegó una noche a su casa y les indicó a ella y su madre, que su hermano había llegado a la Base Aérea de Temuco, con su mandíbula destrozada. Conoce a Heriberto Rivas ya que vivían en el mismo sector en Padre Las Casas. No cree que su hermano se haya ido fuera de Chile, ya que en poder de ellos quedó su cédula de identidad.

A.2. AURORA DEL CARMEN CALDERÓN OTAÍZA. En declaración extrajudicial de fs. 65 a fs. 66 (Tomo I), de fecha 18 de marzo de 2013, señala que para el año 1973 tenía 11 años de edad, vivía junto a sus padres de nombres José Sabino y Gladys Inés, en un domicilio ubicado en calle Sarmiento N° 455, comuna de Padre Las Casas, Temuco. Hace presente que sus hermanos Mónica Oriana y Jorge Eduardo, ambos mayores que ella, también residían en el mismo domicilio. Respecto a Jorge Eduardo, víctima de los hechos investigados, señala que él era militante del Partido Socialista de Chile, al igual que su fallecido padre. Jorge, para el año 1973, tenía la edad de 26 años, era estudiante universitario de la Universidad La Frontera de Temuco, y a la vez trabajaba en una farmacia ubicada en el centro de Temuco. En cuanto a la detención de su hermano, señala que son pocos los recuerdos que tiene de esa situación, debido a la poca edad que tenía en esa época, pero tiene claro que su detención se llevó a cabo en su domicilio particular por personal de Carabineros de la Tenencia de Carabineros de Padre Las Casas. Ese día ella se encontraba en el segundo piso del inmueble junto a Jorge, su hermana Mónica y su cuñado José Manuel, cuando llegaron los efectivos policiales, quienes ingresaron violentamente al hogar e ingresaron hasta la escalera que da al segundo piso, donde uno de los carabineros llamó a su hermano, quién bajo acompañado por ella, para luego ser llevado detenido por los Carabineros, quienes no explicaron el motivo de su detención. El hecho fue cerca de las 17 horas, y según su recuerdo, su padre esperó un par de horas para ir a preguntar por su hermano a la Tenencia, donde no obtuvo respuestas satisfactorias, incluso nunca se la permitió verlo. Por otra parte, posteriormente se enteró que Jorge fue llevado hasta la Base Aérea Maquehue, donde finalmente se le pierde el rastro. Hace presente que un amigo de la familia, cuya identidad no recuerda, quien en esos años pertenecía a la Fuerza Aérea le comentó a sus padres que había visto a Jorge en muy malas condiciones físicas al interior de la Base Aérea, y que frecuentemente era torturado. Es lo único que puede aportar. A pesar de que ella y sus familiares suponen que Jorge fue ejecutado al interior de la Base Aérea Maquehue, nunca supieron donde podrían estar sus restos mortales.

En declaración judicial de fs. 73, de fecha 02 de mayo de 2013 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial, agregado que a pesar de su corta edad, recuerda que fueron Carabineros de la Tenencia de Padre Las Casas quienes detuvieron a su hermano. Sin embargo, desconoce las identidades de ellos. Es la primera vez que declara por la detención y desaparición de su hermano. Nunca le correspondió efectuar declaraciones ante alguna comisión especial o Tribunal.

Recuerda que antes de la detención de Jorge Eduardo y posterior al 11 de septiembre de 1973, su casa fue allanada en varias oportunidades. Esos allanamientos eran efectuados por personal de Carabineros de Padre Las Casas, desconociendo las identidades. Además, se efectuaban controles a las personas que entraban y salían de su hogar. No recuerda la identidad exacta de la persona perteneciente a la Fuerza Aérea y que vivía en su sector, quien habría dado noticias acerca de la permanencia de Jorge Eduardo en la Base Aérea Maquehue.

A.3. ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO. En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2015, rolante a fs. 309 (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, otorgada en causa diversa. Las personas detenidas por toque de queda quedaban en tránsito mientras las iban a buscar los del Ejército, Carabineros, no sabe a quién llamarían, porque esto se imagina, lo hacía la Comandancia. Inteligencia se formó a partir de diciembre del año 1974. Los mandaron a esa oficina que estaba de llena de documentación, de la cual hubo que hacer uno orden y organizar la seguridad militar, que era lo que hacía falta, porque no existía esa oficina. De Santiago llegaban órdenes que estipulaban lo que había que hacer para la seguridad de la base, que era el punto neurálgico.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de diciembre de 2016, rolante de fs. 498 a 500 (Tomo II), funda que el 11 de septiembre del año 1973, se encontraba cumpliendo labores en la Base Aérea Maquehue de la ciudad de Temuco y ostentaba el grado de Cabo 2°. Formó parte de la dotación del Departamento de Inteligencia, que se creó en el año 1974, hasta aproximadamente el año 1989. Este departamento estuvo a cargo de los Tenientes **Ángel Campos Quiroga** y **Jorge Freigang Campana**. Integraban esta sección departamento los Cabos **Heriberto Pereira**, quien cumplía funciones de escribiente; **Luis Soto Pinto**, **Valdebenito Isler**, **Jorge Soto Herrera**, **Luis Patricio Yáñez Silva**, Cabo 2° **Rubén Marín**, Cabo 2° **Alfonso Solis**. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba encasillado en el Hangar de Mantenimiento, ya que su especialidad era mecánico de helicóptero. El jefe del Hangar era el Capitán **Enrique Isaac Casacuberta** y la conformaban alrededor de veinte funcionarios, recordando entre ellos **Soto Herrera**, **Cáceres**, **Francisco Huenchuñir**, **Pedro Espinoza**, **Álvaro Azocar**, **Ramón Soto** y otros que no recuerda. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, la Base Aérea Maquehue tuvo cambios radicales en las

labores cotidianas propias de los servicio, es decir, comenzaron a efectuar servicios de guardia de cuartel, patrullajes de toque de queda, mantenimientos de los helicópteros y servicio de utilidad pública. Agrega que en la Base Aérea no había un grupo dedicado a investigar personas por temas políticos como tampoco un grupo cuya función era efectuar las detenciones de éstos, debiendo dejar en claro que en su caso particular jamás conformó un grupo de funcionarios para tales fines. Hace presente que todo el personal realizaba patrullajes de toque de queda, donde en más de una ocasión practicó la detención de personas por infringir los horarios, las cuales eran llevadas a Comisarías de Carabineros, Regimiento Tucapel, Cuartel de Investigaciones y la misma Base Aérea Maquehue. A la Base Aérea también se sumó las labores un grupo de funcionarios en calidad de reservistas que prestaron colaboración en el año 1973, correspondiendo sus identidades a **Humberto Bhon, Pedro Molina Espinoza, Pablo Alister, Emilio Sandoval Poo, René y Claudio Picasso, Rosen** y otros que no recuerda. Este grupo desarrolló labores de patrullajes como también Oficiales de Servicio en las guardias de cuartel. Los detenidos que llegaban a la Base Aérea por toque de queda, eran mantenidos en las afueras de la sala de guardia, a la espera de que llegaran patrullas del Ejército, Carabineros e Investigaciones a buscarlos. Agrega que nunca trasladó detenidos desde la Base Aérea a otro recinto o unidad militar o policial, salvo en los patrullajes en que los detenidos por motivos de toque de queda los iban a dejar a Carabineros o Investigaciones. Respecto a la víctima **Jorge Calderon Otaíza**, sobre quien se le comunica que era un estudiante universitario soltero, militante del Partido Socialista, que fuera detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron Carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehue, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Respecto a lo anterior el deponente agrega que ignora completamente los antecedentes sobre esta persona y es la primera vez que escucha su nombre. Expresa que referente a lo que se le consulta, nunca tuvo una relación laboral con **Hugo Ferrada**, solo lo conoció como

enfermero de la Base Aérea y que tenía relaciones cercanas con la oficialidad. Por lo tanto, según lo que se le señala, nunca llevó algún detenido a la enfermería, pues las detenciones que realizó en sus patrullajes eran por violación al toque de queda y estos detenidos solo permanecían unas horas para luego ser trasladados a los Cuarteles de las policías y Ejército. Subraya que nunca interrogó ni torturó al interior de la Base Maquehue ni tuvo conocimiento sobre la materia; sucesos que en conformidad a lo que se le comenta, ocurrieron en ese Cuartel de la FACH en aquella época. A su pregunta, evidencia que nunca realizó patrullajes con **Luis Soto Pinto**, la única labor que realizaron juntos en la misma oficina fue la de procesar y analizar información enviada por el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Santiago acerca de los países de Bolivia y Perú, a partir del año 1975, ignorando en estos momentos hasta cuando ejecutaron esa misión. La última vez que vio a **Luis Soto Pinto** fue cuando los ingresaron en prisión preventiva a la Base Aérea del Bosque en Santiago, no recuerda la fecha.

En declaración judicial de fecha 09 de febrero de 2018, rolante de fs. 561 a 562 (Tomo II), ratifico su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 498 a 500. El Tribunal le lee la declaración de fs. 418 a 419 en lo pertinente, a lo que el deponente señala que esto sucedió en el casino de Oficiales y no tenía acceso al casino de oficiales, menos a la hora del almuerzo y en ese nivel con el Comandante; no se acuerda de haber conocido a una persona de nombre **Héctor Gutiérrez Palma**; es falso lo que dice respecto de que el deponente habría participado en el traslado de **Calderón Otaiza** a la enfermería, nunca ha participado en eso. El Tribunal le lee la declaración de fs. 429 a 432 en lo pertinente, a lo que el deponente aduce que efectivamente **Ferrada** ingreso como soldado segundo a la fuerza aérea y luego lo vio a los años después, como Capitán; efectivamente a **Soto Pinto** le decían “**Lolo Soto**”, porque era menor, era el último que había llegado de la escuela. Sabía que le decían así. El cumplía una función distinta a la del deponente. Cimiento que nunca participó en llevar a nadie a la enfermería y en esas condiciones. No recuerda un evento de ese tipo, por lo tanto, no debió haber estado. A su hoja de vida no ha tenido acceso. Ellos no tenían acceso al casino de Oficiales. Estaban en el hangar dos. Nunca trasladó detenidos, solo por toque de queda, le extraña que se relate un episodio así. No recuerda a **Gutiérrez** como para describirlo. Añade que la enfermería era de acceso fácil. Toda la gente que iba a la Comandancia pasaba por ahí. Además, seguridad controlaba todas las oficinas una vez que se retiraba toda la base y las placas metálica y las credenciales. Nadie los quería por esto. En

la base todos debían haberlos visto y unos eran más visibles para otros. Con **Soto Pinto** tenían una relación de oficina y era además muy bueno para la pelota, era seleccionado de fútbol. Aunque no era del mismo curso suyo. El superior era **Angel Campos Quiroga, Freigang** y el Comandante **Fernández**. Mientras que ellos llevaban los papeles que llegaban de Santiago. Soto Pinto, Soto Herrera y todos se dedicaban a los controles que ha señalado.

A.4. HÉCTOR GUTIÉRREZ PALMA. En declaración extrajudicial de 13 de septiembre de 2016, que rola de fs. 418 a fs. 419 (Tomo II), acota que Ingresó a la Fuerza Aérea de Chile contratado como Soldado Segundo a contar del día 1 de agosto de 1973, desligándose de esta Institución el día 29 de febrero de 1973, periodo en que cumplió funciones en la Base Aérea Maquehue de Temuco, desempeñándose como Mayordomo de Casino. Conforme su recuerdo a cargo del Casino estaba el Sargento Jose Silva Cid, quien en la actualidad residiría en Temuco. De la Base Aérea Maquehue no tiene muy buenos recuerdos desde que comenzó el Gobierno Militar, esto por las situaciones de las que se enteró y las cuales se relacionaban con personas detenidas. Dice que por sus funciones en el casino de la base, escuchó en ocasiones varios comentarios que efectuaban algunos soldados, como es el caso en la oportunidad en que el Comandante Fernández se encontraba -almorzando en el comedor cuando llega **Hugo Ferrada** junto a **Cesar Borquez**, quien era civil y prestaba cooperación a la institución en temas relacionados con detenidos, el caso es que ambos le informaron a Fernández que habían tomado detenido a un matrimonio de Doctores veterinarios junto a un hijo de estos, a lo cual Fernández les dio la orden de ejecutarlos y ante la consulta que le hizo Ferrada respecto a qué hacer con el menor, le dijo que lo dieran en adopción. Hace presente que de esta situación fue testigo, recordando que después que **Ferrada** le dio esa novedad a Fernández este siguió almorzando y presume que **Ferrada** y Borquez cumplirían sus órdenes al pie de la letra. Expresa que otra de las situaciones de la cual fue testigo, dice relación con la detención de un joven de apellidos **Calderón Otaíza**. Puntualiza que a este joven lo ubicaba desde el Liceo y era conocido por ser un conocido simpatizante del gobierno de Salvador Allende. Asevera que un día se encontraba en la enfermería esperando ser atendido por el dentista Benjamín Bogel, quien en la actualidad trabaja en la UFRO, cuando repentinamente ingresan a la sala dos funcionarios que hacen salir a quienes se encontraban ahí quedando el declarante al interior de esta en el alboroto ya que ambos soldados traían sostenido a un hombre ensangrentado, con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo a quien pudo identificar como **Calderón**, quien estaba

convulsionando. Agrega que no pudo conversar con él, pero en determinado momento se abre la puerta de la enfermería y lo recibe el **enfermero Ferrada**, quien aún era soldado segundo. Desde ese momento no supo más de **Calderón**, solo sabe que los **funcionarios Rebolledo y Luis Soto Pinto**, son los que deben saber lo que pasó con Calderón ya que ellos fueron los que llegaron hasta la enfermería. Nunca más supo de **Calderon**, como tampoco si su familia que vivía en calle sarmiento de Padre Las Casas haya concurrido a la base a preguntar por él. Respecto al grupo de militares encargados de efectuar las detenciones e interrogatorios al interior de la base, señala que estaba integrado por el Capitán **Leonardo Reyes**, el Teniente Ángel Quiroga, los Cabos Rebolledo, Soto Pinto, Pereira, Marin, Garrido y **Ferrada** a quien posteriormente se le otorgó el grado de Teniente, entre otros funcionarios que principalmente eran mecánicos de helicópteros. De los antes mencionados, se hablaba mucho que el **Capitán Reyes** y el Teniente Quiroga tenían en su habitación equipos de comunicaciones y botellas con acido. Otro de los casos que se enteró fue sobre la detención de un Detective de Temuco a quien traían desde el regimiento, esta información se la dio un conocido que era obrero jornal al interior de la base, quien le comentó incluso que a este Detective lo habrían subido a un helicóptero que piloteaba el Teniente Schmied, recordando en su relato que el funcionario lo llevaban caminando y lo tiraron al interior del helicóptero que se lo llevaría con rumbo desconocido. Anexa que el nombre de la persona que le dio esta información corresponde a Antonio Armando Lara Lara , quien no hizo carrera en la Fuerza Aérea y posteriormente se dedicó al área gastronómica y en la actualidad residiría en Pucón. Mucho se comentaba de otras detenciones en la base como son los casos de un sacerdote que habría fallecido al interior de la base como también sobre la permanencia al interior de esta del Comandante Pepe a quien posteriormente se lo llevaron a Valdivia, pero no fue testigo de estas situaciones ya que solo recibió el comentario de otros funcionarios. Indica que respecto a los funcionarios que podrían manejar antecedentes están los soldados Maureira, Juan Armijo, Rivas quien era hijo de un Suboficial de la base cuyo nombre era Heriberto. Finalmente señala que en el grupo encargado de las detenciones también había un soldado 2do. que estaba contratado como albañil pero no recuerda su apellido.

En declaración judicial de 14 de noviembre de 2016, que rola de fs. 429 a fs. 432 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, que le fue leída. Puntualiza que dejó la Fuerza Aérea el día 29 de febrero , pero del año 1976. Asimismo, aclara

que efectivamente fue **Ferrada** quien abre la puerta de la enfermería y recibe a Calderón Otaíza, lo que no tiene claro en este momento es si el todavía era soldado segundo o bien ya era empleado civil con rango de oficial. Sí tiene claro que en algún momento Ferrada renunció como soldado y fue recontratado como empleado civil; esto le significaba a Ferrada el codearse con los oficiales en el casino de oficiales. Hoy le cuadra el hecho o razón por la cual Ferrada renuncia a su calidad de suboficial y se recontrata como empleado civil. Entre ellos había un trato más coloquial entre ellos. Dice que la imagen de **Ferrada** abriendo la puerta y recibiendo a **Calderón** es como si la estuviese viendo en este momento cuando e le interroga. Asevera que la ve nítidamente y no tiene ninguna duda. Agrega que quien debió haber recibido a Calderón, por la gravedad de la situación, era un suboficial de grado sargento primero que estaba a cargo de la enfermería, pero no fue así, sino que lo hizo **Ferrada**, quien vestía de civil y sobrepasaba las atribuciones del sargento a cargo, de quien no recuerda el nombre en este momento. Expresa que hay otro apellido más que no recordó al momento de la declaración extrajudicial y que era de grado cabo primero, a quien le decían “negro Marín”, a quien después lo vio trabajando en la inspección del trabajo como fiscalizador, esto durante el gobierno militar. Era tripulante de helicópteros. Él pertenecía al departamento segundo, a quienes tenían individualizados y a quienes les tenían mucho respeto por la función que cumplían. Se sabía que ellos tenían las manos “muy suaves” y sus métodos no eran muy ortodoxos. Puntualiza que este grupo de la sección segunda vestían de civil y solo de civil, con el pelo un poco más largo. Soto Pinto era conocido como el “lolo Soto”; los funcionarios que pertenecían a este grupo eran cabos segundo a sargento segundo. En este último caso estaba Garrido , actualmente fallecido. Anexa que los equipos de comunicación y botellas con ácido las vio personalmente , ya que en su calidad de mayordomo del casino de oficiales tenía libre acceso a las piezas de los oficiales , por lo tanto , de esta forma fue como se enteró de esto. Esto se lo mencionó a otros soldados con los que se reunían en la cocina, a lo que le respondieron los demás que estos líquidos se los aplicaban a los detenidos en los testículos y le advirtieron que no los abriera ni los tocara ya que eran peligrosos; estaban los soldados Heriberto Rivas, Vargas, Villanueva, Maureira, Armijo, Soto (cocinero), y otro apodado “el cogote de pavo”, cuyo nombre no recuerda. Con estos fue que hizo el comentario y le señalaron lo ya dicho. Manifiesta que cuando vio a Calderón era un guiñapo humano, que pensó que ya estaba muerto, se movía como una gelatina, por un reflejo que el cuerpo mantiene, independiente de la actividad cerebral, no se valía por si mismo, costándole mucho reconocerlo. Lo

conocía del liceo y era muy vehemente, incluso lo consideraba un poco fanático. Lo ubicaba bien a él. No obstante, asevera que le costó mucho reconocerlo a él cuando lo llevaron a la enfermería. Y fue llevado desde el lugar de donde lo interrogaban hasta la enfermería que estaba unos treinta a cuarenta metros. Lo llevaron en vilo, no caminaba, estaba muy, muy mal, y está seguro de que quienes lo llevaron fueron **Rebolledo y Soto Pinto**. Por eso a todos los que estaban esperando atención médica los sacaron. Dice que por cosas de la vida se quedó ahí sin razón, se quedó y el hecho de que viera a **Ferrada** y a los que llegaron con Calderón debieron haberlo visto, pero no le preguntaron nada de por qué estaba ahí, ni tampoco lo hicieron salir, cree que estuvo invisible para ellos. Ellos conocían bien al declarante, como él a ellos; con Ferrada ingresaron a la institución como al mismo tiempo. Agrega que respecto del comandante Pepe, Armijo le dio la información señalándole que le había rendido honores al comandante Pepe una vez que hubo llegado a la base aérea. Después se lo llevaron a Valdivia. Recuerda que Ramírez Deramond y Cantarutti eran renombrados como represores. Manifiesta que hay un caso del que recuerda en este momento que se lo narró un carabinero de nombre Antonio Palma Sanhueza en el que habría participado directamente y que dice relación con una víctima ejecutada en el sector Truf Truf de Padre Las Casas hoy, antes Temuco, y que correspondería a un asesino de dos hermanos en Padre Las Casas, antes del golpe, puede haber sido unos diez años antes del golpe. La cosa es que los carabineros lo detienen y se lo llevan porque era muy conflictivo en la calle donde vivía, Condell de Padre Las Casas. Le dispararon por detrás con fátigas de fusiles ametralladora SIG Nato. Según su propia descripción, prácticamente lo partieron por la mitad. Relata otro episodio que se lo comentó Carlos Collío como conversación en alguna ocasión y que fue en el sentido de que él había participado en la ejecución de oficiales en Antofagasta, pero no le dijo nombres. La ejecución habría sido en el desierto. Les habrían disparado por detrás. Carlos Collío era mayordomo de casino y era jefe. Sobre Hugo Castro López dice que en el ala de comandancia y al frente del pasillo estaban los dormitorios de los cabos. Poco antes de la muerte de Fernández y mientras esperaban el bus que los llevaba a la base aérea, alguien les comentó o preguntó si sabían lo que había pasado con Castro y que Pereira habría estado manipulando su arma y se le habría escapado un tiro que había impactado en Castro. Lo que les molestó es que no se les permitiera a la familia llevar el cuerpo de Castro. Castro López era muy amable. Nunca se supo si fue accidente o ejecución. Lo que estaba claro es que Pereira lo mató. No hubo sumario. No estuvo arrestado. Sí que Pereira era del

grupo de la sección segunda o del grupo represor. Castro estaba durmiendo. Esto sucedió en la noche. Precisa que el año 1974 puede que hayan usado pistolas Colt. Responde que había un funcionario de apellido Catriel, no recuerda su nombre. Por otra parte, Italo Cantarutti era de Villarrica y él conocía a la gente del sector. A éste lo vió en más de una ocasión con Ramírez Deramond. Cantarutti estuvo detenido en el casino de oficiales por haberse metido en un asunto de platas. Ahí cayó en desgracia. Fue secretario del intendente militar. Se metió en líos de faldas y se metió con platas fiscales. Tuvo un intento de suicidio. Precisa que todo se sabía en la FACH, se veía como algo jocoso. Había un ambiente de halago para quienes estaban haciendo la pega sucia. Ejemplo, Campos Quiroga debe haber estado presente en los interrogatorios. ellos tenían el poder.

En declaración judicial de 08 de septiembre de 2021, que rola de fs. 1002 a fs. 1003 (Tomo III), ratifica la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, que rola a fs. 418 a 419, de fs. 429 a fs. 432 y de fs. 585 a fs. 586, que le han sido leídas, reconociendo como suyas las firmas estampadas en ellas. Asevera que efectivamente quien entró como guiñapo era Calderón Otaiza. Puntualiza que el grupo era el que se nombró en la declaración. No podría precisar quien los hizo salir. Eran el grupo quien se encargaba de ese trabajo y con los métodos que ellos realizaban. Sobre la consulta del tribunal respecto a esta fecha qué suboficiales iban con Calderón, responde que no puede precisar fehacientemente, quizás por los nervios. Al entrar las personas se centró en ver a Calderón Otaiza. Hugo Ferrada era una persona que estaba ahí. A Rebolledo no lo pudo identificar. Aclara que estuvo un período muy corto en la fuerza aérea. Indica que las personas eran de ese grupo, Benjamín Fernández era comandante. No metía las manos. Los que lo hacían eran Angel Campos Quiroga y, el capitán Leonardo Reyes Herrera, que eran ayudados por estos oficiales de reserva Cantarutti y Deramond. Añade que Freygang también, pero este era más persuasivo. Sobre Schmied, solo sabe que el piloteaba los helicópteros. Transportaba los detenidos no sabe dónde. Dice que los oficiales debían estar detrás de este grupo. Ellos daban las órdenes. Todos dependían de Benjamín Fernandez.

En diligencia de careo de 06 de julio de 2022, que rola de fs. 1074 a fs. 1080 (Tomo III), practicada con Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, ante la pregunta realizada por el tribunal respecto a la persona que ve a su lado, responde que con las características actuales no le dice nada en realidad, porque hace 47 años que a estas personas las dejó de ver, 46 o 47 años.

Entonces ellos y el deponente han cambiado mucho, entonces no puede decir fehacientemente él es “fulano de tal”. El tribunal le pregunta si logra ahora ubicar a la persona que está a través del sistema de teleaudiencia, manifestando el deponente que reitera que por las características actuales no, pero conoce a don Hugo Ferrada, ex funcionario también de la Fuerza Aérea lo conoció con el grado de subteniente, algo así. O sea, lo conoció como soldado segundo primero y posteriormente empleado civil y después como oficial de la Fuerza Aérea. El tribunal le lee la declaración del 13 de septiembre del año 2006, rolante a fs. 418 a 419 (Tomo II), indicándosele que ha declarado varias veces, pero en esta primera declaración, consultándole si la ratifica, respondiente el declarante que una de las personas, se habla de Quiroga, no, es Campos Quiroga, fallecido ya. En los otros podría haber discrepancias en el recuerdo de los apellidos de las personas, en la identificación de las personas, ya que en ese momento era tan conmocionado el asunto, que uno se miraba al espejo y desconfiaba de uno mismo, en eso no podría ser tan rigurosa la identificación. Pero los hechos que involucran al señor Ferrada, eso sí, esos los mantiene. De otras actuaciones de él, yo no sabe más. Respecto a la declaración que rola de 429 a 432 de fecha 14 de noviembre de 2016, ratifica esa declaración. El tribunal le lee la diligencia de careo entre don Luis Alberto Soto Pinto y don Héctor Gutiérrez Palma, la cual es una transcripción de una videoconferencia practicada anteriormente, de fecha 27 de septiembre de 2021, ratificando el deponente dicha declaración. Asimismo, ratifica la declaración rolante a fs. 1003, de fecha 08 de septiembre de 2021. El tribunal le consulta si se mantiene en sus dichos respecto al Sr. Ferrada, respondiendo el declarante que reitera las dos actuaciones del señor Ferrada, es una conversación, una cuenta que se le rinde a Fernández, comandante de grupo, ya ascendido a comandante del grupo, cómo lo conoció, lo conoció como comandante de cuadrilla. Cuando ellos van a darle cuenta, estaba almorzando este caballero con otros oficiales, que no los identifica, no los recuerda, y él efectivamente andaba con este señor Bórquez, César Bórquez, que posteriormente fue director de la Radio Frontera de aquí de Temuco, así que no era tan ignorante o falto de conocimiento, ellos dos fueron a darle cuenta, es más en su indumentaria andaban con un fusil y estos cascos metálicos, pero digamos esa es una actuación, y la otra actuación, por decirlo de alguna forma, es cuando el deponente abre la puerta de la enfermería y recibe a esta persona en muy mal estado, pero después se fue de ahí, porque estaba en un tratamiento odontológico. Vogel es dentista. Entonces, qué pasó con este señor, solo sabe que desapareció y cree que hasta el día de hoy. El tribunal le consulta respecto a

algún cabo de apellido extranjero que pueda ser el nombrado por el señor Ferrada, que trabajaba con Garrido, manifestando el declarante que se acuerda de un Cabo que era bien loco, que ya en el plano extra militar fueron amigos, él era compañero de Cuevas, de Enrique Cuevas, otro Cabo 1º que eran tripulantes del helicópteros. Así que es muy posible que este señor haya andado en la tripulación, pero le parece que todavía no llegaba de Santiago a Temuco, a Padre las Casas. El apellido no se acuerda, pero le suena, por aproximación, "Sequel", que era un Oficial, que le hizo el papeleo a él para ingresar a la Fuerza Aérea. Pero no le suena nadie de apellido extranjero, y si hubiera habido alguien con apellido extranjero habría sido muy fácil de recordar, ya que todos eran "Soto", "Pérez", "Ferrada", no eran de apellidos muy que sonaran. Respecto a dichos del Sr. Ferrada en la diligencia de careo, dice que coincidirán que ahí en ese tiempo, cosas que no se podían o no se debían, porque se actuó en forma extraordinaria en muchos aspectos. Le indica al Sr. Ferrada que se acordarán cuando se hizo la recepción cuando a usted lo nombraron, cuando se quedó contratado como empleado civil, a usted se le hizo una recepción en el casino de oficiales, el deponente se acuerda porque ahí hubo un incidente. Al sargento Silva se le ordenó que le sirviera algo a usted y él dijo que cómo a él, un Sargento ya Segundo, de muchos años en la institución, iban a hacerlo servir a un soldado, a un soldado raso como era usted, como era el declarante en ese entonces. Bueno, a partir de ese momento usted era ya empleado civil, tenía rango de oficial. Así que usted está medio perdido en la fecha. Usted siendo civil portaba armamento y portaba algunas indumentarias. Puntualiza al tribunal respecto al Sr. Ferrada que también tuvo algunas actuaciones en el grupo dos, Departamento Segundo. Insiste que en el testimonio del Sr. Ferrada se ve la razón en lo que dice, de que se hacían cosas extraordinarias. Plantea la interrogante ¿Y qué hacía un soldado segundo como tripulante en un operativo militar? Se mantiene en sus dichos

A.5. HERIBERTO RIVAS ALARCÓN. En declaración extrajudicial de 19 de junio de 2013, rolante a fojas 148 a 149 (Tomo I) expone que ingresó a la Fuerza Aérea de Chile, el 01 de junio de 1973, contratándose en la Base Aérea "Maquehue", lugar donde permaneció hasta el 1985. Señala haber conocido a **Jorge Eduardo CALDERON OTAIZA**, debido a que eran vecinos y amigos de calle Sarmiento, lugar donde residían, con quien mantenía un lazo afectivo ya que el declarante pololeaba con su hermana Mónica y jugaban juntos a la pelota. Recuerda que para el año 1973, específicamente luego del Golpe de Estado, se encontraba designado en la Base Aérea "Maquehue", donde cumplía las labores de mayordomo en el casino de oficiales. Dicha base estaba conformada por

aproximadamente doscientos funcionarios encontrándose a cargo un Comandante del cual no recuerda nombre. Fue así que a mediados de septiembre de 1973, observó frente al Pabellón Administrativo detenido y tirado en el pasto a Jorge CALDERON OTAIZA, el cual se encontraba muy delgado con su rostro, cansado. Debido a esto y ya que no podía conversar con él, le entregó a escondidas cuadraditos de azúcar. Posterior a lo anterior no volvió a ver a su amigo, por lo cual solicitó hablar con el Teniente REYES, el cual se encontraba a cargo del grupo de Inteligencia de la Base, junto al Teniente SCMITH, quien era piloto de helicóptero, el oficial de reserva SANDOVAL POO y el Sargento GARRIDO. Fue así que se le autorizó a conversar con él y solicitó si existía la posibilidad de soltar a su amigo, respondiéndole el Teniente en cuestión que era su vida o la de CALDERON, a lo que se retiró rápidamente y no consultó nunca más. Indica que perdió todo contacto con CALDERON y no lo volvió a ver en la base. Posterior a esto se enteró que su familia se había mudado a La Serena y nunca supo más de ellos. A la pregunta que se le hace, responde que no observó torturas en la Base Aérea "Maquehue", pero sí se escuchaban rumores que los detenidos eran interrogados al interior del pabellón Administrativo. Respecto a lo que se le consulta sobre la detención de **CALDERON OTAIZA**, señala que en el año 1974, tomó conocimiento por intermedio de amistades que su amigo había sido detenido en el sector de Padre Las Casas, por funcionarios de Carabineros, los cuales lo traían a la base y posteriormente se lo llevaban. Finalmente, asevera que desconoce antecedentes respecto de lo sucedido con su amigo, solo fue en la oportunidad antes descrita que lo pudo ver al interior de la Base Aérea "Maquehue".

En declaración judicial de 18 de octubre de 2013, rolante a fojas 200 ratifica íntegramente su declaración policial de fojas 148, agregando que el nombre del teniente Reyes es Leonardo; el piloto de helicóptero se llamaba Rodolfo Schmidt Callejón; el oficial de reserva señalado en su declaración policial es Emilio Sandoval Poo; también estaba el piloto de helicóptero Angel Campos Quiroga, que también pertenecía al grupo de inteligencia; el sargento se llamaba Orlando Garrido, al parecer fallecido. Relata que a su amigo lo vio solo una vez, la que he señalado en su declaración policial. Como era vecino de su familia, ellos le preguntaban por la víctima de autos y les respondía que estaba en la base, pero no sabe si posteriormente se lo llevaron los carabineros, o en la FACH desapareció. Según lo que ha averiguado, los carabineros se ensañaron con él por su militancia política. Informa que sus funciones de mayordomo consistían en estar permanentemente en el casino de oficiales; les servía a los oficiales su

almuerzo, desayunos, aseaba las piezas, por lo tanto no tenía acceso a otras dependencias de la base aérea, ni siquiera iba a los hangares. Afirma que si supiera algo más, lo contaría, si desapareció de la base o de carabineros, pero no sabe nada más.

En diligencia de careo entre Heriberto Rivas Alarcón y Leonardo Reyes Herrera, de fecha 7 de julio de 2022 rolante a fojas 1.081 a fs. 1.084 (Tomo III) El tribunal pregunta si reconoce a la persona que ve en pantalla, el deponente indica que por la edad no lo reconoce bien, pero sí se acuerda del nombre de él, Leonardo Reyes Herrera parece. El tribunal procede a leer la declaración de don Heriberto Rivas de fojas 148, en lo pertinente, la cual es ratificada. Posteriormente el tribunal lee la declaración de fojas 200, la cual el deponente ratifica. El tribunal le pregunta si se mantiene en sus dichos, a lo cual el Sr. Rivas contesta que sí. El tribunal pregunta si desea agregar algo más respecto a lo que ha manifestado el Sr. Reyes, el deponente indica que no, porque desconoce sus demás declaraciones, las otras que tuvo en vuelo él, pero sí que atendió en el casino de oficiales.

B. DOCUMENTOS (10)

B.1. de fs. 3 a fs. 5 (Tomo I) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación respecto de Jorge Eduardo Calderón Otaiza señala que el 30 de septiembre de 1973 desaparece desde ese mismo recinto, Jorge Eduardo Calderón Otaiza, 28 años, empleado de la caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de ingeniería en la Universidad de Temuco y militante de la juventud socialista. Fue detenido en su domicilio por carabineros de la comisaría de padre las casas y trasladado posteriormente a la base aérea de Maquehue, recinto en el cual fue visto en deterioradas condiciones físicas, los familiares afirman que los efectivos armados nunca reconocieron su detención. Hasta la fecha Jorge Eduardo Calderón Otaiza permanece desaparecido. Esta comisión se ha formado la convicción, luego de analizar acuciosamente los antecedentes de los casos anteriores, de que María Arriagada y Jorge Eduardo Calderón Otaiza, fueron víctimas de desaparición forzada por responsabilidad en su detención y posterior desaparición de agentes del Estado quienes servían en el recinto Base Aérea Maquehue, ello constituye grave violación a los derechos humanos.

B.2. de fs. 43 (Tomo I) Informe de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal que informa que revisados los archivos, no se encuentra registro de protocolo de autopsia de Jorge Eduardo Calderón Otaiza.

B.3. de fs. 48 a fs. 50 (Tomo I) informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que adjunta relato resumen de los antecedentes que existen en la función sobre la víctima señalando como situación represiva lo siguiente: Jorge Eduardo Calderón Otaíza, soltero, estudiante universitario, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de septiembre de 1973, en su domicilio de la localidad de Padre Las Casas, hasta donde llegaron carabineros movilizados en un furgón de la Institución y que pertenecían a la dotación de la Tenencia de "Padre Las Casas". Solamente dos de los policías ingresaron a la vivienda, quienes manifestaron a sus padres que lo necesitaban para sostener una breve conversación con el Teniente Ramón Morales y que pronto estaría de regreso en su domicilio. Esto ocurrió cerca de las 17 horas. A las 8 de la mañana del día siguiente, sus padres se apersonaron a la Tenencia y el Teniente ya individualizado les señaló que había una acusación en contra de su hijo y que de acuerdo a la investigación era probable que le dejaran en libertad al día siguiente. Sin embargo, al concurrir nuevamente al día siguiente, el Teniente les indicó que había nuevas denuncias y que había decidido ponerlo a disposición del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehua, en donde fue visto en precarias condiciones físicas. Sin embargo, en dicho recinto nunca reconocieron su detención. Desde entonces nunca más tuvieron noticias de su hijo, a pesar que consultaron sobre su situación a diversos organismos del Estado, las autoridades siempre negaron su detención. Gestiones judiciales y/o administrativas El 2 de abril de 1979, su caso fue incluido en la presentación de personas detenidas desaparecidas tras el 11 de septiembre de 1973. Por los casos de las personas desaparecidas del Departamento de Temuco, entre las cuales se encuentra la víctima, la Corte de Apelaciones de Temuco nombró un Ministro en Visita, Alfredo Meynet González, para que instruyera la causa 2-79. En la orden de Investigar emanada de la causa, diligenciada por la Policía de Investigaciones, se da cuenta al Tribunal de la existencia de una declaración jurada efectuada por don José Calderón Ortega, y doña Gladys Otaíza Tapia, y de un amigo de éstos, don José Manuel Henríquez Flores, los dos primeros padres del desaparecido, en la cual se exponen las circunstancias de la Detención y posterior desaparecimiento del afectado. El 19 de junio de 1979, compareció ante el Tribunal don José Calderón, exponiendo al Tribunal que una vez que fue informado que su hijo sería puesto a disposición de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Maquehue, se apersonó a ese lugar y habló con un Teniente cuyo nombre no lo supo, quien le manifestó que su hijo no había sido llevado a esa Unidad Militar. Pero que en forma extraoficial, se

enteró por un Suboficial Mayor de nombre Heriberto Rivas efectivamente había llegado a la Aviación y que él lo había recibido. El 5 de julio de 1979 compareció a la presencia judicial don Ramón Emilio Morales Gravera, Capitán de Carabineros, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 era el jefe de la Tenencia Padre Las Casas pero que no recuerda a Jorge Calderón Otaíza. El 25 de octubre de 1979 el Ministro en Visita se declaró incompetente de seguir conociendo la causa y remitió los antecedentes al IV Juzgado Militar de Valdivia, con el fundamento de que todas las personas cuyo desaparecimiento se investiga fueron detenidas, en distintas oportunidades, por Carabineros, Ejército o Fuerza Aérea, en diversas patrullas, actuando inequívocamente en actos de servicio, concluyendo que cabe presumir alguna suerte de responsabilidad en el desaparecimiento de estas personas, del personal uniformado que procedió a su detención comprobada. En diciembre de ese año, el Tribunal Militar aceptó su competencia de conocer los hechos y ordenó a la Fiscalía Militar Letrada de Cautín instruir la causa 1192-bis-79. Ante esta Fiscalía Militar, en junio de 1980, compareció el Suboficial en retiro de la FACH, Heriberto Rivas Delgado, quien expone que efectivamente al 11 de septiembre de 1973 prestaba servicio en la Base Aérea de Maquehue, pero afirma en forma absoluta que carece de cualquier antecedente que diga relación con Jorge Calderón Otaíza, a quien dice no conocer, como tampoco conoce a su padre José Calderón Ortega. El 24 de octubre de 1980 el Juez Militar sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

B.4. de fs. 51 (Tomo I) informe de la Jefatura Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile indicando que se procedió a revisar la información de movimientos migratorios que corresponde a la información de viajes rescatada de los libros, CDS y Microfichas, que fueron subidas al sistema histórico de viajes de la institución por la empresa de digitación "Upgrade". Se hace presente que el periodo histórico 1960 a 1981, presenta lagunas de información, además no existiendo información del año 1968, debido a que no se encuentran la totalidad de los soportes originales de los archivos de Departamento Control Fronteras, dependiente de esta Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Revisado los archivos del Departamento Control Fronteras, dependiente de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, a contar del 01.ENE.973 a la fecha, la persona en comento; no registra movimientos migratorios.

B.5 de fs. 396 a fs. 413 (Tomo II) informe de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile remitiendo nómina de personal cuyas remuneraciones fueron ajustadas en la Base Aérea Maquehue asentada en la ciudad de Temuco,

en el periodo consultado, es decir, septiembre a diciembre de 1973, haciendo presente que no establece necesariamente que se hayan encontrado físicamente en la Unidad mencionada, y que complementa lo informado a US. por esta Secretaría General por los oficios de la referencia 4), 5), 6) y 7).

B.6. De fs. 730 a fs. (Tomo II) Oficio Reservado N° 8660 de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile que remite fotocopias autenticadas de las hojas de vida de los períodos que en cada caso se indican pertenecientes a los ex funcionarios señalados en el requerimiento judicial, entre los que se encuentra Leonardo Reyes Herrera. Asimismo informa que en las bases de datos no hay registros que den cuenta de la existencia de las Hojas de Vida de los ex funcionarios que a continuación se mencionan: Berthold Erwin **Bohn** Sauterel y Antonio Sergio **Monserrat** Mena

B.7. De fs. 860 a fs. 866 (Tomo III) copia simple de procesamiento dictado en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 20 de diciembre de 2013.

B.8. De fs. 868 a fs. 950 (Tomo III) copia simple de sentencia de primera instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 09 de mayo de 2016. la que expresa “*Que se condena además a EMILIO SANDOVAL POO, CRISOSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO, JORGE ALIRO VALDEBENITO ISLER, HERIBERTO PEREIRA ROJAS, LUIS OSMAN YAÑEZ SILVA, LUIS ALBERTO SOTO PINTO, ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO, LEONARDO REYES HERRERA y JORGE EDUARDO SOTO HERRERA, en calidad de autores del delito de secuestro calificado cometido desde el 19 de septiembre de 1973 en la persona de Etienne Pesle de Menil, a sufrir cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa*”

B.9. De fs. 952 a fs. 964 (Tomo III) copia simple de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 09 26 de enero de 2018 copia simple de sentencia de segunda instancia dictada en causa rol 2182-98 “Etienne Pesle de Menil” con fecha 26 de enero de 2018 que declara “*Que se **se confirma** la referida sentencia **con declaración** de que la pena que se impone a los condenados Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osman*

*Yañez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera, por el delito de asociación ilícita perpetrado entre el 11 de septiembre de 1973 y comienzo del año 1974 es la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena.” “Que, asimismo, **se confirma** la referida sentencia en cuanto se condena a los acusados antes individualizados, como autores del delito de secuestro calificado, **con declaración** de que se eleva la sanción impuesta a cada uno de ellos a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias del artículo 28 del Código Penal.”*

B.10. De fs. 966 a fs. 979 (Tomo III) copia simple de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 2182-98 “Etiene Pesle de Menil” con fecha 12 de noviembre de 2019

13°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos y documentos antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV)**, con fecha 29 de abril de 2023, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado, relacionados y aquilatados llegar a la convicción:

A. Que ha existido el delito de **secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad** en la persona de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, previsto y sancionado en el artículo 141 Código Penal en su texto vigente a la fecha de los hechos investigados, ilícito perpetrado a contar del día 30 de septiembre de 1973 en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco.

B. Que en este ilícito le ha cabido la responsabilidad en calidad de **autor** en virtud del artículo 15 N° 1 del Código Penal al acusado **CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**

EN CUANTO A LAS DEFENSAS.-

14°) Que a **fs. 1.582 y siguientes (Tomo V)**, el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Crisóstomo Ferrada Carrasco y Leonardo Reyes Herrera en lo principal de su escrito contesta acusación fiscal y particulares, solicitando además beneficios de la ley 18.216.

A. EXCEPCIÓN DE FONDO: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

Indica que de la propia acusación fiscal y particular se desprende que el delito de secuestro calificado que se le imputa a sus representados tendría su causa en que por la situación que vivía el país a partir del 11 de septiembre de 1973, don Jorge Calderón Otaiza fue detenido el 30 de septiembre de ese mismo año. Que de esta forma, se desprende que entre el supuesto delito y el inicio de la acción penal han transcurrido casi 49 años, superando con creces el plazo requerido por la ley para la prescripción de la acción penal. Hace mención al artículo 93, 94 y 102 del Código Penal. Asevera que en nuestra Corte Suprema existe una fuerte corriente doctrinaria que sostiene que la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar prescribirían al igual que los delitos comunes, ya que entienden que la prescripción es una institución fundada en la necesidad de consolidar y poner fin a situaciones irregulares que se producen con el transcurso del tiempo, entre la ocurrencia de un hecho punible y el inicio de la persecución penal, produciéndose de esta forma el fin de la potestad represiva del Estado. Luego se refiere a la discusión de si el delito cometido en la presente causa podría ser considerado un delito de lesa humanidad y pasa a citar doctrina al respecto. Finalmente concluye que es un criterio reafirmado por la Corte Suprema, el de la prescripción, al menos la gradual en este tipo de casos y, por otro lado, que sin desconocerse la naturaleza imprescriptible de aquellos delitos, ello no obsta a la posibilidad de ser otorgado en beneficio de los sujetos que habrían sido responsables.

B. POR LAS DECLARACIONES: NO RESULTA SUFICIENTEMENTE CLARO QUE DON CRISÓSTOMO FERRADA CARRASCO Y DON LEONARDO REYES HERRERA HAYAN TENIDO PARTICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO POR EL CUAL SE LES ACUSA.

Expone que el principal antecedente probatorio existente y que es reiteradamente sostenido por las acusaciones, provendría de las declaraciones realizadas por don Heriberto Rivas y Héctor Gutiérrez. Indica que estas declaraciones no son suficientes para poder acreditar el delito que se señala, que don Heriberto Rivas no ha descrito de qué forma ha intervenido en el delito de secuestro calificado, no haciendo referencia a la forma de participación de sus representados en el delito de autos. Por otro lado está la declaración de don Héctor Gutiérrez que solamente hace referencia a que lo vio entrar ensangrentado, con hematomas, por dos funcionarios de la base aérea, pero dejando en claro que no recuerda las identidades de esas personas, lo que deja

entrever la ausencia de relación de causalidad entre el delito que se acusa y hechos en que efectivamente intervinieron sus representados. Hace mención a la declaración de fojas 1.153 del Sr. Héctor Gutiérrez, señalando que no hay pruebas de la supuesta expulsión de una persona en la enfermería la cual funcionaba al interior de la Base Aérea Maquehue de la FACH. Agrega que si efectivamente don Crisóstomo Ferrada hubiese expulsado pacientes de dicha enfermería, los demás funcionarios que prestaban servicios ese día habrían dejado una constancia de las expulsiones arbitrarias de los pacientes y que además no le correspondía por función y jerarquía tomar una decisión de esa naturaleza. La defensa continúa indicando que el Sr. Gutiérrez Palma señala en su declaración que don Crisóstomo Ferrada se encontraba usando uniforme de la FACH mientras expulsaba a pacientes de la enfermería, en circunstancias que el artículo N° 29 del Estatuto del Personal de las F.F.A.A. de 1968 señalaba textualmente “las instituciones quedan facultades para contratar personal con el sueldo correspondiente a cualquier grado, en casos excepcionales y debidamente calificados, cuando en razones de su función no puedan formarlos o proporcionarlos las escuelas o cursos de la institución. Este personal no podrá ingresar a escalafón determinado”. En definitiva, de lo que se desprende de las acusaciones no se sabe de qué manera participó don Hugo Crisóstomo Ferrada Carrasco y don Leonardo Reyes Herrera, en consonancia de lo que estipula el art. 15 del Código Penal. Suma que resulta llamativo que en las referidas acusaciones de las que son materia de este caso, no se otorgue mayor argumentación y ahondamiento con respecto del grado de participación o de la conducta desplegada con relación al ilícito de cada sujeto que ha sido procesado por los delitos de autos, se arguye principalmente de modo genéricamente sobre las declaraciones prestadas por Heriberto Rivas Alarcon y don Héctor Gutiérrez Palma. Alega que en las acusaciones se suele incurrir en falacias argumentativas. Que es mediante este recurso inválido de la argumentación que se está acusando a sus representados, en vista de que sostiene que por el solo hecho de ser visto en las dependencias antes señaladas, sus representados habrían cometido el delito de secuestro calificado. Entre la afirmación del delito perpretado y el hecho de haber sido vistos, no existen antecedentes conducentes que permitan concluir lo primero, no ha de haber un nexo causal entre ambas aseveraciones. Dicho de otro modo “Correlación de situaciones no es causalidad”. Añade que a don Crisóstomo Ferrada y Leonardo Reyes se les imputa como autores del delito de secuestro calificado, pero no se señala cuáles son los hechos por el cual habrían acusado y que permitan efectuar la correspondiente calificación delictiva que se

les atribuye. Que de esta manera es manifiestamente insuficiente e injusto que la resolución que acusa a sus representados no contenga una descripción lo adecuadamente precisa y clara de las conductas que se le imputan para que pueda preparar satisfactoriamente su defensa.

ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS.-

15°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS:

Que previo al análisis de las defensas específicas es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

- A. RESUMEN EJECUTIVO DEL AUTO ACUSATORIO
- B. ESTADO DE DERECHO
- C. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR
- D. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR TRIBUNALES ALEMANES
- E. CONVENIOS DE GINEBRA

A. Resumen ejecutivo Auto acusatorio:

Que para un mejor análisis de las defensas específicas es necesario hacer un resumen ejecutivo del auto acusatorio. Auto acusatorio que tenía los siguientes numerales:

A.1. En el numeral 33 se da cuenta de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 y quiénes quedaron al mando de la base Aérea Maquehue y de la misma forma la conformación del comando de acción jurisdiccional (CAJSI)

A.2. En el numeral 34 se describe que se llamó a varios oficiales de reserva de la Fuerza Aérea que eran pilotos civiles a fin de prestar diferentes servicios, como integrar patrullas, efectuar toque de queda, participar en operativos y otros.

A.3. En el numeral 35 se expresa que el Comandante Benjamín Fernández organizó un grupo especialmente seleccionado para tratar temas de inteligencia de detenidos políticos entre los que se encontraba el Capitán Leonardo Reyes herrera y un empleado civil que tenía la especialidad de enfermería de nombre Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este grupo a partir de esa fecha paulatinamente dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad

para cumplir tareas que asignaba el alto mando, adquiriendo un estatus especial ya que no usaban uniforme y en la asistencia diaria aparecían en la comisión de servicio.

A.4. En el numeral 36 se relata que este grupo especial recibió colaboración alternada y esporádica de oficiales de línea y de reserva, realizando diferentes funciones: Patrullajes destinado a allanar domicilio y detener personas, presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos, además las personas detenidas en los diversos detenidos fueron mantenidos ya sea en la guardia, en la enfermería, en oficinas del edificio administrativo, en una antigua torre de madera, entre otros.

A.5. En el numeral 37 se describe que muchos detenidos fueron mantenidos en la base de Maquehue por un periodo no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales que se han descrito en el auto acusatorio. También se manifiesta que en muchos casos se les suministró drogas como el pentotal. Varios detenidos durante el día eran sacados al patio o bien trasladados a los baños, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en que estaban

A.6. En el N° 38 se describe la situación de la víctima Jorge Eduardo Calderón Otaiza, 28 años, estudiante de ingeniería comercial de la Universidad de Temuco, militante de las Juventud Socialista, quien fue detenido en su domicilio de calle Sarmiento N° 455 de PLC por carabineros de la Comisaría de PLC el 30 de septiembre de 1973 siendo trasladado a la base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea. En este recinto en deterioradas condiciones físicas por Heriberto Rivas Alarcón, funcionario de la FACH quien conocía a Jorge Calderón debido a que eran vecinos y amigos de la calle Sarmiento de PLC y además mantenía una relación amorosa con la hermana de Calderón Otaiza de nombre Mónica.

A.7. En el numeral 39 se amplía lo observado por Heriberto Rivas Alarcón en cuanto posterior al 11 de septiembre vio detenido y tirado en el pasto a Jorge Eduardo Calderón Otaiza, se veía delgado y rostro cansado. Como no podía conversar con él le entregó a escondidas cuadraditos de azúcar. Posterior a eso no volvió a ver a su amigo por lo que le solicitó hablar con el teniente Leonardo Reyes el que se encontraba a cargo del grupo de inteligencia de la base. Leonardo Reyes le autorizó a conversar con él y le pidió a Reyes Herrera la posibilidad de soltar a su amigo Calderón Otaiza, respondiéndole el Teniente que era su vida o la de Calderón, ante lo cual no consultó más sobre su amigo Jorge Calderón Otaiza

A.8. EN el N° 40 Héctor Gutiérrez Palma, soldado 2° de la Fuerza Aérea de Chile, también conoció a Jorge desde el liceo. Relata que encontrándose en atención dental en la enfermería de la base Aérea, repentinamente ingresaron 2 funcionarios quienes hicieron salir a todos los que estaban en la enfermería, quedaron el en el interior. Estos funcionarios llevaban sostenidos a un hombre ensangrentado con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo. Pudo identificar a esta persona como Jorge EDUARDO CALDERÓN OTAIZA quien estaba convulsionado. Al abrir la puerta de enfermería lo recibe el enfermero Ferrada. Desde esa fecha no supo más de Jorge.

A.9. En el N° 41 el mismo testigo Héctor Gutiérrez manifiesta que cuando vio a Jorge Calderón era un guiñapo humano, pensó que estaba muerto, no se valía por sí mismo, las personas que lo llevaron eran funcionarios de la misma fuerza aérea. A Ferrada lo conocía porque ingresaron juntos a la institución.

A.10 Que como se desprende de este resumen ejecutivo del auto acusatorio existe por parte de agentes del Estado una actividad permanente respecto a la búsqueda y represión de los opositores al régimen en este caso específico, de Jorge Eduardo Calderón Otaiza. Esto es, se le busca, se le detiene, se traslada de un lugar a otro, en este caso de un recinto de Carabineros a la Fuerza Aérea, se le detiene, se le interroga, se la apremia, es decir, desde el inicio hay un compromiso de los agentes del Estado en relación a una actitud de represión a los opositores al régimen. Esto se aprecia en la descripción del auto acusatorio. Todo lo anterior, sin perjuicio de las alegaciones y reflexiones que puedan hacer las defensas y el tribunal con posterioridad.

16°) B. Estado De Derecho:

B.1. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En

una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B.2. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (Haro, p. 118).

B.3. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre

de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (Marshall, pp. 187-188).

B.4. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (Haro, p. 126).

B.5. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (Marshall, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (Marshall, p.191). Sobre lo anterior Villar Borda (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de

Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

B.6. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las

garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

En este caso, el secuestro calificado (como indica el el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 1.245 a fs. 1.296 (Tomo IV)**, comenzó con una privación de libertad irregular e ilícita y apremios ilegítimos para luego terminar con la desaparición de Jorge Eduardo Calderón Otaiza. Siendo estos grupos formados para la privación arbitraria e ilícita de los opositores al régimen militar y como se describe en el auto acusatorio las múltiples pruebas, directas e indirectas generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente dan

cuenta de lo razonado, lo que demuestra que los acusados actuaron en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.245 y siguientes (Tomo IV). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularle a los acusados el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

17°) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. El secuestro calificado de Jorge Calderón Otaiza fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos y grupos especiales para detener a personas por motivos políticos, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

18°) C. Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

C.1. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra

Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

C.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C.3. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

C.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

C.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

C.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de

la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 explaya que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la

responsabilidad estatal en el presente caso. **233 (...)** Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínca que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las

víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111 (...)** Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna.

Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los

operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007.

Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo **131** manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias

requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar

que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo 298 apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la

gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades

nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, De forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente. Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a)

de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas. Continúa, el **párrafo 83** musita que, asimismo, la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Que el **párrafo 106** asienta que, Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el **párrafo 107** refiere, Frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

C.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

C.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

C.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

C.7.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

C.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

C.7.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

C.7.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

C.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

C.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

C.7.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

C.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

C.7.11. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos

recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

C.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

C.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7.14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

C.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del

Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que determinadas defensas nada expresan. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que estas defensas deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

19°) D. Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por los tribunales alemanes.

D.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

D.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de

los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de

odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

D.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

D.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó

adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

D.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El

caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

D.7. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz.**

Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

D.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: a) Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado,**

conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

D.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado -mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una

posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

D.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

D.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

D.12. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos

sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

D.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

D.14. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

D.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

D.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de

Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

D.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

D.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

D.15.4. En este caso entonces la persona detenida y llevada al centro o lugar de detención estaba en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

20°) E. CONVENIO DE GINEBRA. Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago “**Caso Luis Almonacid Dúmenez**” de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que “**los Convenios**

de Ginebra" consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".

ANALISIS DE DEFENSA ESPECÍFICA:

21°) Que haciéndonos cargo de la defensa **fs. 1.582 y siguientes (Tomo V)** del abogado Patricio Contreras Boero, en representación de **Crisóstomo**

Ferrada Carrasco y Leonardo Reyes Herrera el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que pudiendo hacerlo, la defensa no presentó tacha de testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Asimismo No objetó ningún documento en particular.

C. Auto acusatorio. Sobre las diferentes objeciones al auto acusatorio, el Tribunal estará al resumen y reflexión que hizo sobre esta materia en las consideraciones generales, ello sin perjuicio de realizar otras ponderaciones a medida que se analiza la defensa. Haciendo presente entre otras reflexiones que en los hechos determinados en esta sentencia y en el resumen del auto acusatorio que se ha realizado las personas que tuvieron la oportunidad de ver personal y directamente a Jorge Eduardo Calderón Otaiza, no son personas civiles o ajenas a la Fuerza Aérea Base Maquehue de Temuco sino que son personas (soldados) que trabajaban para la época en la fuerza Aérea, agregando además que conocían a Jorge Eduardo Calderón Otaiza, ya sea por ser vecinos en Padre Las Casas o por haber estado en el mismo liceo, por lo cual sus testimonios resultan robustos, consistentes y verosímiles.

D. Excepciones de fondo. Esto es, prescripción de la acción penal, el Tribunal se pronunciará sobre ella en los considerandos posteriores.

E. De la contestación a la acusación

E.1. A diferencia de lo que expone la defensa por sus representados Crisóstomo Ferrada Carrasco y Leonardo Reyes Herrera existen prueba suficiente, en conformidad a los medios de prueba legal incorporados al proceso, relacionado y ponderados íntegramente que permiten con claridad determinar que existió el delito de secuestro calificado y en ellos le ha cabido participación de autor a los acusados citados anteriormente.

E.2. La defensa en esta parte solo realiza afirmaciones de carácter general “estas declaraciones no son suficientes para acreditar el delito que se señala” pero lo cierto es que pudiendo haberlo hecho, la defensa no objetó a ningún testigo ni menos objetó a los testigos Héctor Gutiérrez Palma y Heriberto

Rivas Alarcón. De la misma forma la defensa solo hace reflexiones perimetrales, adjetivas y no va al fondo. En esta parte se le insiste que Heriberto Rivas no solo vio a Jorge Eduardo Calderón Otaiza, sino que conversó personalmente con el encargado de dicha situación que era Leonardo Reyes Herrera. Desde esa perspectiva si se tiene el dominio de la acción sobre Jorge Calderón Otaiza, no ve este tribunal cuál es la objeción o reproche al testigo Heriberto Rivas Alarcón.

E.3. De la misma forma en relación al testigo Héctor Gutiérrez Palma, la defensa no apunta a la situación de Crisóstomo Hugo Ferrada, sino que sorprendentemente se refiere a las personas que no identificó este testigo. Durante la investigación, durante los careos, Héctor Gutiérrez Palma mantuvo una narración consistente y coherente que el enfermero que recibió a Jorge Calderón Otaiza en esa situación desmejorada fue el acusado Crisóstomo Ferrada Carrasco. Se le puntualiza a la defensa no es que supuestamente trasladaron a Jorge Calderón Otaiza hacia a la enfermería, no, Héctor Gutiérrez Palma por una atención dental se encontraba allí vio que traían 2 personas a su amigo Jorge Calderón Otaiza y este fue recibido por el acusado Crisóstomo. Sobre esta materia la defensa no ha hecho ninguna objeción, solo se refiere a cosas adjetivas, entre ellos por ejemplo, la situación del uniforme y las contrataciones que no es el fondo del asunto ni lo que se ha determinado en los hechos.

E.4. En cuanto a la autoría, de la simple lectura del art. 15 N° 1 del Código Penal se desprende que tanto Leonardo Reyes como Crisóstomo Ferrada han tomado parte en el hecho de una manera inmediata y directa como se desprende de las pruebas ponderadas en conformidad a la ley ya que Leonardo Reyes Herrera estaba al mando de la situación de Jorge Calderón y Crisóstomo Hugo Ferrada lo recibe en la enfermería, sin saber hasta la fecha cuál fue la situación final d Jorge Calderón Otaiza.

E.5. En cuanto a la falacia “post hoc ergo propter hoc”, esto es “si un acontecimiento sucede después de otro entonces el segundo es consecuencia del primero” en esta materia la defensa en modo alguna desarrolla esta falacia. En efecto, si se analiza los hechos determinados en esta sentencia y descritos en el auto acusatorio de fojas 1.245 y siguientes (Tomo IV).el tribunal no ha hecho ninguna inconsistencia ilógica y no ha desprendido nada azaroso de un acontecimiento que le pueda seguir a otro. Como se señaló en el resumen del auto acusatorio hay una clara y precisa relación lógica, cronológica de los hechos. Jorge Calderón Otaiza es visto por un testigo en la base aérea “a partir de ese hecho el tribunal en el auto acusatorio y en esta sentencia no realizó ninguna afirmación o dedujo algo al azar o sin fundamento. Heriberto Rivas ante esa

situación pide hablar con el encargado del operativo que era Leonardo Reyes Herrera, el que le dice a Heriberto Ricas que era la vida de él o la de Calderón Otaiza. En consecuencia la conexión lógica entre la detención de una persona, la situación que se encontraba y la responsabilidad de Leonardo Reyes Herrera es consistente y no es ninguna falacia. Lo mismo anterior, puede decirse del testigo Héctor Gutiérrez Palma. El tribunal no hace ninguna deducción ilógica o arbitraria, es un testimonio que observa en condiciones lamentables entrar al servicio de enfermería a Jorge Calderón Otaiza y ve que lo recibe el enfermero Crisóstomo Hugo Ferrada. Siguiendo la teoría no desarrollada por la defensa no se podría en la justicia en general relacionar y ponderar ninguna prueba, lo que realmente resulta absurdo. A diferencia de lo que expone la defensa aquí ha existido un principio de lógica consistente que es "la razón suficiente". En efecto este es el principio que engloba a todos los demás. En todo caso por principio de razón suficiente, (**Nihil est sine ratione**) se entiende como un principio filosófico, según el cual todo lo que ocurre tiene **una razón suficiente** para ser así y no de otra manera, o en otras palabras, todo **tiene una explicación suficiente**. Es decir todos los eventos que a primera vista parecen azarosos o contingentes, en realidad tienen una explicación suficiente. La literatura sobre la materia además ha dicho, que este principio tiene cuatro formas: a) La razón según la cual todo lo que pasa en los objetos físicos o materiales puede explicarse. b) La razón según la cual hay una razón por la que una determinada proposición sea verdadera. c) La razón según la cual, toda propiedad relativa a números o figuras geométricas es explicable en términos de otras propiedades. d) La razón según la cual alguien hace lo que hace. Tales principios son la aplicación a cuatro necesidades: necesidad física, lógica, matemática y moral. Para el caso en estudio podemos aplicar las letras a, b) y d; esto es necesidad física, lógica y moral. Concretando aún más el tema, podemos decir que el principio **de razón suficiente**, nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual **nada puede ser nada más "porque sí"**, pues todo obedece a una razón. Ejemplos que dan los autores son: Los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón, y esa razón aparece cuando acudimos a la ley de la Gravitación Universal. La Revolución mexicana se produjo por alguna razón, y esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. En realidad el principio de razón suficiente contiene dos negaciones: "nihil" y "sine". Habitualmente, dos negaciones implican una afirmación. El principio tendría entonces otra formulación: **Omne ens habet rationem**; todo lo que es, tiene una razón. Pero con una implicación lógica de necesidad: **"todo ente tiene, necesariamente, una razón"**. Es decir, el

poder del principio, consiste en que rige completamente, dirige y sostiene todo conocimiento que se enuncie en proposiciones. Esta **llamado permanente a que se rinda razón**. Este principio no acepta que puedan ocurrir sucesos al azar; porque la razón respeta las leyes de la lógica. En **materia de derecho** y lógica jurídica este principio funciona como una exigencia de fundamentación conceptual y lógica. Ahora bien todos los juicios no tienen una evidencia inmediata y para hacerlos evidentes se busca la razón en los cuales esos juicios se fundan. La comprobación consiste en encontrar la razón suficiente de las tesis o juicios que afirmamos o negamos, puesto que la razón suficiente posee una evidencia absoluta. De la ponderación de los medios de prueba legal que se ha hecho en este fallo es claro que existe una razón suficiente, según se ha aquilatado, para determinar la existencia del delito de secuestro calificado de Jorge Calderón Otaiza y la participación que en ese delito le ha correspondido a los acusados Leonardo Reyes Herrera y Crisóstomo Ferrada Carrasco. En consecuencia la invocación errónea de la falacia invocada por la defensa no tiene ningún sustento argumentativo, lógico, de consistencia y de desarrollo.

F. Prueba del Plenario: Analizado el expediente y el término probatorio, la defensa, aparte de lo ya valorado, no ofreció otras pruebas para sostener su posición.

G. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, la calidad de **autor** para Leonardo Reyes Herrera y Crisóstomo Ferrada Carrasco por el delito de secuestro calificado de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, en su carácter de lesa humanidad.

H. En cuanto a las eximentes y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios ley 18.216. El tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

EXCEPCIONES DE FONDO.

22°) Excepción de prescripción de la acción penal. Como estos hechos han sido calificados de delitos de lesa humanidad no es posible aplicar las disposiciones de la Prescripción del artículo 93 y siguientes del Código Penal, puesto que al ser delitos de lesa humanidad no solo son inamnistiables, sino que son además imprescriptibles. No existiendo en conformidad a lo que disponen las defensas en sus escritos, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. No obstante, cita la defensa el Decreto Ley N°2191,

éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene: (114) señala que: la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: —esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No existiendo en conformidad a lo que dispone las propias defensas en sus presentaciones, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. **En consecuencia, esta excepción prescripción de la acción penal del artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal se rechaza.**

ACUSACIONES PARTICULARES

23°) El Abogado Ricardo Lavín Salazar en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, de fs. **1.355 y siguientes (Tomo IV)**, formula acusación particular en contra de Hugo Ferrada Carrasco y Leonardo Reyes Herrera, compartiendo los hechos establecidos y la calificación jurídica del ilícito y solicita considerar la concurrencia de la circunstancia agravante relacionada con el hecho investigado en autos, a saber, la circunstancia 8 del artículo 12 del Código Penal toda vez que, a juicio de esta parte, se desprende de lo obrado en autos que quienes llevaron adelante la comisión de estos hechos ostentaban todos la calidad de funcionarios públicos. Además, solicita no se considere la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 numeral 6 del Código Penal, por no configurarse dicha circunstancia. Cita jurisprudencia y doctrina para argumentar su postura.

24°) Análisis de acusación particular: Que del análisis de la acusación particular se observa que coinciden en los hechos y calificación jurídica

que ha hecho el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para los acusados, las que serán analizadas en los considerandos posteriores.

REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

25°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

26°) Cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros vs Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que: “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “**Almonacid Arellano y otros versus Chile**”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “**Barrios Altos versus Perú**” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “*Almonacid Arellano y otros versus Chile*” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de

otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile.

27°) En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

28°) En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay

(en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso *Gelman Vs. Uruguay* determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no

hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

29°) En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

-
- i. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
 - ii. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.
 - iii. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
 - iv. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
 - v. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
 - vi. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

- vii. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

30°) Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que: “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa

31°) Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL.-

32°) ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A. QUE EN RELACIÓN A LA MINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N°6 DEL TEXTO CITADO:

Que analizando la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal tanto a solicitud de las defensas antes indicadas, se reflexiona lo siguiente:

Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación, ya que a los acusados les favorece esta minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes citados precedentemente al inicio de este fallo, se puede observar que no tenían antecedentes penales pretéritos, todo a la época de los hechos, esto es, 10 de noviembre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

En relación a la alegación del querellante abogado Ricardo Lavín Salazar en cuanto no es posible aplicar la minorante estudiada para los acusados, no es posible atender a su petición ya que la práctica jurisprudencial de más de cien años siempre considera en beneficio de los acusados esta atenuante si a la época de los hechos en su extracto de filiación no tenían anotaciones penales pretéritas.

B. EN RELACIÓN A LA MINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N° 8 DEL CÓDIGO PENAL

La que establece “*Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose se ha denunciado y confesado el delito*”. De conformidad al mérito del proceso y a la ponderación de la prueba que ha hecho este tribunal no existe ningún antecedente que permita acreditar esta minorante. En consecuencia **se rechaza**.

C. EN RELACIÓN A LA MINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N° 11 DEL CÓDIGO PENAL

En relación a la atenuante del artículo 11 N° 11 citado por la defensa en su petición concreta cabe advertir que de la lectura del Código Penal, no existe el numeral 11 del artículo 11 en materia de circunstancias atenuantes, por lo cual se rechaza por improcedente.

33°) INSTITUCIÓN DE LA MEDIA PRESCRIPCIÓN O PRESCRIPCIÓN GRADUAL:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito

de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excm. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karinna Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la ltma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “La Masacre de la Rochela vs Colombia”, señaló de manera expresa: “que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia” (Corte

Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidios calificados en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. Ratificando lo expuesto, con fecha reciente la Excelentísima Corte Suprema en roles N°5780-2023 denominado “Caso Caravana de la muerte episodio La Serena” de fecha 28 de diciembre de 2023 y en causa N°22.276-2022 denominado “Caso quemados” de fecha 05 de enero de 2024, ha rechazado la institución de la media prescripción. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza para todas las defensas.**

34°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

A. Que en relación a la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal, solicitada por el abogado Ricardo Lavín, tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas, este Tribunal acoge la

agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo”. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habría tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionarios públicos no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. El delito de secuestro calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal.**

35°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida su gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la ley 18.216, atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma que se ha razonado debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.-

36°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: **secuestro calificado de Jorge Eduardo Calderón Otaiza**, perpetrado en la comuna de Temuco el 30 septiembre de 1973. Delito previsto y sancionado en el artículo **141** del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, que tiene una pena de **PRESIDIO MAYOR EN CUALQUIERA DE SUS GRADOS**.

37°) Cabe hacer presente que, en conformidad al auto acusatorio de fs. 1.245 y siguientes (tomo IV) de 29 de abril de 2023, el delito por el cual se imputa a los acusados, corresponde a secuestro calificado y según la calificación final que se ha hecho en esta sentencia a los encartados Leonardo Reyes Herrera y Crisóstomo Ferrada Carrasco les cabe responsabilidad como autores. En este caso a estos acusados les beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal laque como se señaló es en carácter de simple y les perjudica la agravante contemplada en el artículo 12 N° 8 del mismo cuerpo normativa, según se ha razonado. En consecuencia, de conformidad al artículo 68 del Código Penal, se debe hacer la compensación racional de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En este caso, los acusados quedan sin atenuantes ni agravantes, pudiendo en conformidad al artículo citado, recorrer el tribunal toda la

extensión de la pena al momento de aplicarla. Al tratarse de secuestro calificado se aplicará la pena de **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales.

Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores.

38°) Atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable a los acusados**. Además, se tiene en consideración, los informes del Centro de Reinserción Social y Servicio Médico Legal allegados al proceso respecto de:

A. Crisóstomo Ferrada Carrasco.

De fs. 1.363 y siguientes (Tomo IV) informe del Centro de Reinserción Social Santiago Sur II, que concluye *“la inclusión del procesado a la pena sustitutiva de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, sería **ineficaz** en su caso, puesto que el referido presenta necesidades de intervención actuales, difíciles de modificar por una pena sustitutiva de las características de la Libertad o Libertad vigilada Intensiva....en virtud de lo expuesto el consejo Técnico de este Centro de Reinserción **no recomienda** el ingreso del Señor Ferrada Carrasco a la Pena sustitutiva de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva.”*

B. Leonardo Reyes Herrera.

De fs. 1.366 y siguientes (Tomo IV) informe del Centro de Reinserción Social Santiago Sur II, que concluye *“se estima que la inclusión del procesado Sr. Leonardo Reyes Herrera a la Pena Sustitutiva de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva **no sería recomendable** en su caso...la inclusión del procesado a la Pena Sustitutiva de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva sería **ineficaz** puesto que el procesado presenta condena que terminaría el año 2031”*

De fojas 1.575 y siguientes (Tomo V) Informe pericial elaborado por el Servicio Médico Legal que concluye *“el examinado no presenta manifestaciones psicopatológicas compatibles con enfermedad y/o trastorno mental. Sus facultades mentales se encuentran dentro de rangos clínicos normales.”*

39°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no pueden acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051

del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en términos simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

E.4. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de

derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximirlos de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el

artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **secuestro calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

40°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una

mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (**Núñez, Constanza** (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **II tma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarles a los acusados ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

41°) Que a **fs. 1.304 y siguientes (Tomo IV)**, en el primer otrosí de su presentación el abogado **Héctor Méndez Molina** en representación de **Aurora del Carmen Calderón Otaiza**, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, solicitando tener por interpuesta dicha demanda por la suma total de **\$300.000.000 (trescientos millones de pesos)** por concepto de daño moral, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales, desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio, salvo mejor parecer de SSI.

A. LOS HECHOS.

Realiza una relación de los hechos en términos similares a la acusación, aduciendo que la demandante ha sido afectada directamente de todos los hechos, que ha sido la Sra. Aurora Calderón quien junto a toda su familia tuvo que vivir toda la persecución y vejámenes producto del secuestro de su hermano mayor.

B. DERECHO.

B.1. Derecho a la reparación integral de la víctima.

Expresa que el derecho que las víctimas y sus familiares sean indemnizados se encuentra fundamentado en los principios generales de Derecho

Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa la encontramos en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del art. 5° de la Constitución Política de la República. Más adelante cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

B.2. Responsabilidad del Estado por los hechos descritos.

Reproduce el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República. Agrega que los funcionarios públicos indicados en el auto acusatorio está ligado al Estado por un vínculo de Derecho Público, como dependiente, según da cuenta el inciso 2° del art. 1° de la ley 18.575, por lo que es su obligación respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, deber que alcanza al Estado pues son sus agentes a quienes le son aplicables los artículos 38 y 4° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

B.3. La imprescriptibilidad de la acción civil interpuesta.

Sostiene que tratándose de delitos de lesa humanidad, las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna no son aplicables ya que van en contra de la voluntad expresada en la normativa internacional sobre derechos humanos, como la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente fallos de la Corte Interamericana. Cita jurisprudencia pertinente.

B.4. Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados.

Argumenta que la indemnización de perjuicios pretendida en autos no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado de Chile, puesto que el objeto de toda acción civil es la obtención de una compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile ya que así lo demanda la aplicación de la buena fe de los tratados internacionales suscritos por Chile, así como la interpretación de las normas del ius cogens. Cita jurisprudencia al respecto.

B.5. En cuanto a la procedencia del daño moral demandado

Expresa que la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, aprobada por la Asamblea general de las naciones Unidas el 16 de diciembre en su resolución N° 60/147 ha entendido a quiénes se puede considerar como víctimas y los alcances que podrían tener en estos términos las personas que busquen algún tipo de indemnización por los daños producidos por agentes del estado. Agrega que en el derecho chileno y en especial la legislación civil establece que basta la lesión de un interés legítimo y relevante de la víctima para que se entienda que ha sufrido un daño reparable. Cita los artículos 3214 y 2329 del Código Civil y jurisprudencia pertinente.

B.6. El daño al proyecto de vida.

Relata que su representado al momento de los hechos tenía 11 años de edad y junto a su familia tuvo que sobrellevar los malos tratos y discriminación posteriores a la detención, desaparición y muerte de su hermano. En este sentido, con la corta edad de su representada y los daños que produjeron los hechos en la familia de ella se puede decir que existe un daño al proyecto de vida en los términos que lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

42°) CONTESTACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, RESPECTO DE LA ACCIÓN CIVIL:

A. De fs. 1.535 a fs. 1.561 (Tomo V) el abogado Procurador Fiscal de Temuco contesta la demanda civil **deducida por el abogado Héctor Méndez Molina**, solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas (excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de la demandante y por haber sido reparada; y excepción de prescripción extintiva) y negar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su forma de cómputo.

A.1. EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACION DINERARIA DEMANDADA, POR PRETERICION LEGAL DE LA DEMANDANTE, Y POR HABER SIDO REPARADA: Incoa que las indemnizaciones solicitadas en autos se desenvuelven en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Que el

Estado debe satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad – que lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron directamente afectados en el proceso de violación a los Derechos Humanos. Alude al esfuerzo de la ley 19.123 en esta materia y los términos y costo para el Estado lo que especifica. Que se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriéndose al resto de las personas ligadas por vínculo de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Que ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto. Señala el Derecho Comparado, en el Common Law, donde se alude al concepto de “loss of consortium” que despliega en sus fundamentos, además de normativa interna. Sostiene que la pretensión económica demandada por los demandantes que invocan la calidad de hermanos y primos es improcedente, porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a quien ostente la calidad de hermanos y primo de las víctimas de violación a los derechos humanos, como beneficiarios de las leyes de reparación; sin perjuicio de los otros beneficios legales que sí les favorecen. Sin perjuicio de lo anterior, la demandante ha obtenido reparación satisfactiva: Expone que el hecho que la demandante no tenga derecho a un pago de dinero, no significa que en la especie no haya operado otras formas de reparación mediante la entrega de importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer el daño moral sufrido. Demarca normativa, doctrina, las reparaciones simbólicas y programa de reparación y atención Integral de Salud, fundamentando con jurisprudencia al respecto. Que estando la referida acción de autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado el cumulo de acciones reparatorias, es que opone a la acción deducida por la demandante que ha invocado la calidad de hermana de la víctima, las excepciones de preterición en lo económico y reparación satisfactiva a su respecto, al haber sido ya reparados mediante el conjunto de reparaciones de diversos orden, incluyendo las simbólicas y de beneficio de salud, a través del programa PRAIS.

A.2. Excepción de prescripción extintiva:

A.2.1. Normas de prescripción aplicables: en subsidio opone la excepción de prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios

deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en las demandas, la detención ilegal y posterior fusilamiento de las víctimas ya individualizadas, se produjo entre los meses de **septiembre a octubre de 1973**, en las comunas de Fresia y Puerto Montt. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 04 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **12 de junio de 2023**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

A.2.2. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Adopta que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o

favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Insiste en que la prescripción es una institución de aplicación general en todo ámbito jurídico y de orden público. Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

A.2.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

A.2.4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Reflexionando en los diferentes considerando citados, 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil

relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5°) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

A.2.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté - como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Arguye que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

A.2.6. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con la alegación expuesta por el actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes

de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase la demanda de autos, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducida.

B. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas:

Expone que sin perjuicio de estar ya negada la obligación misma de indemnizar con respecto a los hechos a que se refieren las demandas de autos, se hace valer acá las siguientes excepciones y defensas en cuanto a la existencia del daño reclamado, naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.

B.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

B.2. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: en subsidio de las excepciones de reparación satisfactiva y de prescripción de la acción, respectivamente, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores, o sus familiares, de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño

moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Además es pertinente hacer presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales en esta materia.

C. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

Que no procede condenar al pago de reajustes e intereses en tanto no exista una sentencia ejecutoriada que así lo disponga. Realiza argumentos en esa línea citando doctrina. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger la acción deducida en autos y se condene a su representado al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

43°) ANÁLISIS DEL TRIBUNAL.

Que haciéndonos cargo de la **contestación a la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, el tribunal reflexiona de la siguiente manera:

A. En cuanto a la excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por preterición legal de la demandante, y por haber sido reparado será rechazada por este Tribunal y así se estará en lo resolutive, en especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes causas:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 45.355 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de Homicidio Calificado en las personas de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.782 del ingreso del Juzgado de Letras de Curacautín, para investigar los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

G. Causa rol 114.103 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de fecha 03 de septiembre de 2021.

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

K. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 6.345 del ingreso Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de Homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

O. Causa rol 114.058 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos (tormentos) en la persona de Manuel Antivil Huenuqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 113.999 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Enrique Teodoro Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

U. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

V. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

W. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

X. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Y. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

Z. Causa rol 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por el delito de Detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; Apremios ilegítimos en las personas de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; Homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican, sentencia de 24 de mayo de 2019.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás

Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

P.16 Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

Q.17 Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

R.18. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

S.19. Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

T. 20. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.-

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

a) Sobre lo anterior, además se reitera que esta **excepción debe ser rechazada**. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala

ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de reemplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **se rechaza**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de reemplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional

sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de

lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre

una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: *Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo***. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. *Una Teoría de la Justicia***. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

C.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo Alejandro Guzmán Brito en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La*

Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni *Ius Naturalismo*, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada

íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

C.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

C.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

- i. **Causa rol N°5572-2019, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros**, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.
- ii. **El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021**, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:..."Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y

tiene como factor de imputación la **“falta de servicio”**, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

C.6. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excm. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio.

C.7. De la misma forma se debe tener en consideración para la ponderación de la indemnización respectiva lo que manifiesta el autor Haldemann: “Cuando ocurren males colectivos y la violencia masiva o el terror totalitario desgarran tejidos sociales enteros, aquellos agraviados sufren una injusticia adicional de falta de reconocimiento: son ignorados, silenciados, sofocados y suprimidos de la mirada pública. Al silenciar a las víctimas, sus agravios personales y sociales no tienen realidad. Por lo tanto, el sufrimiento se reduce a una experiencia clandestina, pasada por alto y olvidada. Este tipo de tratamiento

añade insulto a la herida, y uno puede describir sus efectos devastadores como 'las heridas del silencio'. (Haldemann, Frank. "Another Kind of Justice: Transitional Justice as Recognition." Cornell Journal of International Law 41 (2008): 675–693.) citado por Murphy, Colleen (2017): The conceptual foundations of transitional justice, United Kingdom: Cambridge University Press.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, **éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.**

44°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por la demandante civil, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de **Secuestros calificado** de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Declaración judicial de Mario Barrientos Martínez a fs. 1.655 (Tomo V), Edith Barrientos Martínez a fojas 1.657 (Tomo V) y José Manuel Henríquez Flores de fs. 1.721 (Tomo V) quienes declaran sin tacha y legalmente examinados que conocen a doña Aurora del Carmen Calderón Otaiza desde hace muchos años, ya sea por ser amigos de la familia o ser parte de ella, y refieren conocer que lo sucedido con su hermano le afectó tanto emocional como económicamente, fue algo devastador para toda la familia y en especial para ella que era una niña por lo que su niñez se vio afectada.

B. Norma técnica N° 88 para la atención en Salud de Personas Afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, rolante de fs. 1.321 a fs. 1.352 (Tomo V).

C. Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 1.371 y siguientes (Tomo V) en virtud del cual se adjunta fotocopia de los siguientes documentos: **1)** Algunos factores de daño a la salud mental; **2)** Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos; **3)** Situación emocional de menores; **4)** Salud Mental y violaciones a los derechos Humanos; **5)** Los Ejecutados de Calama: Una experiencia de trabajo social con sus familiares a 14 años de sus ejecuciones y **6)**

Algunos problemas de salud mental detectados por Equipo Psicológico Psiquiátrico.

D. Certificado de nacimiento rolante de fs. 1.303 (Tomo V) correspondiente a Aurora del Carmen Calderón Otaiza.

E. Certificado de nacimiento rolante de fs. 45 (Tomo I) correspondiente a Jorge Eduardo Calderón Otaiza

45°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por el delito de **secuestro calificado** en la persona de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, perpetrado en a contar del día 30 de septiembre de 1973 en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile, **está plenamente acreditado**, que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demandan esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para la actora la suma de: **\$180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos)**

46°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se razonado precedentemente, ésta deberá ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N° 6 y 8, 12 N°8, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 103 y 141 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes,

474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I. Que NO HA LUGAR a la expresión de fondo de prescripción de la acción penal interpuesta por el abogado Patricio Conteras Boero en su presentación de fojas 1.582 y siguientes (Tomo V)

II. QUE SE CONDENA con costas a LEONARDO REYES HERRERA, cédula de identidad N° 4.777.149-8, ya individualizado en calidad de **autor**, del delito **de secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, perpetrado en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco, a partir del 30 de septiembre de 1973, a la pena de **12 años de presidio mayor en su grado medio**, y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena

III. QUE SE CONDENA con costas a CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO, cédula de identidad N° 6.961.197-4, ya individualizado en calidad de **autor** del delito **de secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Jorge Eduardo Calderón Otaiza, perpetrado en la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile de la comuna de Temuco, a partir del 30 de septiembre de 1973, a la pena de **12 años de presidio mayor en su grado medio**, y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena

IV. Que respecto al acusado LEONARDO REYES HERRERA, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, no teniendo días privados de libertad con motivo de este proceso que le sirvan de abono, por haberse encontrado suspendida la prisión preventiva.

V. Que respecto al acusado **CRISÓSTOMO HUGO FERRADA CARRASCO**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, no teniendo días privados de libertad con motivo de este proceso que le sirvan de abono, por haberse encontrado suspendida la prisión preventiva.

VI.- La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde **que se presenten o sean habidos en la presente causa.**

VII.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuesta a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedentes.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

I.- Que **NO HA LUGAR a las excepciones** interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer en su presentación de fs. **1.535 a fs. 1.561 (Tomo V)**, esto es:

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada por preterición legal de la demandante y por haber sido ya reparada.

B. Excepción de prescripción extintiva.

Lo anterior, sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

II.- Que **HA LUGAR** a la Demanda Civil interpuesta por el abogado Héctor Méndez Molina a fojas 1.304 y siguientes (Tomo V) **condenándose a la parte demandada, Fisco de Chile, a pagar la suma de: 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos)** para doña **Aurora del Carmen Calderón Otaiza**.

III.- Las sumas anteriores deberán ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose a los tribunales para que citen a los sentenciados personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituyan en su domicilio si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia,

pronunciándose sobre las peticiones que hicieran los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentaran verbalmente recurso de apelación.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en secretaría del tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 114.033.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Juan Gabriel Lienan Lienan, Secretario (S) de la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a ocho de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.